

#10,00

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

No. 21, enero 2005

ISSN 1390-1249

CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53

Vol 9, Issue 1, January, 2005

Quito - Ecuador

FLACSO - Biblioteca

Donación de
FLACSO - Sede Ecuador



FLACSO

SEDE ACADÉMICA DE ECUADOR

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLACSO - Sede Ecuador



FLACSO

SEDE ACADÉMICA DE ECUADOR

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede Académica de Ecuador

Director de Flacso-Ecuador: Adrián Bonilla
Subdirector Académico: Felipe Burbano
Subdirector Administrativo: Leonidas Molina

ICONOS. Revista de Ciencias Sociales

Num. 21, enero 2005, Quito-Ecuador

ISSN: 1390-1249 / CDD: 300.5 / CDU: 3 / LC: H8 .S8 F53

(Vol. 9, Issue 1, January, 2005)

ICONOS es la revista especializada en ciencias sociales de Flacso-Ecuador. Fue fundada en 1997 y su objetivo es estimular un tipo de reflexión que vincule las inquietudes académicas de las ciencias sociales con problemas de la realidad social. La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas académicas, temas de debate social, político, cultural y económico del país, la región andina y el mundo en general.

Los artículos que se publican en la revista son de responsabilidad exclusiva de sus autores; no reflejan necesariamente el pensamiento de ICONOS. Para la selección de artículos se utiliza un sistema de arbitraje inter pares (*peer review*).

ICONOS se publica cuatrimestralmente en los meses de enero, mayo y septiembre. Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos siempre que se cite expresamente como fuente a *ICONOS. Revista de Ciencias Sociales*

ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales

Director

Eduardo Kingman Garcés (ekingman@flacso.org.ec)

Editor

Edison Hurrado (churrado@flacso.org.ec)

Consejo editorial

Felipe Burbano, Mauro Cerbino, Edison Hurrado, Hugo Jácome, Eduardo Kingman, Carmen Martínez, Franklin Ramírez, Alicia Torres

Coordinador del dossier "Conflictos por petróleo y gas natural en la Amazonía"

Guillaume Fontaine

Diseño y diagramación: Antonio Mena

Ilustraciones: Gonzalo Vargas

Impresión: Rispergraf

Envío de artículos, información, solicitud de canje: revistaiconos@flacso.org.ec

Suscripciones, pedidos y distribución: lalibreria@flacso.org.ec

© FLACSO-Ecuador

Casilla: 17-11-06362

Dirección: Ulpiano Páez N19-26 y Av. Patria. Quito-Ecuador

www.flacso.org.ec (resúmenes, abstracts y artículos anteriores disponibles on line)

Teléfonos +593-2- 232-029/030/031 Fax + 593-2-2566-139

CDD 300.5 / CDU 3 / LC: H8 .S8 F53

Iconos: revista de ciencias sociales.—Quito: Flacso-Ecuador, 1997-

v. : il. ; 28 cm.

Ene-Abr. 1997-

Cuatrimstral- enero-mayo-septiembre

ISSN: 1390-1249

1. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales-Ecuador. I. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

No. 21, enero 2005
ISSN 1390-1249
CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53
Vol 9, Issue 1, January, 2005
Quito - Ecuador

Sumario

Dossier

- Conflictos por petróleo y gas natural en la Amazonía** 9-10
Presentación del Dossier
Guillaume Fontaine
- Petróleo, seguridad ambiental y explotación petrolera
marina en Colombia** 11-17
Alfonso Avellaneda Cusarúa
- Impactos sociales de la actividad petrolera en Ecuador:
un análisis de los indicadores** 19-34
Teodoro Bustamante y María Cristina Jarrín
- Microconflictos ambientales y crisis de gobernabilidad
en la Amazonía ecuatoriana** 35-46
Guillaume Fontaine
- Camisea: ¿por qué cuesta tanto el gas barato?** 47-55
Carlos Soria
- Los conflictos ambientales del gas boliviano** 57-66
Marc Gavaldá Palacín

Debate

- El patrimonio como domesticación de la cultura** 69-77
Comentarios al Dossier de Íconos 20
Gey Espinheira

La desventura de ser soltero: introducción a la sociología rural de Pierre Bourdieu	81-90
--	-------

Luciano Martínez Valle

Encuentros artísticos con el dolor, la memoria y las violencias	91-104
--	--------

Pilar Riaño Alcalá

Coaliciones fantasmas, esencialismos políticos y corrupción	105-112
--	---------

Felipe Burbano de Lara

Reseñas

Francisco Delich. Repensar América Latina	115-117
--	---------

Carlos de la Torre

Guillaume Fontaine, Editor, Petróleo y Desarrollo Sostenible en Ecuador. 2. Las apuestas	118-120
---	---------

Pedro Elías Galindo León

Política editorial	122
--------------------------	-----

Normas para la presentación de originales	123
---	-----

Índice Revista Íconos 18	126
--------------------------------	-----

Índice Revista Íconos 19	127
--------------------------------	-----

Índice Revista Íconos 20	128
--------------------------------	-----

Conflictos por petróleo y gas natural en la Amazonía

Presentación del dossier

Guillaume Fontaine

Profesor Investigador de FLACSO Ecuador.

Desde la década de los noventa, la cuenca amazónica se ha convertido en una apuesta mayor de la globalización, especialmente para la explotación de recursos naturales. No sólo las políticas de conservación y la integración comercial, sino también el narcotráfico, la bioprospección, la explotación intensiva de madera, la minería, la extracción de petróleo y gas natural, las infraestructuras de transporte son algunos de los tantos temas de la agenda internacional que afectan a la selva y a sus habitantes. En el caso particular de los hidrocarburos, la región tiene una creciente importancia estratégica en la gobernanza energética global¹, que viene acompañada con una serie de amenazas para las comunidades locales y el medio ambiente, y que suele reforzar la dependencia de las economías nacionales. Desde luego, no cabe duda de que las políticas energéticas afectarán severamente la región en el próximo medio siglo, no sólo en las áreas de producción sino también en aquellas de procesamiento y transporte.

Es muy sintomático de este fenómeno la multiplicación de los conflictos ambientales en las dos últimas décadas, al tiempo que muchas críticas fueron formuladas en contra de los gobiernos y la industria de hidrocarburos por la deforestación, la contaminación crónica y los derrames masivos de petróleo crudo. Esta situación tiene mucha influencia en las políticas energéticas y económicas, pues algu-

nos conflictos radicales se volvieron obstáculos a mega proyectos como en los bloques 23 y 24 en Ecuador o el bloque Sirirí en Colombia. De hecho, hay un creciente esfuerzo de organización de la sociedad civil para el reconocimiento y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, así como para una mayor incidencia para la justicia social ante los gobiernos, los organismos de cooperación y las instituciones financieras internacionales. El dossier que presentamos a continuación da cuenta de la complejidad de esos conflictos. Hemos seleccionado los casos más significativos en cuatro países andinos –Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia– para evaluar los alcances de las políticas energéticas en términos de impactos sociales y ambientales.

El balance de cien años de actividades petroleras en Colombia, según Alfonso Avellaneda Cusarí, deja un saldo bastante negativo pues el Magdalena Medio, Arauca, Cazanare, el Putumayo y Amazonas son las zonas de mayor inseguridad ambiental y pobreza, a pesar de las bonanzas sucesivas que conllevaron la colonización de estos departamentos. Es más, el mapa petrolífero del país se superpone en gran medida con los escenarios de violencia y de exclusión social. Avellaneda explica que ni la creación del Consejo Colombiano de Seguridad, ni el Plan Nacional de Contingencia han sido suficientes para contrarrestar estos efectos perversos. Últimamente se licitaron millones de hectáreas para la exploración *off-shore*, sin que existiera la necesaria legislación ambiental específica para asegurar la protección de los recursos marinos.

¹ Cf. Varios Autores, 2000, *World Energy Assessment. Energy and the Challenge of Sustainability*, UNDP, New York.

En Ecuador, el artículo de Teodoro Bustamante y María Cristina Jarrín evidencia la correlación entre la presencia de la industria petrolera y la agudización de los déficits de infraestructura, equipamiento y calidad de viviendas, junto con los bajos indicadores de educación, salud y pobreza. A partir de un centenar de variables sociales, estos autores deducen que las actividades petroleras no son un factor determinante de bienestar para las poblaciones amazónicas, aunque no llegan a tratar los impactos ambientales generados por ellas. El artículo de Guillaume Fontaine analiza precisamente la correlación entre la contaminación y la multiplicación de conflictos en las áreas de explotación petroleras administradas por Petroecuador. La mala gestión ambiental en estas áreas crea un entorno hostil y se convierte en un factor de conflictos latentes y difusos. Más aún, la revisión de 2.600 actas de compensaciones, indemnizaciones y medidas diversas firmadas por la empresa estatal ecuatoriana entre 1994 y 2002, deja pensar que tampoco las relaciones comunitarias de la empresa constituyen una respuesta adecuada a las demandas de la población. Al convertirse en un mecanismo de mitigación y resolución de conflictos, estas medidas no permiten una resolución de los problemas estructurales de la región y sus habitantes, lo cual, *in fine*, se vuelve un factor de crisis de gobernabilidad para el país.

En Perú, el caso Camisea constituye un ejemplo más de las dificultades planteadas por la explotación de hidrocarburos en áreas sensibles, como lo explica Carlos Soria. Este autor menciona una serie de informes que denunciaron irregularidades a lo largo del proceso de negociación encabezado por el gobierno y los consorcios encargados de la extracción, el procesamiento y el transporte del gas natural de Camisea. Esta situación ha dado lugar a varias iniciativas por parte de la

sociedad civil, en particular ante el BID, para frenar la ejecución del proyecto. Sin embargo, dada la importancia de los intereses financieros en juego, las medidas tomadas fueron escasas y tanto los estudios de impacto ambiental como los acuerdos de indemnización fueron avalados en un plazo record. Soria concluye en la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la definición y ejecución de la política energética, así como de afianzar los mecanismos de control y rendición de cuentas de las autoridades estatales y del BID.

En Bolivia, los planes de ajuste estructural llevados a cabo desde medianos de los ochenta llevaron a la privatización completa de la empresa nacional YPFB y una política agresiva de licitación de los bloques hidrocarbúferos, así como la intensificación de la explotación de gas natural, como lo recuerda el artículo de Marc Gavaldá. Con una legislación ambiental poco apremiante, la mayoría de las áreas protegidas y de los territorios indígenas se superpusieron con el mapa energético del país, generando numerosos conflictos ambientales. Los más significativos son los que desató la construcción de tres gasoductos, a lo cual se sumó la “guerra del gas” provocada por el proyecto de exportar gas líquido por Chile.

La impresión general que se destaca del conjunto de artículos es que los impactos sociales y ambientales de las actividades hidrocarbúferas no han sido tomados en cuenta de manera satisfactoria, ni por la industria ni por las autoridades públicas. En este sentido es que se convierten en un problema de gobernabilidad democrática, entendida aquí como el equilibrio entre las demandas sociales y las respuestas del sistema institucional². Ahora bien, la manera en que se definirán las políticas públicas en los próximos años determinará la capacidad de los países amazónicos de enfrentar este reto, de tal modo que los conflictos ambientales no se vuelvan factores de una crisis social y ambiental en la región.

2 Cf. Antonio Camou, 2001, “Estudio preliminar”, en A. Camou *et al.*, 2001, *Los desafíos de la gobernabilidad*, FLACSO, Plaza y Valdés, México, p. 39.

Petróleo, seguridad ambiental y exploración petrolera marina en Colombia

Alfonso Avellaneda Cusarúa

Mtr: Gestión Ambiental

Universidad El Bosque y Universidad Pedagógica y Tecnológica (Colombia)

Email: jaavellaneda@yahoo.com

Fecha de recepción: septiembre 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

Este artículo reseña un siglo de las actividades petroleras en Colombia, sus consecuencias en los territorios indígenas, así como los riesgos ambientales y para la salud, destacando por -otra parte- el papel que han asumido algunas compañías para controlar esos riesgos. Se discute las implicaciones sociales y ambientales, directas e indirectas, de las distintas fases de las actividades petroleras en la parte continental del país, y sus relaciones históricas con los procesos de violencia donde ha habido explotación petrolera desde el siglo XX. Finalmente, se abre una discusión sobre la nueva política petrolera del Estado colombiano, con la exploración costa fuera y la ausencia de control ambiental para proteger los ecosistemas que subyacen la licitación de áreas para los próximos años, sin asumir el derecho internacional en la protección marina.

Palabras clave: Petróleo, riesgo ambiental, salud ambiental, violencia, Colombia

Abstract

A hundred year panorama is presented of oil activities in Colombia and their consequences on the indigenous territories, as well as the risks about the environment and health, standing out on the other hand the half-filled one that some oil companies have taken to control these risks. The direct and indirect environmental and social implications of the diverse phases of the oil activity are discussed in continental areas and their historical relationships with the processes of violence that one lives there where they have had oil exploitations during the XX century. Finally a discussion is presented on the new oil policy of the Colombian state in connection with the off-shore exploration and the absence of environmental controls to protect the marine ecosystems that underlie to the delivered areas for exploration during next years, ignoring the international legislation on the protection of the sea.

Key words: Oil, environmental risk, environmental health, violence, Colombia

Impactos sociales de la actividad petrolera en Ecuador: un análisis de los indicadores

Teodoro Bustamante* y María Cristina Jarrín**

*Postgrado en Estudios Políticos por FLACSO-Ecuador.
Coordinador del programa de Estudios Socio Ambientales de FLACSO-Ecuador.
Email: tbustamante@flacso.org.ec

**Mtr. (c) en Estudios Ambientales por FLACSO-Ecuador.
Asistente de investigación, programa de Estudios Socio Ambientales de FLACSO Ecuador.
Email: cjarrin@flacso.org.ec

Fecha de recepción: septiembre 2004
Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

El presente artículo explora en qué medida las zonas en las cuales se desarrolla la extracción petrolera, muestran similitudes y diferencias con el país y el resto de la Amazonía, en una gama de 100 indicadores estadísticos sociales particularidades. Se utilizaron datos provenientes de INFOPLAN, SIISE, series censales, e información petrolera. Se estudió el comportamiento de variables, las correlaciones entre ellas, se efectuó un análisis de componentes principales y dendogramas de agrupamiento de los cantones. El resultado es que existen aspectos en los cuales tales unidades administrativas se diferencian de las demás, pero la presencia de petróleo no es el principal factor que se asocia a la variación socioeconómica en la Amazonía ecuatoriana.

Palabras clave: Petróleo, Amazonía, indicadores sociales, correlaciones, Ecuador

Abstract

This paper analyzes in what measure, the oil production process in Eastern Ecuador shows a specific profile in a hundred social indicators. The data used come from INFOPLAN, SIISE, census series, and oil production information. The correlations between different figures analyzed are studied, factor analysis and clusters are used to establish different groupings. The results show that oil activity produces a specific profile, but is not the main factor that explains or is associated to the differences in social indicators in the Ecuadorian Amazon basin.

Key words: Oil, Amazon, social statistics, correlations, Ecuador

Microconflictos ambientales y crisis de gobernabilidad en la Amazonía ecuatoriana¹

Guillaume Fontaine

Doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Francia).

Profesor Investigador de FLACSO-Ecuador

Email: gfontaine@flacso.org.ec

Fecha de recepción: septiembre 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

Este artículo analiza la relación entre contaminación y conflictos ambientales en el norte de la Amazonía ecuatoriana. La idea central que se defiende es que el manejo de conflictos por la empresa petrolera del Ecuador, Petroecuador, puede llevar a negociaciones “eficientes” a corto plazo, a costa de la institucionalización de los arreglos y de un tratamiento de las causas estructurales de los conflictos. Este entorno, condicionado por una gestión ambiental inadecuada en el norte de la Amazonía, constituye el telón de fondo de los conflictos radicales en el centro y el sur de la región y seguirá siendo un marco referencial contra la política petrolera del Estado. En particular, el clima de tensión social que resulta de esta situación es agravado aún más por la mediatización del juicio contra Chevron-Texaco. Sin una redefinición de las políticas públicas –en particular políticas ambiental y social responsables y equitativas– este clima amenaza con desembocar en una crisis de gobernabilidad democrática.

Palabras clave: Petróleo, contaminación, Amazonía, conflictos ambientales, gobernabilidad democrática, Ecuador

Abstract

This paper analyzes the relationship between oil spills and ecological conflicts in the northern Amazon of Ecuador. The central idea is that conflict management by the state-owned oil company, Petroecuador, can lead to “efficient” negotiations in the short term, at the cost of a long-term perspective, that seeks the institutionalization of agreements and an effective treatment of the structural causes of environmental conflicts. This context is determined by an inadequate environmental management in the Northern Amazon and constitutes the background of wider protracted conflicts, in the Central and Southern parts of the region. Especially, the resulting tense social relationships are actually worsened by the mediatization of the Chevron-Texaco trial. As a matter of fact, it will probably remain the framework for oil policies. Without a redefinition of public policies –especially a responsible and equitable environmental and social policies– this could lead to a crisis of democratic governability.

Key words: Oil spills, pollution, Amazon, ecological conflicts, democratic governability, Ecuador

Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 21, Quito, enero 2005, pp. 35-46

© Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador.

ISSN: 1390-1249

1 Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el “Segundo Encuentro de Ecuatorianistas de LASA. Mesa 24: Gobernabilidad democrática y desarrollo sostenible” (Quito, 26/06/2004). Estoy muy agradecido del equipo del

Camisea: ¿por qué cuesta tanto el gas barato?

Carlos Soria

Ph.D. por The Flinders University of South Australia
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
Email: carsoria@ec-red.com

Fecha de recepción: septiembre 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

El caso Camisea muestra como las decisiones de invertir más o menos en las medidas sociales y ambientales de los megaproyectos terminan afectando a las poblaciones más vulnerables. Una detallada revisión de los impactos causados a lo largo del trazado del gasoducto permite mostrar la ineficiencia de los actuales esquemas de supervisión aplicados por el BID, el OSINERG y el Ministerio de Energía y Minas entre otros. El artículo revisa el aporte crucial de la sociedad civil organizada, a pesar de su fraccionamiento ideológico y práctico. Información detallada de las vulneraciones ocurridas confirman la lección aprendida que sugiere la necesidad de crear en el BID un auditor ambiental y social del BID, que reporte a un consejo tripartito de representantes de la sociedad civil, los pueblos indígenas y la banca multilateral.

Palabras clave: Amazonía, gas, indígenas, políticas, Derechos Humanos, Perú.

Abstract

The Camisea case shows that decisions to invest more or less in the social and environmental aspects mega-projects end up affecting the vulnerable populations. One detailed revision of the impacts caused throughout the layout of gas pipeline shows the inefficiency of current schemes of supervision applied by the I.A.D.B., the OSINERG and the Ministry of Energy and Mines among others. The paper reviews the crucial contribution of the organized civil society, in spite of its ideological and practical division. Detailed information of human rights affected confirm the learned lesson that suggests the need to create in the I.A.D.B. an environmental and social auditor of the project it finances, that reports to a tripartite council formed by civil society, indigenous peoples and multilateral banks representatives.

Key words: Amazon, Gas, Indigenous Peoples, Policies, Human Rights, Perú

Los conflictos ambientales del gas boliviano

Marc Gavaldá Palacín

Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Colabora con la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba-Bolivia)

Mail: guarapitu@cascall.org

Fecha de recepción: septiembre 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

Los ajustes neoliberales introducidos en la legislación boliviana han facilitado la apropiación de los recursos hidrocarburíferos por parte de las transnacionales petroleras. Estas compañías invaden territorios indígenas y áreas protegidas. En su accionar generan graves conflictos ambientales con las comunidades locales. La construcción de los gasoductos Bolivia-Brasil, Cuiabá y Gasyrg así como la oposición de la población a exportar gas a Estados Unidos nos reflejan cómo la población se organiza para resistir al expolio de las compañías petroleras. Las movilizaciones populares de “La Guerra del gas”, en octubre 2003 no han terminado, porque el gas sigue en manos extranjeras.

Palabras clave: compañía petrolera, gas natural, conflictos ambientales, gasoducto, territorios indígenas, Bolivia

Abstract

The Neoliberal Structural Adjustment introduced in Bolivian Law have facilitated the appropriation of the Hydrocarbon Resources by the transnational oil companies. These companies invade indigenous territories and protected areas. Their activities generate serious environmental conflicts with the local communities. The construction of the Bolivia-Brazil, Cuiabá and Gasyrg gas pipelines as well as the popular resistance to the exportation of gas to the USA illustrates how the people organize themselves to resist the pillage of the oil companies. The popular mobilizations of the “Gas War” in October have not yet finished, as the gas continues to be in foreign hands.

Key Words: Oil Company, Natural Gas, Environmental Conflicts, Gaspipeline, Indigenous Territories, Bolivia

El patrimonio como domesticación de la cultura

Comentarios al Dossier de ICONOS 20

Gey Espinheira

Dr. en Sociología. Profesor de la Universidade Federal da Bahia

Mail: gey.e@terra.com.br

Fecha de recepción: octubre 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Traducción del portugués: Nilma Martins.

Revisión final: Edison Hurtado

Resumen

Tres de los artículos publicados en el dossier de ICONOS 20 “Patrimonio, memoria y ‘regeneración’ urbana”, convergen en reconocer algunos efectos perversos de la restauración de centros históricos y espacios públicos. Este artículo explora los argumentos presentados en esos artículos y los entiende como parte de un proceso que, en nombre del turismo, domestica la cultura.

Palabras clave: patrimonio cultural, centros históricos, regeneración urbana, turismo, estudios urbanos, Quito, Guayaquil, Pelourinho

Abstract

Three of the articles formerly published in the dossier of the journal ICONOS 20 entitled “Patrimonio, memoria y ‘regeneración’ urbana” (Cultural Heritage, Memory and Urban Regeneration), recognize some of the perverse effects of the preservation and regeneration of Historic Centers and other public spaces. The present work explores the arguments developed by those articles, and approaches them in the context of a process that, in the name of tourism, domesticates culture.

Key Words: Cultural Heritage, Historic Centers, Urban Regeneration, Tourism, Urban Studies, Quito, Guayaquil, Pelourinho

La desventura de ser soltero: introducción a la sociología rural de Pierre Bourdieu

Luciano Martínez Valle

Dr. en Sociología. Profesor-Investigador de Flacso-Ecuador

Mail: lmartinez@flacso.org.ec

Fecha de recepción: julio 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

Este trabajo busca abrir la discusión sobre la metodología utilizada por Bourdieu para abordar la sociedad rural francesa. Lejos de ser una apología sobre el libro de Bourdieu “Le bal des célibataires”, se trata de una reflexión que recupera algunos temas pertinentes para el análisis de la sociedad rural de los andes del norte.

Palabras clave: Herencia, crisis campesina, matrimonio rural, habitus, campo social.

Abstract

This article explores the Bourdieu's methodology about French rural society. Far from being an apology of Pierre Bourdieu's book “Le bal des célibataires”, this is a critical reflection which retrieves some relevant subjects for the research of contemporary Andean rural society.

Key Words: Inheritance, peasant crisis, rural marriage, habitus, social champ

Encuentros artísticos con el dolor, las memorias y las violencias

Pilar Riaño Alcalá

Antropóloga, Ph.D. Universidad de Vancouver
Profesora de la Universidad Nacional de Colombia

Mail: pilar_riano@telus.net

Fecha de recepción: julio 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen: El artículo examina las pugnas del recuerdo y el olvido en comunidades afectadas y divididas por la violencia. Mira a un proyecto de arte público comunitario que reunió mi investigación antropológica sobre jóvenes, memoria y violencia, el trabajo de arte público de la artista Suzanne Lacy, el trabajo comunitario de una coalición de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y el liderazgo de un grupo de residentes del barrio Antioquia en Medellín (Colombia). El proyecto de arte comunitario creó un museo de la memoria en un bus de transporte público como lugar activador de procesos de elaboración del duelo tanto a nivel individual como colectivo y como lugar para imaginarse el futuro mientras que se confrontan aspectos del duelo, la coexistencia pacífica y la reconciliación.

Palabras claves: Arte público, memoria y violencia, Colombia

Abstract: The article examines the politics of remembering and forgetting in communities divided and affected by violence. It looks at a public art project that brought together my anthropological research on youth, memory, violence and place in Medellín, the public art work of visual artist Suzanne Lacy, the community work of a coalition of several local government and non government organizations and the leadership of a group of residents from Barrio Antioquia in Medellín (Colombia). The community art project created a museum of memory in a public transit bus as a meaningful place that activated processes of individual and collective mourning and that invited individuals and the community to envision the future and address issues of mourning, pacific co-existence and reconciliation.

Keywords: Public Art, Memory and Violence, Colombia

Coaliciones fantasmas, esencialismos políticos y corrupción

Felipe Burbano de Lara

Profesor-Investigador de Flacso-Ecuador

Mail: fburbano@flacso.org.ec

Fecha de recepción: noviembre 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

Este artículo reflexiona sobre la inclinación de los partidos políticos ecuatorianos a ocultar sus pactos y acuerdos. Sostiene que el funcionamiento de "coaliciones fantasmas" -como las ha definido el politólogo Andrés Mejía- hay que explicarlas en la necesidad de los partidos y de sus líderes de sostener -en el espacio público- identidades ligadas a principios de legitimación política y valores éticos irreductibles. La negociación política y los pactos con el gobierno, inevitables en democracia, son entendidos como daños irreversibles a la identidad política, un mestizaje inaceptable desde el punto de vista de la imagen pública. De allí que los acuerdos deban ser ocultados, negados, aún cuando la práctica cotidiana les empuje a buscarlos constantemente.

Palabras clave: Alianzas fantasmas, identidad política, espacio público, partidos políticos, liderazgos, corrupción

Abstract

This article reflects upon the trend of the Ecuadorian political parties of hiding their pacts and agreements. It sustains that the functioning of the "phantom coalitions" -as they have been defined by the politologist Andrés Mejía- should be explained in the necessity of the parties and their leaders, of maintaining, in the public scenario, identities that confirm the political legitimation and irreducible ethic values. The political negotiations and the agreements with the government, all inevitable in a democracy, are understood as irretrievable damages to the political identity, as unacceptable merge according to the point of view of the public image. Thus, these pacts should be hidden, denied, done under the table, eventhough the daily practice obliges to look for them constantly.

Key Words: Phantom coalitions, Political Identity, Public Sphere, Political Parties, Leaderships, Corruption

Conflictos por petróleo y gas natural en la Amazonía

Presentación del dossier

Guillaume Fontaine

Profesor Investigador de FLACSO Ecuador.

Desde la década de los noventa, la cuenca amazónica se ha convertido en una apuesta mayor de la globalización, especialmente para la explotación de recursos naturales. No sólo las políticas de conservación y la integración comercial, sino también el narcotráfico, la bioprospección, la explotación intensiva de madera, la minería, la extracción de petróleo y gas natural, las infraestructuras de transporte son algunos de los tantos temas de la agenda internacional que afectan a la selva y a sus habitantes. En el caso particular de los hidrocarburos, la región tiene una creciente importancia estratégica en la gobernanza energética global¹, que viene acompañada con una serie de amenazas para las comunidades locales y el medio ambiente, y que suele reforzar la dependencia de las economías nacionales. Desde luego, no cabe duda de que las políticas energéticas afectarán severamente la región en el próximo medio siglo, no sólo en las áreas de producción sino también en aquellas de procesamiento y transporte.

Es muy sintomático de este fenómeno la multiplicación de los conflictos ambientales en las dos últimas décadas, al tiempo que muchas críticas fueron formuladas en contra de los gobiernos y la industria de hidrocarburos por la deforestación, la contaminación crónica y los derrames masivos de petróleo crudo. Esta situación tiene mucha influencia en las políticas energéticas y económicas, pues algu-

nos conflictos radicales se volvieron obstáculos a mega proyectos como en los bloques 23 y 24 en Ecuador o el bloque Sirirí en Colombia. De hecho, hay un creciente esfuerzo de organización de la sociedad civil para el reconocimiento y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, así como para una mayor incidencia para la justicia social ante los gobiernos, los organismos de cooperación y las instituciones financieras internacionales. El dossier que presentamos a continuación da cuenta de la complejidad de esos conflictos. Hemos seleccionado los casos más significativos en cuatro países andinos –Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia– para evaluar los alcances de las políticas energéticas en términos de impactos sociales y ambientales.

El balance de cien años de actividades petroleras en Colombia, según Alfonso Avellaneda Cusarí, deja un saldo bastante negativo pues el Magdalena Medio, Arauca, Cazanare, el Putumayo y Amazonas son las zonas de mayor inseguridad ambiental y pobreza, a pesar de las bonanzas sucesivas que conllevaron la colonización de estos departamentos. Es más, el mapa petrolífero del país se superpone en gran medida con los escenarios de violencia y de exclusión social. Avellaneda explica que ni la creación del Consejo Colombiano de Seguridad, ni el Plan Nacional de Contingencia han sido suficientes para contrarrestar estos efectos perversos. Últimamente se licitaron millones de hectáreas para la exploración *off-shore*, sin que existiera la necesaria legislación ambiental específica para asegurar la protección de los recursos marinos.

¹ Cf. Varios Autores, 2000, *World Energy Assessment. Energy and the Challenge of Sustainability*, UNDP, New York.

En Ecuador, el artículo de Teodoro Bustamante y María Cristina Jarrín evidencia la correlación entre la presencia de la industria petrolera y la agudización de los déficits de infraestructura, equipamiento y calidad de viviendas, junto con los bajos indicadores de educación, salud y pobreza. A partir de un centenar de variables sociales, estos autores deducen que las actividades petroleras no son un factor determinante de bienestar para las poblaciones amazónicas, aunque no llegan a tratar los impactos ambientales generados por ellas. El artículo de Guillaume Fontaine analiza precisamente la correlación entre la contaminación y la multiplicación de conflictos en las áreas de explotación petroleras administradas por Petroecuador. La mala gestión ambiental en estas áreas crea un entorno hostil y se convierte en un factor de conflictos latentes y difusos. Más aún, la revisión de 2.600 actas de compensaciones, indemnizaciones y medidas diversas firmadas por la empresa estatal ecuatoriana entre 1994 y 2002, deja pensar que tampoco las relaciones comunitarias de la empresa constituyen una respuesta adecuada a las demandas de la población. Al convertirse en un mecanismo de mitigación y resolución de conflictos, estas medidas no permiten una resolución de los problemas estructurales de la región y sus habitantes, lo cual, *in fine*, se vuelve un factor de crisis de gobernabilidad para el país.

En Perú, el caso Camisea constituye un ejemplo más de las dificultades planteadas por la explotación de hidrocarburos en áreas sensibles, como lo explica Carlos Soria. Este autor menciona una serie de informes que denunciaron irregularidades a lo largo del proceso de negociación encabezado por el gobierno y los consorcios encargados de la extracción, el procesamiento y el transporte del gas natural de Camisea. Esta situación ha dado lugar a varias iniciativas por parte de la

sociedad civil, en particular ante el BID, para frenar la ejecución del proyecto. Sin embargo, dada la importancia de los intereses financieros en juego, las medidas tomadas fueron escasas y tanto los estudios de impacto ambiental como los acuerdos de indemnización fueron avalados en un plazo record. Soria concluye en la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la definición y ejecución de la política energética, así como de afianzar los mecanismos de control y rendición de cuentas de las autoridades estatales y del BID.

En Bolivia, los planes de ajuste estructural llevados a cabo desde medianos de los ochenta llevaron a la privatización completa de la empresa nacional YPF y una política agresiva de licitación de los bloques hidrocarbúricos, así como la intensificación de la explotación de gas natural, como lo recuerda el artículo de Marc Gavaldá. Con una legislación ambiental poco apremiante, la mayoría de las áreas protegidas y de los territorios indígenas se superpusieron con el mapa energético del país, generando numerosos conflictos ambientales. Los más significativos son los que desató la construcción de tres gasoductos, a lo cual se sumó la “guerra del gas” provocada por el proyecto de exportar gas líquido por Chile.

La impresión general que se destaca del conjunto de artículos es que los impactos sociales y ambientales de las actividades hidrocarbúricas no han sido tomados en cuenta de manera satisfactoria, ni por la industria ni por las autoridades públicas. En este sentido es que se convierten en un problema de gobernabilidad democrática, entendida aquí como el equilibrio entre las demandas sociales y las respuestas del sistema institucional². Ahora bien, la manera en que se definirán las políticas públicas en los próximos años determinará la capacidad de los países amazónicos de enfrentar este reto, de tal modo que los conflictos ambientales no se vuelvan factores de una crisis social y ambiental en la región.

2 Cf. Antonio Camou, 2001, “Estudio preliminar”, en A. Camou *et al.*, 2001, *Los desafíos de la gobernabilidad*, FLACSO, Plaza y Valdés, México, p. 39.

Petróleo, seguridad ambiental y exploración petrolera marina en Colombia

Alfonso Avellaneda Cusarúa

Mtr: Gestión Ambiental
Universidad El Bosque y Universidad Pedagógica y Tecnológica (Colombia)
Email: jaavellaneda@yahoo.com

Fecha de recepción: septiembre 2004
Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

Este artículo reseña un siglo de las actividades petroleras en Colombia, sus consecuencias en los territorios indígenas, así como los riesgos ambientales y para la salud, destacando por -otra parte- el papel que han asumido algunas compañías para controlar esos riesgos. Se discute las implicaciones sociales y ambientales, directas e indirectas, de las distintas fases de las actividades petroleras en la parte continental del país, y sus relaciones históricas con los procesos de violencia donde ha habido explotación petrolera desde el siglo XX. Finalmente, se abre una discusión sobre la nueva política petrolera del Estado colombiano, con la exploración costa fuera y la ausencia de control ambiental para proteger los ecosistemas que subyacen la licitación de áreas para los próximos años, sin asumir el derecho internacional en la protección marina.

Palabras clave: Petróleo, riesgo ambiental, salud ambiental, violencia, Colombia

Abstract

A hundred year panorama is presented of oil activities in Colombia and their consequences on the indigenous territories, as well as the risks about the environment and health, standing out on the other hand the half-filled one that some oil companies have taken to control these risks. The direct and indirect environmental and social implications of the diverse phases of the oil activity are discussed in continental areas and their historical relationships with the processes of violence that one lives there where they have had oil exploitations during the XX century. Finally a discussion is presented on the new oil policy of the Colombian state in connection with the off-shore exploration and the absence of environmental controls to protect the marine ecosystems that underlie to the delivered areas for exploration during next years, ignoring the international legislation on the protection of the sea.

Key words: Oil, environmental risk, environmental health, violence, Colombia

Cien años de la actividad petrolera en Colombia

En Colombia el contacto del hombre con este aceite natural se produjo desde los albores de las culturas indígenas que poblaron y se desarrollaron en el valle del Magdalena. Los manaderos naturales cercanos a Barrancabermeja, sobre el río Oponcito, aparecen registrados por los españoles como utilizados por los indígenas yarigués (Avellaneda Cusarí, 1998).

En poco más de un siglo de explotación petrolera en Colombia podemos caracterizar las siguientes fases: magdalénico-motilona (1908-1930 y 1930-1960); costeña (1910-1920 y 1945-1970); amazónica (1960-1970) y llanera (1935-1940 y 1975-2002).

Durante todo este periodo la actividad petrolera ha contribuido a la transformación de los paisajes naturales, a la dinamización de la colonización y a la formación de pueblos y regiones, que se han abierto llevándose tras de sí a decenas de culturas indígenas e introduciendo patrones extractivos, que a la postre han contribuido a la degradación del medio ambiente, la corrupción de las clases dirigentes locales y regionales, al incremento de la pobreza y la violencia. Un balance de cien años de explotación petrolera en Colombia muestra que el Magdalena Medio, Arauca y Casanare en los Llanos Orientales y Putumayo en el Amazonas son hoy las zonas de mayor conflicto social y político, de mayor inseguridad ambiental y de mayor pobreza, a pesar de las sucesivas bonanzas petroleras. Es un balance poco alentador que nos lleva a pensar que las cosas no han sido hechas de la mejor manera.

Riesgos y seguridad ambiental en la industria petrolera

Si bien existe una amplia gama de temas que tienen que ver con la seguridad, para el caso

que nos ocupa nos remitiremos a aspectos que tienen que ver con *la seguridad ambiental*, entendida como las relaciones existentes entre el proyecto, los ecosistemas y la *salud ambiental* de la población. Partimos de reconocer la necesidad de la sustentabilidad ambiental de una actividad como la petrolera, como ese estado de las relaciones proyecto-ambiente que aseguran la conservación de los ecosistemas y una permanencia de las actividades petroleras, cuando éstas se adaptan a las ofertas ambientales y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas que las soportan.

La salud ambiental la consideramos como la resultante del equilibrio dinámico entre el hombre y su medio, entre las fuerzas productivas que desata y estimula la actividad petrolera y la oferta ambiental; entre cultura, individuo y comunidad; entre necesidades fundamentales satisfechas de una población y los flujos energéticos, y está relacionada, en éste ámbito, a los aspectos de riesgo que van apareciendo en la medida que la actividad petrolera se va expandiendo y desarrollando desde la exploración hasta el consumo final de los combustibles fósiles.

Los análisis epidemiológicos han mostrado una clara asociación entre los factores de riesgo ambientales y los cuadros de morbilidad. Esta consideración obliga a determinar la casuística del proceso salud - enfermedad. Los elementos del ambiente que mayor peso tienen en la ocurrencia, magnitud y trascendencia que afectan a los países en desarrollo son del siguiente orden: deficiente saneamiento básico: agua potable, disposición sanitaria de excretas y basuras; contaminación ambiental de aguas, aire, suelos, flora y espacios públicos; ausencia o deficiencia en la calidad de los alimentos; precaria situación de la vivienda y criaderos de vectores (Calderón Llantén *et al.*, 1995).

La presencia de alguno(s) de estos factores en las zonas petroleras, relacionados con impactos directos o indirectos, sinérgicos o acumulativos, residuales o persistentes, genera-

dos durante el desarrollo de la misma, hacen insostenible y por lo tanto insegura ambientalmente la actividad petrolera en cuanto a salud ambiental se refiere.

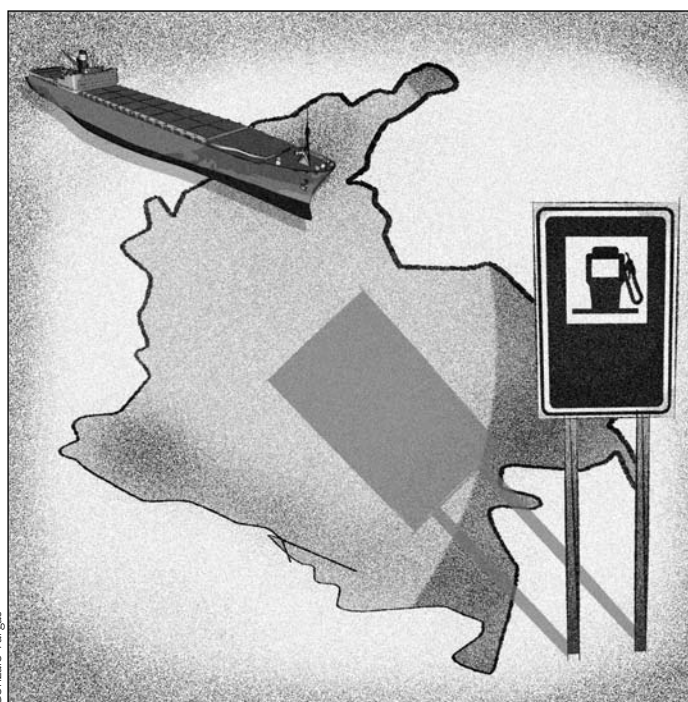
Como puede observarse, estos factores están relacionados con la *calidad ambiental*, la *integridad ecosistémica* y manifiestan una *desarmonía* entre las actividades antrópicas y la naturaleza. De esta forma, los cambios ambientales y su relación con la salud, son diversos e interrelacionados. Por una parte los flujos energéticos y el crecimiento de la entropía condicionan los fenómenos globales que permiten el sostenimiento de la vida en el planeta (Avellaneda Cusarí, 2002). De otra parte, se crean las condiciones que actúan como productoras y facilitadoras de los procesos de enfermedad. El desorden causado por el hombre sobre el medio natural, genera mayores posibilidades de ambientes inseguros y por lo tanto mayores enfermedades. Estas alteraciones se denominan *riesgos* en cuanto constituyen un evento productor de una consecuencia no deseada (Calderón Llantén *et al.*, 1995:76).

En la legislación colombiana se contempla el *análisis de riesgo* como el estudio o evaluación de las circunstancias, eventualidades o contingencias que en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad puedan generar peligro o daño a la salud humana, al medio ambiente y a los recursos naturales¹.

En el cuadro de la siguiente página se establecen las relaciones de carácter ambiental entre las actividades petroleras en sus diferentes procesos y el medio local, en la cual se destacan aquellas que tienen relación directa con la seguridad ambiental.

Seguridad y control ambiental

En Colombia desde mediados de la década de 1980 se ha venido trabajando el tema de



Gonzalo Vargas

seguridad industrial relacionado estrechamente con el control ambiental. Dinamizado por la industria petrolera se crea el Consejo Colombiano de Seguridad, para atender y asesorar los aspectos relacionados con la seguridad y el control ambiental en la industria. Empresas como Occidental de Colombia desde 1985 crearon gerencias para atender estos aspectos y otras los desarrollaron por los siguientes diez años hasta establecerse como departamentos independientes. En el caso de Ecopetrol, la empresa ha mantenido diferenciado el control ambiental de la seguridad industrial. Para los años 1993-1996 el Inderena (Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, en asocio con Ecopetrol, promovieron dentro de la industria petrolera los estudios y mapas de riesgos para todas las fases de esta actividad, así como los Planes de Manejo Ambiental y Contingencia que ya se venían diseñando y cumpliendo parcialmente desde 1986.

¹ Ministerio de Ambiente, Decreto 1753 de 1994 sobre licencias ambientales, artículo 1.

Cuadro 1 Transformaciones relacionadas con la seguridad ambiental	
Actividad	Transformación
Exploración	-Alteración de ecosistemas naturales y antrópicos por la construcción de vías de penetración y construcción de campamentos: tala, cambios en los cursos de aguas, desestabilización de taludes naturales; procesos intensivos de colonización por las vías construidas para la exploración y en los alrededores de los campamentos; ampliación de la frontera agrícola facilitada por la apertura de vías; creación de expectativas económicas poco sólidas y a corto plazo; desconocimiento de la territorialidad indígena; pérdida de la identidad cultural y desarraigo.
Explotación	Vertimientos de agua contaminada y lodos a esteros y ríos; contaminación fuentes de agua superficial y subterránea por la disposición permanente de vertimientos salinos a los cuerpos de agua; transformación de los drenajes naturales con la apertura de vías y oleoductos; vertimiento de aguas negras de los campamentos a la red hídrica; producción de ruidos intensos; hibridación cultural; cambio en la escala de valores éticos y morales reflejados en la gobernabilidad, violencia, inseguridad, proliferación de actores sociales al margen de la ley; ruptura del núcleo familiar y por ende del tejido social: prostitución, madres solteras, indigentes; subutilización del recurso petrolero en el ámbito regional: grandes riquezas naturales asociadas con altos índices de pobreza; pérdida del capital ambiental; pérdida de identidad cultural: desarraigo; cambios drásticos en la economía local: sobreprecios en los productos de consumo más común; aparición de economías no formales.
Transporte	Alteración de los ecosistemas que son atravesados por los oleoductos; incendio de ecosistemas por accidentes o sabotajes; generación de amenaza permanente por la presencia superficial de oleoductos; crecimiento desordenado de ciudades y pueblos.
Refinación	Contaminación de aire por emisiones de gases y ruidos; contaminación térmica y química del agua; alto consumo de agua en el proceso, lo cual implica su contaminación; inadecuada disposición de los grandes volúmenes de residuos sólidos; generación de amenaza por la presencia de grandes volúmenes almacenados de combustibles inflamables; crecimiento desordenado de ciudades y pueblos; cambios drásticos en la economía local y sobreprecios en los productos de mayor consumo.
Consumo	Expulsión de gases contaminantes y energía en forma de calor a la atmósfera: cambio climático global; generación de ruido.

Durante este periodo se tomaron medidas como el sistema de “mínima descarga” que comprendía la recirculación de fluidos de perforación exploratoria y de las aguas residuales industriales; la obtención de cortes de perforación con mínimo arrastre de lodo; las lagunas de estabilización y floculación como tratamientos primarios de las aguas residuales industriales; la inyección de aguas de formación a formaciones geológicas evitando su

descarga a las aguas superficiales; rellenos sanitarios de seguridad para residuos sólidos especiales; perforación de varios pozos direccionales desde una misma plataforma; la utilización de bioremediación para la degradación de lodos aceitosos². Debido a esta situación se creó el Plan Nacional de Contingencia, que es una estrategia medio ambiental y de prevención de desastres que permite afianzar y fortalecer las operaciones de res-

puesta existentes en el país y crear un marco de desarrollo en aquellos ámbitos nacionales donde no se cuenta con esquemas adecuados para prevención y atención de derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en el medio marino, fluvial o lacustre. En el ámbito internacional, El Plan Nacional de Contingencia permitió fortalecer e implementar acuerdos binacionales de cooperación para prevenir y enfrentar derrames de gran magnitud.

La situación nacional, la violencia y las actividades petroleras

El petróleo ha estado en el centro de los conflictos sociales y políticos de la historia reciente de Colombia. Tal como se vislumbra a través de las diversas fases de ocupación de territorios por actividades petroleras a lo largo del siglo XX, éstas han ido acompañadas de la migración, la construcción de nuevos pueblos, el desplazamiento y subyugación de culturas locales. En el mapa de Colombia, los escenarios de violencia, desafortunadamente coinciden con territorios donde ha habido o hay yacimientos y bonanzas petroleras³. En el reciente Seminario Internacional sobre “Colombia en la Aldea Global”⁴ se destacaba que la causa principal de la inseguridad que se vive actualmente en Colombia se corresponde con la exclusión de la mayoría

de los actores sociales de las decisiones y beneficios del desarrollo. Este factor ha caracterizado a la explotación petrolera en Colombia (Avellaneda Cusarúa, 1988). La situación obliga a plantear que la actividad petrolera para neutralizar los factores de inseguridad que acompaña su desarrollo, deberá orientar grandes esfuerzos a la inclusión de la población en los beneficios que se derivan de la explotación del recurso, fortaleciendo la capacidad de gobernabilidad de las localidades y las regiones, asoladas por la corrupción y la falta de una planificación y gestión adecuadas.

Perspectivas

Las críticas a la actividad petrolera apuntan desde varios vértices sociales, políticos, económicos y culturales. Todas parecen coincidir en que se requieren profundas reformas que vayan más allá de los ajustes tecnológicos (de por sí disponibles para neutralizar impactos ambientales negativos sobre los ecosistemas) y se orienten más a realizar una actividad petrolera con inclusión social, económica y cultural de las poblaciones, en su mayoría campesinas e indígenas, que han habitado por centurias en los territorios donde se descubre el petróleo. Podríamos hablar entonces de una explotación sustentable, que partiera de la valoración costo-beneficio social y cultural que tendrían las actividades petroleras, frente a recursos como la biodiversidad, la etnodiversidad, la heterogeneidad y las armonías regionales históricas, reconociendo las *inconmensurabilidades económicas* de la cultura y la territorialidad. Obviamente ello implicaría manejos económicos de relativa autonomía de las regiones y de los Estados frente a intereses de las transnacionales petroleras, tendencia que hay que fortalecer para avanzar en la seguridad ambiental petrolera.

2 Esta actividad está basada en investigación adelantada por el Instituto Colombiano del Petróleo y en la formulación y puesta en práctica del Plan Nacional de Contingencia por Derrames de Hidrocarburos. Este Plan se sustenta en sistemas inteligentes de reacción rápida para atender fundamentalmente eventos relacionados con voladuras de oleoductos y gasoductos provocados por factores de violencia que han tomado a la industria petrolera como objetivo durante los últimos 16 años, especialmente en el corredor Arauca-Coveñas.

3 Cf. ECOPEL, 10/2002, “Mapa de Tierras”.

4 II Seminario Internacional de Planeta Paz “Colombia en la Aldea Global”, Bogotá, noviembre 14-15 de 2002.

La nueva política petrolera: buscando petróleo en costas y mares

Según el Ministro de Minas y Energía de la administración Uribe, desde el 2003 se inició una nueva fase de exploración petrolera gracias al Convenio suscrito por el gobierno nacional y las transnacionales del petróleo representadas por la Asociación Colombiana del Petróleo. Este convenio tiene que ver con facilitar la exploración petrolera, especialmente en lo que se refiere a las licencias ambientales, considerando un eventual agotamiento de las reservas descubiertas para el año 2007, y además porque, en éstas áreas, la seguridad con respecto a los factores de violencia social y política que afectan a las zonas petroleras en tierra firme, sería baja.

En los últimos años, Ecopetrol ha puesto a disposición para exploración de las empresas petroleras una extensión de más de 30 millones de hectáreas en las zonas costeras, los mares territoriales y las zonas económicas exclusivas costa afuera, mientras el Ministerio de Medio Ambiente, que ha tenido una precaria gestión sobre los mares y sus ecosistemas, ha venido disminuyendo las exigencias para las actividades de hidrocarburos *En el caso de las actividades petroleras costa afuera, no existe ninguna legislación específica que proteja los recursos marinos vivos.* Y si nos atenemos al Decreto 1180 de 2003 sobre licencias ambientales, solo se contempla la obligación de obtener licencia a las actividades de exploración sísmica, *cuando requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular,* quedando de hecho excluidas de esta obligación este tipo de actividades en el mar.

Esta legislación está acorde con el abandono de la gestión de los ecosistemas costeros y marinos que tradicionalmente ha tenido el Estado colombiano. Habría que recordar que durante el montaje del proyecto Caño Limón – Coveñas, en 1985-1986, para la construcción del oleoducto submarino de la costa a la plata-

forma de embarque en el Golfo de Morrosquillo se destruyeron arrecifes de coral (como lo constató el Inderena) debido a esta intervención, y que derrames de crudo durante la operación del proyecto han afectado gravemente los ecosistemas marinos y costeros del Golfo, afectando la oferta pesquera de la que subsisten cientos de familias de pescadores artesanales.

Los estudios ambientales que se realizaron en años anteriores para la exploración sísmica costa afuera estuvieron limitados por la precaria información existente sobre el estado de los ecosistemas marinos, particularmente en los mares frente a la Guajira y el Golfo de Urabá, donde se desarrollaron este tipo de actividades a finales en la década de 1980 y principios de la década de 1990. Por ejemplo, es conocido que los sistemas de prospección sísmica trabajan en base a explosiones de aire que generan ondas sonoras, sin que hasta ahora se conozcan estudios que concluyan sobre el impacto que este tipo de ondas pueda tener sobre especies marinas, especialmente los cetáceos y otros mamíferos marinos que se comunican a grandes distancias por medio de sonidos. Tampoco se sabe nada sobre el impacto en cardúmenes de peces y sobre especies de coral que se conocen son muy sensibles a este tipo de intervenciones, factores estos que además *pueden afectar la oferta pesquera, especialmente en zonas de pesca artesanal en las costas Atlántica y Pacífica de la que viven miles de poblaciones de pescadores pobres en esta región.*

Por otra parte, los convenios internacionales que tienen relación con la protección de los mares y sus recursos marinos vivos (como el Convenio para la protección y manejo de áreas marinas y costeras del Pacífico Sureste, la Convención de Londres sobre vertimientos al mar, la Convención de Cartagena que se relaciona con el plan de acción del gran Caribe y la Convención de Ramsar sobre humedales, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del mar o Ley del mar, la Convención de diversidad biológica, los acuerdos de

la Organización Marítima Internacional y los recientes acuerdos plasmados en el Plan de implementación de la Cumbre de desarrollo sustentable de Johannesburgo) dan prioridad a la protección de los ecosistemas marinos, sin que hasta ahora ninguno de estos instrumentos haya sido tenido en cuenta por el gobierno colombiano para la protección del medio ambiente marino, en relación con las actividades petroleras costeras y marítimas.

Este último Plan considera en su párrafo 34 (literal c):

“Crear capacidad en ciencia, información y gestión marina, mediante, entre otras cosas, la promoción del uso de evaluaciones de impacto ambiental y técnicas de evaluación y presentación de informes sobre el medio ambiente en relación con proyectos o actividades que puedan ser dañinos para los entornos costeros y marinos y sus recursos vivos y no vivos”

Es de señalar que, teniendo en cuenta la legislación vigente, es competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial este tipo de gestión.

A nivel internacional incluso son más cuidadosos en relación con la protección de los recursos marinos vivos. Así, por ejemplo, recientemente la *International Finance Corporation* ha emitido unas Guías Ambientales⁵ que deben ser tenidas en cuenta por las empresas petroleras en relación con el desarrollo de actividades petroleras y de gas costa afuera. Entre ellas se destacan los siguientes aspectos: control de efluentes y desechos de peligrosos como residuos de pinturas, solventes, cementos; control a materiales radioactivos; control de efluentes de grasas y aceites, fluidos de perforación, sustancias contaminantes disueltas en agua, aceite Diesel, aditivos y químicos, efluentes sanitarios y aguas refrige-

radas menores de 3° C; realización previa de bioensayos con especies marinas locales, aprobadas por las autoridades ambientales, tales como camarones que son altamente sensibles a sustancias químicas y algunas especies de anfípodos que son sensibles a las descargas de fluidos de la exploración petrolera.

Nos preguntamos entonces, ¿cuáles de estas medidas y otras de protección del medio marino están consideradas para la exploración petrolera aprobada en el mar, frente a los departamentos de Bolívar y Atlántico y en la Guajira? ¿Qué tipo de monitoreo se está adelantando por parte del Ministerio de Medio Ambiente para la conservación y protección de los recursos marinos vivos? ¿Qué información ha sido suministrada a las comunidades de pescadores, a lo largo de las zonas costeras del Pacífico y el Atlántico, sobre las actividades petroleras aprobadas o en aprobación? ¿Van a quedar desprotegidas las 30 millones de hectáreas de mar territorial y zonas económicas exclusivas, frente a las actividades petroleras, tal como lo han sido hasta ahora por las actividades en la Bahía de Cartagena, en el terminal de Tumaquito y en Bahía Huckel en San Andrés?

El gobierno y los pescadores tienen la palabra.

Bibliografía

- Avellaneda Cusarí, Alfonso, 1998, *Petróleo, Colonización y Medio Ambiente en Colombia*, Ecoe ediciones, Bogotá.
- Avellaneda Cusarí, Alfonso, 2002, *Gestión Ambiental y Planificación del Desarrollo*, Ecoe ediciones, Bogotá.
- Calderón, Carlos; Romero, Fernando y Gómez, Luis, 1995, *Salud Ambiental y Desarrollo*, Ecosolar Ltda, Bogotá.
- Hoyos, María Cristina, Salazar, Oscar Iván, 1997, “El eterno cuarto de hora. Movilidad espacial en ciudades de zonas de expansión: Los casos de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare)”, Universidad de los Andes, Documento CEDE-97-06, Bogotá.
- Varios Autores, 1999, *Casanare, Características Geográficas*, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá.

5 Cf. URL: www.ifc.org/enviro/enviro/pollution/oil&gas2002.doc

Impactos sociales de la actividad petrolera en Ecuador: un análisis de los indicadores

Teodoro Bustamante* y María Cristina Jarrín**

*Postgrado en Estudios Políticos por FLACSO-Ecuador.
Coordinador del programa de Estudios Socio Ambientales de FLACSO-Ecuador.
Email: tbustamante@flacso.org.ec

**Mtr. (c) en Estudios Ambientales por FLACSO-Ecuador.
Asistente de investigación, programa de Estudios Socio Ambientales de FLACSO Ecuador.
Email: cjarrin@flacso.org.ec

Fecha de recepción: septiembre 2004
Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

El presente artículo explora en qué medida las zonas en las cuales se desarrolla la extracción petrolera, muestran similitudes y diferencias con el país y el resto de la Amazonía, en una gama de 100 indicadores estadísticos sociales particularidades. Se utilizaron datos provenientes de INFOPLAN, SIISE, series censales, e información petrolera. Se estudió el comportamiento de variables, las correlaciones entre ellas, se efectuó un análisis de componentes principales y dendogramas de agrupamiento de los cantones. El resultado es que existen aspectos en los cuales tales unidades administrativas se diferencian de las demás, pero la presencia de petróleo no es el principal factor que se asocia a la variación socioeconómica en la Amazonía ecuatoriana.

Palabras clave: Petróleo, Amazonía, indicadores sociales, correlaciones, Ecuador

Abstract

This paper analyzes in what measure, the oil production process in Eastern Ecuador shows a specific profile in a hundred social indicators. The data used come from INFOPLAN, SIISE, census series, and oil production information. The correlations between different figures analyzed are studied, factor analysis and clusters are used to establish different groupings. The results show that oil activity produces a specific profile, but is not the main factor that explains or is associated to the differences in social indicators in the Ecuadorian Amazon basin.

Key words: Oil, Amazon, social statistics, correlations, Ecuador

El presente análisis es el resultado de una experiencia de trabajo sobre los impactos ambientales causados por la explotación de hidrocarburos en el Ecuador¹. Una revisión sobre el tratamiento que han recibido los temas específicamente ambientales nos permite ver que su abordaje se ha centrado en la descripción de algunas variables tales como los derrames de petróleo, la superficie deforestada, algunos efectos epidemiológicos, entre otros (Kimerling, 1993; Varea *et al.*, 1995; San Sebastián *et al.*, 2004).

Sin embargo, la experiencia de campo nos ha mostrado que los aspectos más importantes de los impactos de la actividad petrolera se ubican a nivel de los procesos sociales. Nuestra percepción es que tales impactos no han sido trabajados de manera sistemática, ni han sido hasta el momento realmente dimensionados. Por lo tanto, el propósito del presente trabajo es sistematizar la información disponible sobre la realidad social existente en las regiones en las cuales se desarrolla actividad petrolera y comparar esta información con la existente respecto a otras zonas, analizando así las tendencias específicas de evolución social en las zonas de actividad petrolera.

Esta iniciativa está marcada por dos preguntas. Primero, ¿cuáles son las diferencias que existen en la estructura y en el tejido social entre las zonas en las cuales se desarrolla actividad petrolera y aquellas en las cuales esto no sucede? Segundo, ¿cuáles son los perjuicios, problemas y dificultades que la explotación petrolera produce en las zonas en las que se desarrolla esta actividad?

Enunciar estas preguntas implica asumir algunos presupuestos. El más importante de ellos es que la actividad petrolera marca -de

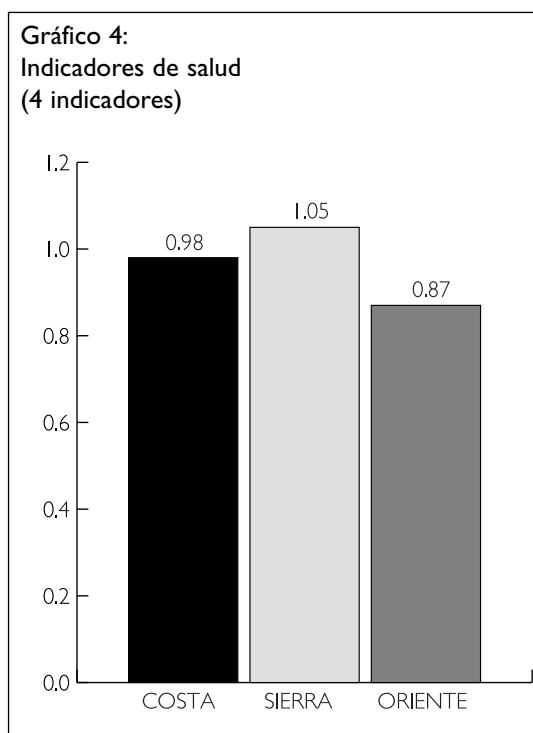
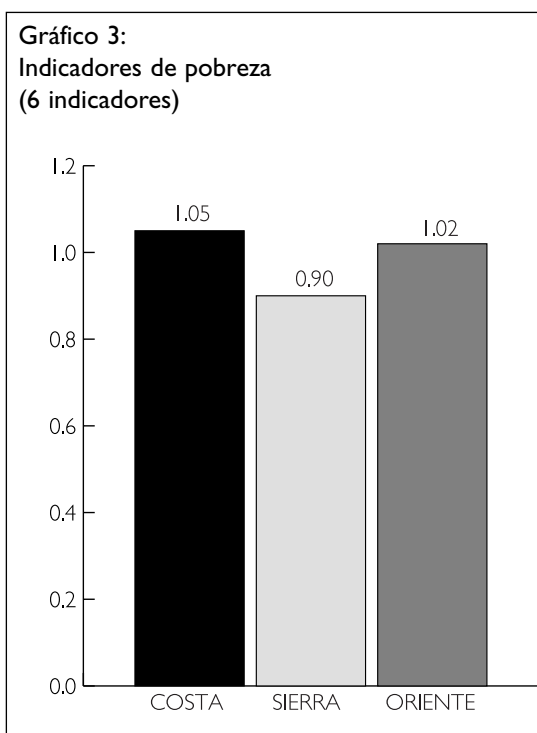
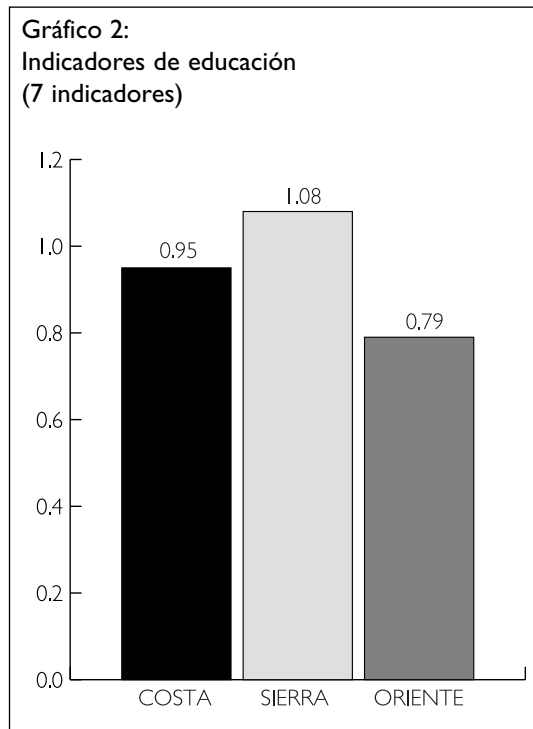
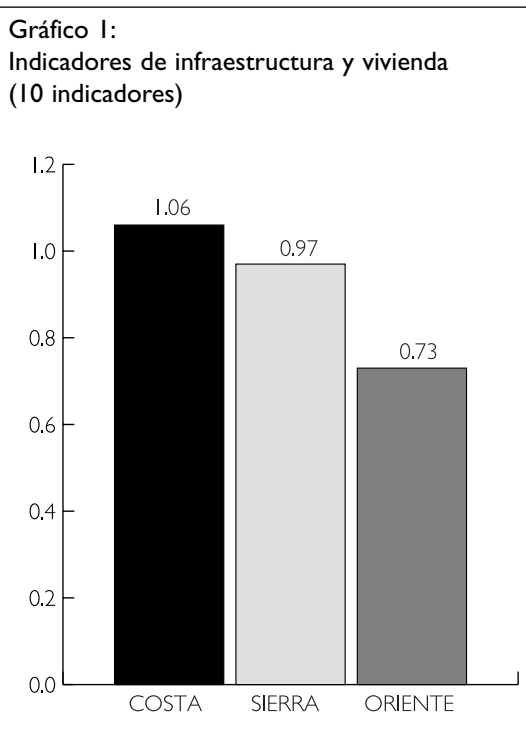
una manera clara y consistente- la estructura y la dinámica de la sociedad donde esta actividad se realiza. La segunda es que este efecto o impacto es, en lo sustancial, generador de problemas y dificultades. Estos presupuestos corresponden a una opinión generalizada y a difundidos puntos de vista que asumen y afirman que la actividad petrolera es dañina socialmente y que, por lo tanto, debe ser rechazada. Tal posición es expresada con frecuencia por los movimientos ambientalistas (Varea *et al.*, 1995).

Metodológicamente hemos procedido a conformar una base de datos con más de 100 variables que provienen de varias fuentes: el Infoplan, el SIISE, el VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda y la base de datos del Observatorio Socio Ambiental de FLACSO. Nuestro trabajo se ha referido en lo fundamental a la región amazónica, pero incluye varias dimensiones a nivel nacional. En otros trabajos abordamos los problemas metodológicos que han surgido en el manejo de esta información (Bustamante y Jarrín, s. f.).

Una perspectiva nacional

Como primer interrogante para abordar este tema tenemos el relativo a cómo se comportan las zonas petroleras con respecto al resto de variables sociales nacionales. Para desarrollar este análisis conviene que tomemos en cuenta cuáles son las particularidades de la región en la cual se desarrolla la mayor parte de la actividad petrolera. Para ello, señalemos algunas características de la situación de la Amazonía, respecto al conjunto del país. Según una combinación de datos Censales, del INFOPLAN y del SIISE podemos señalar que la región amazónica muestra respecto a los promedios nacionales dos características importantes: a) un importante déficit en todo lo que implica infraestructura, equipamiento y calidad de la vivienda, así como una apre-

1 Este trabajo recoge algunos aspectos cuantitativos de un trabajo desarrollado durante varios años en el Observatorio Socio Ambiental de FLACSO-Ecuador, que ha contado en diversos momentos con el apoyo de Petroecuador y del Fondo de Solidaridad Social del Ecuador.



Fuente: SIISE versión 3.5; INFOPLAN versión 2.0; IV Censo Nacional de Población y V de Vivienda.
Elaboración: T. Bustamante y C. Jarrín.

ciable desventaja en indicadores referentes a educación, y b) una situación más comparable a la media en lo relativo a las variables de pobreza e indicadores de salud.

Un segundo aspecto que es necesario abordar es el de determinar qué es lo que entenderemos por “zonas de actividad petrolera”. Hay varias estrategias posibles: entre ellas hemos examinado la de definir como zona petrolera a la región donde hay infraestructura petrolera; otra opción es referirse a la presencia de pozos; también es posible relacionarla con el volumen de la producción de crudo. En este

artículo utilizaremos dos aproximaciones. Por un lado, basándonos en la concentración de pozos a nivel cantonal, hemos definido una zona petrolera nuclear que incluye en cuatro cantones al 80% de los pozos del país. Estos cantones son Lago Agrio, Shushufindi, Orellana y La Joya de los Sachas. Para el análisis de correlaciones utilizaremos como variables el número de pozos por cantón, el volumen de producción por cantón y en algunos momentos usaremos como variables dicotómicas la presencia o no de ductos y la presencia o no de pozos.

Croquis I

Distribución espacial de los principales campos petroleros en el norte de la RAE.

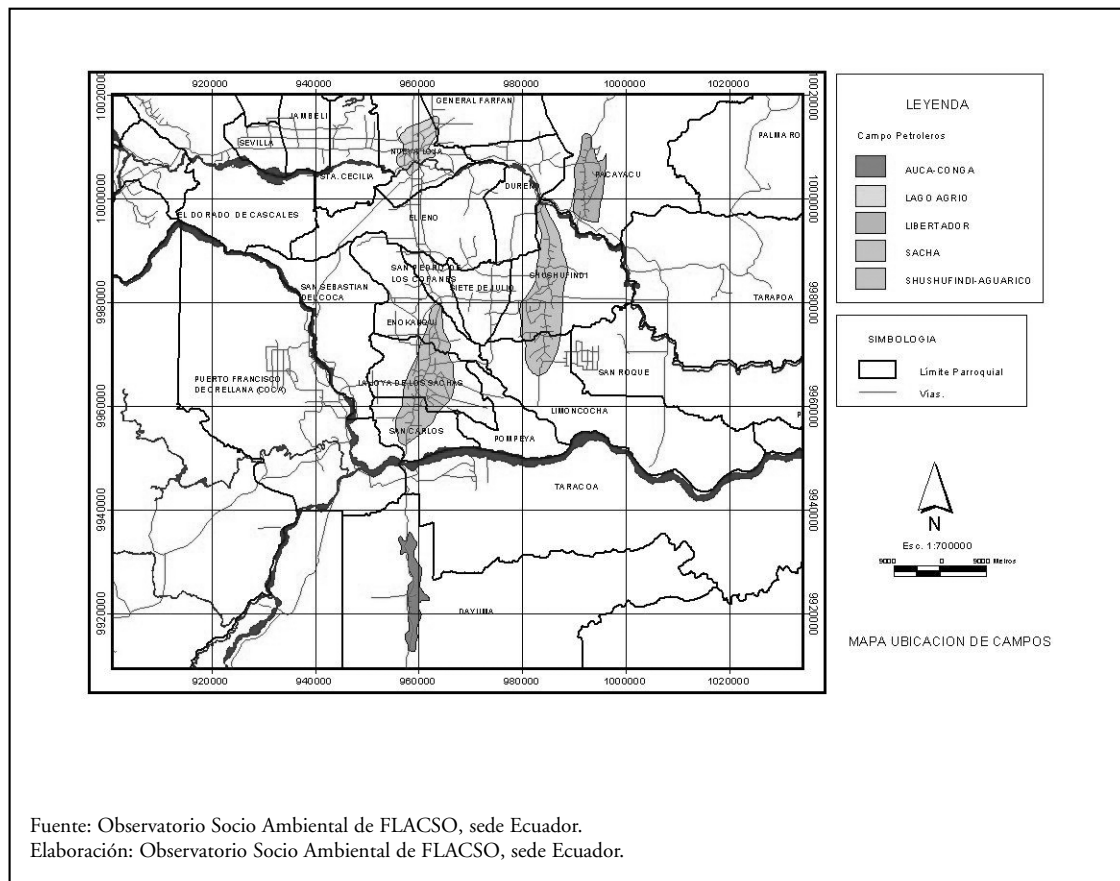
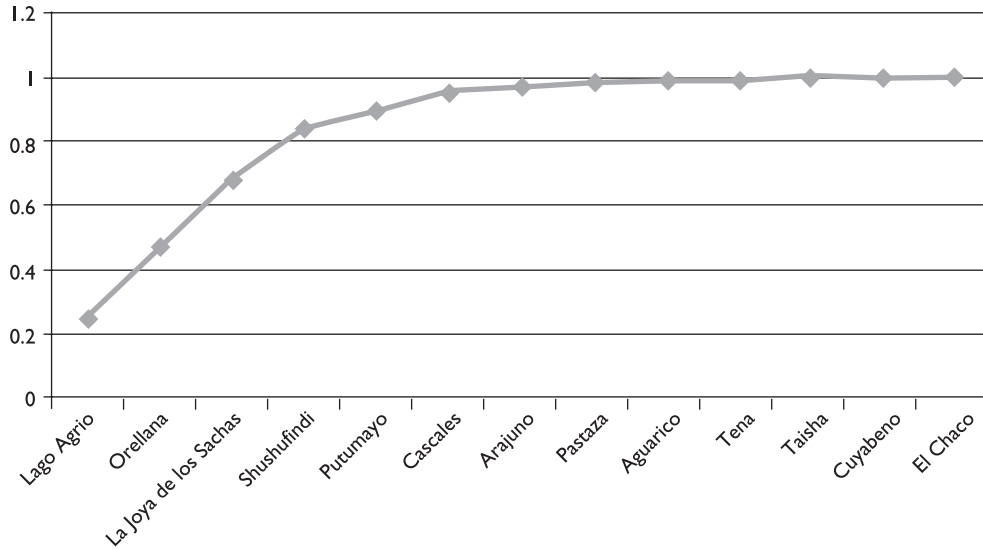


Gráfico 5
Concentración de pozos según cantones en la Amazonía ecuatoriana
(Porcentaje acumulativo)



Fuente: Observatorio Socio-ambiental FLACSO, sede Ecuador.

Elaboración: T. Bustamante y C. Jarrín.

La justificación de nuestra primera aproximación puede apreciarse en los dos gráficos siguientes, esto es en la distribución y concentración en el espacio de los pozos y la acumulación del número pozos. (Ver Croquis 1 y Gráfico 5).

La situación de los cantones petroleros

Con estos antecedentes se ha procedido a comparar a los cantones petroleros con tres marcos de referencia: a) con el promedio nacional, b) con la región amazónica y c) con el conjunto del país, excluyendo a Quito y Guayaquil (Ver Cuadro No. 1 y Gráfico No. 6).

Estos datos nos señalan que en infraestructura y educación, la situación de las zonas

petroleras es marcadamente inferior a los promedios nacionales y también, aunque en menor medida, es peor que el promedio amazónico. Las deficiencias de infraestructura propias de toda la región se ven agudizadas en la zona petrolera.

Con respecto a salud y pobreza, tomando en cuenta que estos datos están contruados como inversos, es decir que mientras mejor es la situación de un cantón mayor va a ser el valor del índice, nos encontramos con que los datos son bastante cercanos a los promedios nacionales. En salud encontramos una situación ligeramente mejor que el promedio amazónico. Y respecto a la pobreza encontramos un valor igual al promedio regional y ligeramente mejor que el conjunto del país excluyendo Quito y Guayaquil.

Cuadro 1
Comparación de índices* sociales promedios entre los cantones "petroleros" y otros ámbitos nacionales

	Total nacional	Amazonía	Ecuador sin Quito ni Guayaquil	Número de indicadores
INFRAESTRUCTURA	0,6889	0,9297	0,7445	10
EDUCACION	0,7382	0,9161	0,7998	7
SALUD	0,9211	1,0395	1,0144	4
POBREZA**	0,9603	1,0028	1,0370	6

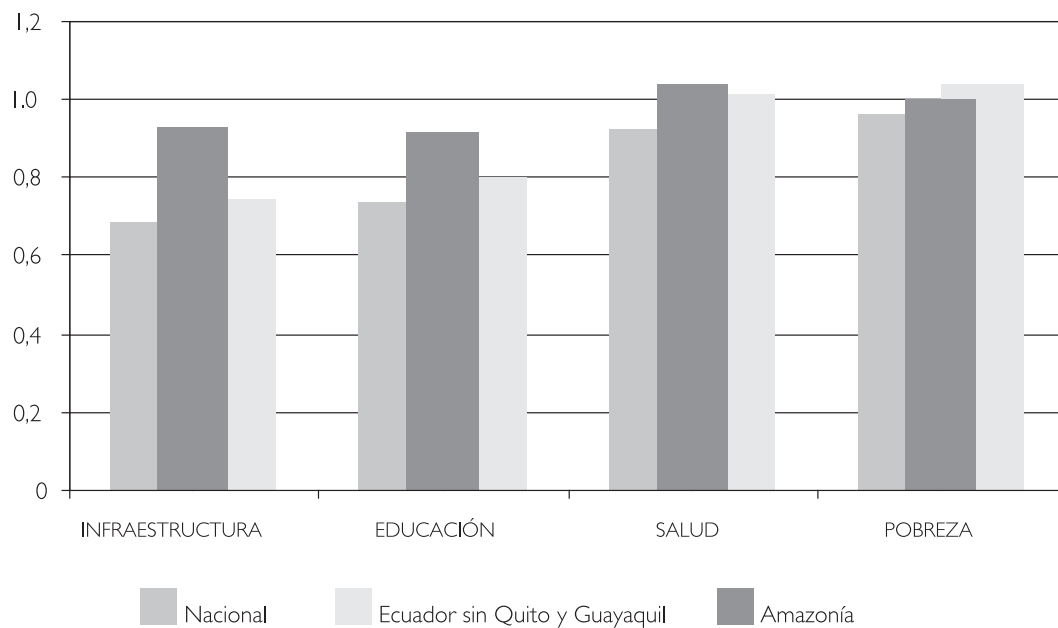
* Para la comparación con el total nacional sin Quito y Guayaquil se utilizaron 9 indicadores.

** Los valores de pobreza son inversos aditivos, es decir ($= 1 - \text{Variables de pobreza}$). Por lo tanto, mientras más alto es el valor, menos grave es la pobreza.

Fuente: Observatorio Socio Ambiental FLACSO Sede Ecuador

Elaboración: T. Bustamante y C. Jarrín.

Gráfico 6
Situación comparativa de los cantones petroleros



*Los indicadores de pobreza y dos de los de salud (tasa de mortalidad infantil y desnutrición crónica) son inversos aditivos, por lo tanto, a mayor valor, menor deficiencia.

Fuente: Infopbn 2.0, SIISE 3.5

Elaboración: T. Bustamante y C. Jarrín.

Gráfico 7
Cantones petroleros comparados con la media nacional



Fuente: Infoplan 2.0, SIISE 3.5, VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda.

Elaboración: T. Bustamante y C. Jarrín.

* Corresponde al porcentaje de niños menores de 5 años que NO tienen problemas de desnutrición (1-desnutrición crónica).

** Este valor es el inverso de la tasa de mortalidad infantil.

*** Todos estos valores son inversos aditivos, es decir: 1-variables de pobreza. Por lo tanto, mientras más alto es el valor, menos grave es la pobreza.

Análisis de las variables

Un paso siguiente del análisis es examinar específicamente cada una de las variables. Esto nos permite obtener el Gráfico No. 7.

El comportamiento de las variables comienza a marcar un perfil muy específico para las zonas petroleras. Aquellas variables que

están masivamente por debajo de la media nacional son las que se refieren a la asistencia a la educación superior y varias asociadas a la infraestructura.

Las variables en las que las zonas petroleras están mejor que el promedio nacional son algo sorprendentes, y corresponden al indicador de nutrición infantil (44% mejor

que el promedio nacional) y al de supervivencia infantil (8% mejor que el promedio nacional). Estos datos llaman la atención puesto que nos hablan de dos condiciones básicas de la situación de los niños que estarían considerablemente mejor que el promedio nacional².

Si realizamos la comparación en relación a los promedios de la amazonía, las variables se desplazan en ciertos aspectos pero mantienen algunas características comunes (Gráfico No. 8).

Como se observa en el Gráfico No. 8, en este caso las diferencias son sustancialmente menores. De hecho, el valor mínimo es un 50% del promedio regional en comparación con el 26% del valor nacional. Tenemos en primer lugar los déficits más altos (menos del 70% de los valores regionales) que se refieren a características de la vivienda, servicios y ciertos aspectos de la educación. Con un retroceso menor (entre el 85% y el 95% de la media regional) tendríamos a varios índices complejos que miden educación y otro grupo de servicios. Entre estos se incluye un indicador de pobreza (el inverso de la incidencia de la pobreza). Tenemos otro grupo, muy cercano al promedio regional (entre el 95% y el 105% de la media regional) en el que encontramos algunas variables inversas de pobreza y algunas relativas a servicios. Al igual que en el caso anterior, es necesario notar que la nutrición infantil se encuentra claramente sobre el promedio regional³.

Esto ya nos permite vislumbrar ciertas hipótesis sobre el impacto de la actividad petrolera en la estructura social. Los datos que he-

mos consignado nos hablan de una clara precariedad en las condiciones de infraestructura y el acceso a servicios, aunque no un deterioro masivo de la pobreza y la salud.

Análisis de correlaciones

Un paso ulterior en el análisis se refiere a examinar los niveles de correlaciones que existen entre la presencia de variables sociales y los datos que revelan la actividad petrolera. En este caso hemos utilizado el logaritmo natural del número de pozos, como variable que indica la actividad petrolera.⁴ Asimismo, en este análisis hemos incorporado más variables, pues hemos agregado todas aquellas que tienen menos carácter valorativo y que son más descriptivas (esto incluye desde estructura de la población económicamente activa –PEA-, hasta tasas de crecimiento demográfico). Este análisis ha sido efectuado exclusivamente sobre la región amazónica del Ecuador.

Los resultados que obtenemos de este análisis constan en el Cuadro No. 2.

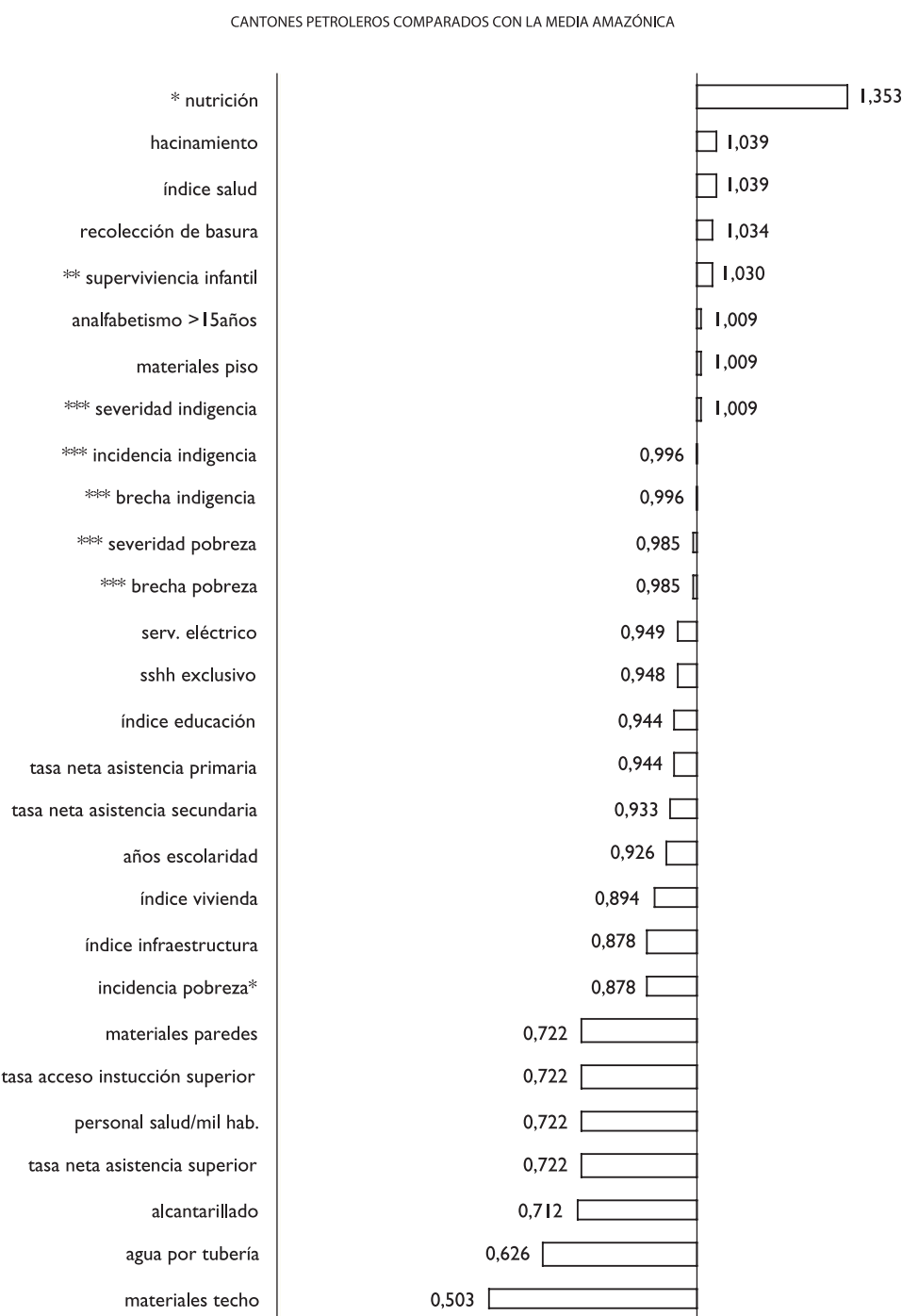
De estos resultados se desprenden algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, la correlación promedio que existe entre la presencia de pozos y el conjunto de las variables (exceptuando aquellas que serían algo tautológicas como el porcentaje de producción de crudo, presencia de infraestructura petrolera, etc.) es de 0,198, un valor relativamente bajo. Esto parecería indicar que la presencia de actividad hidrocarbuífera no es determinante de la estructura social. Como veremos posteriormente esto merece ser matizado. De todas maneras podemos señalar que hay muchas variables que tienen coeficientes de correla-

2 El SIISE explica en su metodología que estos valores provienen de la expansión de la muestra de EME-DINHO 2001. Se trata por lo tanto de datos estimados y no medidos. Sería posible y conveniente un análisis más estricto de las fuentes, y de los métodos utilizados.

3 Estos datos vitales nos hablan de ciertas condiciones de vida mejores. Consideramos que requieren de más detenida verificación antes de sacar conclusiones. Ver la nota anterior sobre la metodología de estos indicadores.

4 Hemos efectuado el análisis con respecto al número de pozos (sin logaritmo), porcentaje de la producción, sin que los resultados se modifiquen apreciablemente. Hay más diferencias si comparamos con la presencia de infraestructura. Sin embargo ese análisis deberá quedar para otra ocasión.

Gráfico 8
Cantones petroleros comparados con la media amazónica



Fuente: Infoplan 2.0, SIISE 3.5, VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda.

Elaboración: T. Bustamante y C. Jarrín.

* Corresponde al porcentaje de niños menores de 5 años que NO tienen problemas de desnutrición (1–desnutrición crónica).

** Este valor es el inverso de la tasa de mortalidad infantil.

*** Todos estos valores son inversos aditivos, es decir: 1–variables de pobreza. Por lo tanto, mientras más alto es el valor, menos grave es la pobreza.

Cuadro 2.
Coefficientes de correlación entre presencia de pozos y las
41 variables socioeconómicas más asociadas

Variable	Coefficiente de correlación
Producción crudo	0,760
Tasa crecimiento demográfico 1974-1982	0,692
Cantones con presencia de pozos	0,689
Cantones con infraestructura petrolera	0,598
No declarados según rama de actividad PEA	0,490
Tasa crecimiento demográfico 1974-2001	0,479
Tasa crecimiento demográfico 1990-2001	0,477
No declarados según categoría ocupación PEA	0,462
Trabajador nuevo según rama ocupación PEA	0,453
Trabajador nuevo según grupo ocupación PEA	0,453
Trabajador nuevo según categoría ocupación PEA	0,453
Logaritmo poblacional	0,421
Operadores maquinarias	0,409
No declarados según grupo ocupación PEA	0,409
Viviendas con agua por tubería	-0,387
Trabajadores sector inmobiliario	0,385
Trabajadores enseñanza	-0,378
Materiales techo	-0,363
Trabajadores calificados	-0,360
Empleados Municipio o Consejo Provincial	-0,354
Viviendas con servicio de alcantarillado	-0,343
Poder ejecutivo	0,334
Instrucción secundaria 1-3 años	0,333
Trabajadores de los servicios	0,330
Trabajadores transportes, almacenes y comunicaciones	0,329
Trabajadores comercio	0,319
Índice infraestructura	-0,315
Trabajadores cuenta propia	-0,307
Trabajadores sector pesquero	0,285
Tasa neta asistencia primaria	-0,283
PEA femenina	-0,274
Instrucción primaria 4-6 años	-0,271
Trabajadores hoteles y restaurantes	0,264
Trabajadores agricultura, selvicultura y caza	-0,251
Empleados privados	0,249
No asalariados sector terciario PEA	0,249
Trabajadores electricidad, gas y agua	0,246
Viviendas con Serv. Eléctrico	-0,246
Índice de vivienda	-0,239
Ingresos propios sobre ingresos totales (Municipios)	0,231
Incidencia de la pobreza	0,227

Fuente: Infoplan 2.0, SIISE 3.5, VI Censo de Población y V de Vivienda.
 Elaboración: T. Bustamante y C. Jarrín.

ción bajos. En efecto, de las 99 variables trabajadas, catorce muestran coeficientes de correlación superiores al 40% y sólo cuatro superiores al 50%. De esas cuatro, tres se refieren a la actividad petrolera misma. En este sentido es interesante señalar que la variable simple más asociada a la presencia de pozos es la tasa de crecimiento demográfico en el período 1974-1982.

En el segundo grupo de indicadores estrechamente asociados a la presencia de pozos, es decir aquellos que tienen coeficientes de correlación entre 40% y 50%, tenemos una gama de variables que incluyen: tres relativas a personas que no declaran algún aspecto de su situación laboral en el censo, dos que se refieren a trabajadores nuevos, dos más que son nuevamente tasas de crecimiento, una que se refiere a la cantidad de habitantes y una que describe a los operadores de maquinarias.

Si analizamos el siguiente grupo de variables (entre 30% y 40%) tenemos la presencia de cuatro variables sobre infraestructura y vivienda (todas con correlaciones negativas), una sobre educación, y nueve relativas a estructura de la población económicamente activa (PEA).

Por último, en el grupo entre 20% y 30% de correlación encontramos siete variables más asociadas a la estructura ocupacional, dos a la educación, dos a la vivienda, una relativa a la gestión municipal y una a la pobreza.

Todo este panorama nos permite hacer varios comentarios. El aspecto que más claramente está asociado a la actividad petrolera es un alto crecimiento poblacional.⁵ El segundo es la presencia de una categoría de trabajado-

res poco definidos, los no declarados, así como los trabajadores nuevos. Esta categoría poco explícita está sin lugar a dudas asociada a población de alta movilidad relacionada con sectores informales, entre los cuales se pueden presentar situaciones relativas a marginalidad, así como a delincuencia y prostitución. En tercer lugar tenemos otro aspecto de la estructura de la población económicamente activa que se refiere a un conjunto de correlaciones positivas y negativas con ciertas formas de trabajo. Básicamente una escasa representación de las actividades públicas, la enseñanza, los trabajadores calificados y trabajadores agrícolas y, en cambio, una muy alta presencia de operadores de maquinarias, trabajadores del transporte, del comercio, del sector inmobiliario y el turismo.

En relación a la estructura de la PEA hay un dato que nos parece interesante: hay en la actividad petrolera una perceptible correlación negativa con la participación femenina. Cabe también señalar que tenemos solamente una variable asociada a la pobreza que llega a superar una correlación del 20%: nos referimos a la incidencia de la pobreza con un 22%. Las demás variables que se asocian a temas de pobreza tienen correlaciones bajas, inferiores al 20% y más bajas aún con respecto a la indigencia. Esto permitiría suponer que la presencia de pozos petroleros no es un factor significativo para aumentar la pobreza de la población, pero tampoco es un factor que se pueda asociar a la superación de la misma.

Por último señalemos que las 58 variables restantes no asociadas a la presencia de pozos, incluyen muchas relativas a la educación, algunas referidas a estructura ocupacional, y la mayor parte de las relacionadas a la gestión municipal. Esto indicaría que a pesar de que hay una variable de este campo que sí tiene una ligera asociación (el porcentaje de ingresos propios de los municipios), en realidad la presencia del petróleo no parece ser un factor

5 Esta sola variable debería hacer pensar a los responsables de las políticas petroleras que la primera medida de mitigación del impacto de cualquier actividad petrolera propuesta deberían ser las variables asociadas al manejo del crecimiento. Esto es, fundamental planificación e infraestructura urbana, manejo del territorio y sobre todo saneamiento de la situación de tenencia de la tierra.

Cuadro 3 Componentes principales		
	% Varianza explicada	% Varianza acumulada
Componente principal 1	36,816	36,816
Componente principal 2	12,894	49,711
Componente principal 3	8,816	58,527

Elaboración: T. Bustamante y C. Jarrín.

Cuadro 4 Componente principal 1. Variables más asociadas al primer componente principal	
Variables	Coefficiente de extracción
Índice de desarrollo social	0,9428
Índice de necesidades básicas insatisfechas	-0,9428
Viviendas con sshh de uso exclusivo	0,9335
Viviendas con servicio de recolección de basura	0,9232
Índice de vivienda	0,9169
Índice de salud	0,9112
Índice de infraestructura	0,8961
Índice de educación	0,8930
Personal de salud por cada mil hab.	0,8795
Promedio años de escolaridad	0,8754
Escolaridad en la PEA	0,8493
Viviendas con servicio de alcantarillado	0,8472
Incidencia de la pobreza	-0,8447
Instrucción superior de 1 a 3 años	0,8401
Viviendas con servicio eléctrico	0,8397
Instrucción superior 4 y más años	0,8383
Agricultura, selvicultura y caza	-0,8270
Tasa de acceso a instrucción superior	0,8238
Brecha de la pobreza	-0,8098
Saneamiento	0,8092
Porcentaje de hogares hacinados	-0,7987

Fuente: Infoplan 2.0, SIISE 3.5, VI Censo de Población y V de Vivienda.
Elaboración: T. Bustamante y C. Jarrín.

Cuadro 5 Componente principal 2. Variables más asociadas al segundo componente principal	
VARIABLES	Coeficiente de extracción
Empleados del Poder ejecutivo	0,8016
Tasa de crecimiento demográfico 1974-2001	0,7701
Operadores de maquinarias	0,7551
Cantones con presencia de pozos	0,7478
Cantones con infraestructura petrolera	0,7459
Explotación de minas y canteras	0,7223
Empleado privado	0,7007
Logaritmo de número de pozos	0,6854
Tasa de crecimiento demográfico 1990-2001	0,6827
Tasa de crecimiento demográfico 1982-1990	0,6330
Promedio de ingresos propios sobre ingresos totales (Municipios)	0,6019

Fuente: Infoplan 2.0, SIISE 3.5, IV Censo de Población y V de Vivienda
Elaboración: T. Bustamante y C. Jarrín.

determinante en la calidad de la gestión de las autoridades seccionales.

Análisis de componentes principales

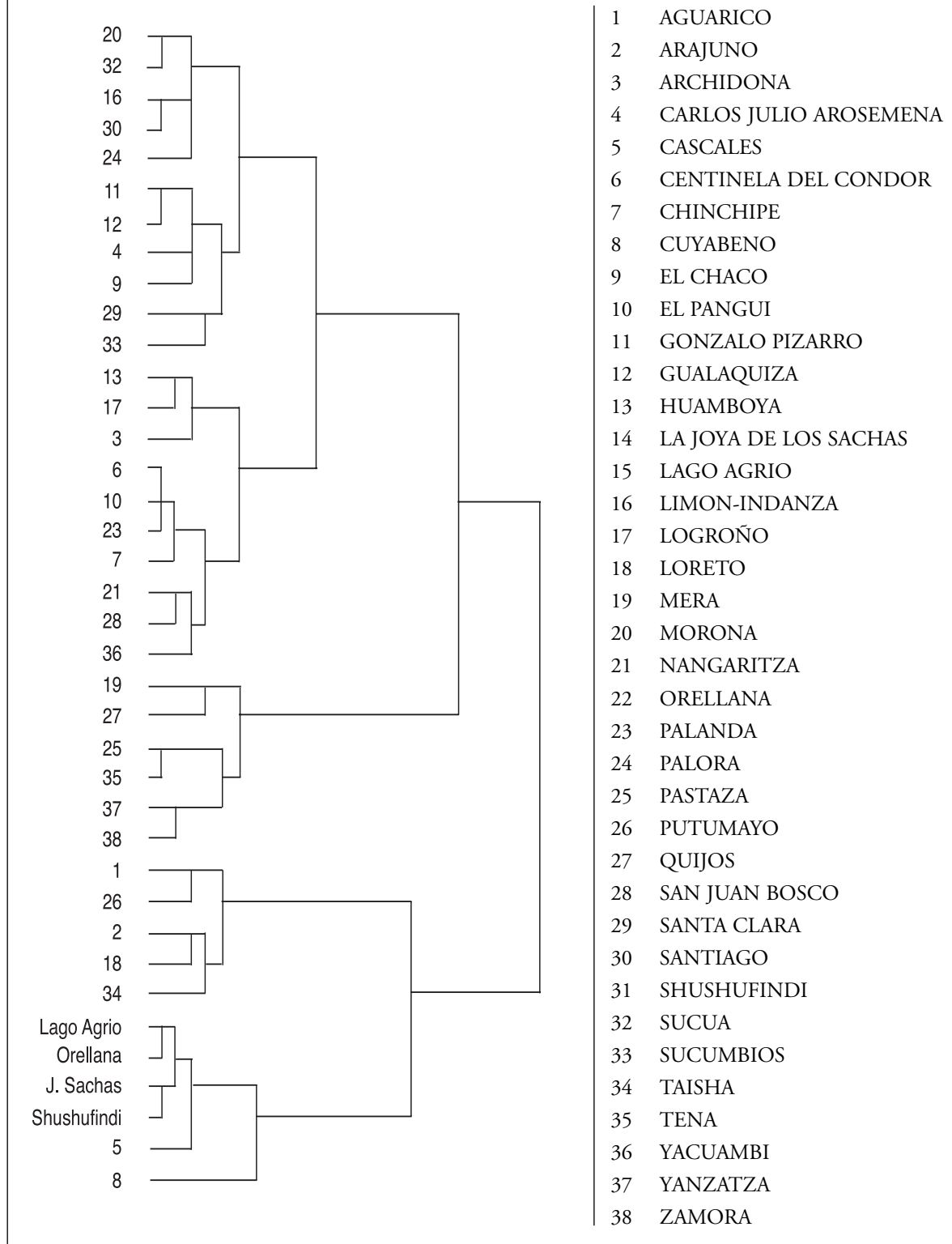
Con esta base de información es posible analizar cuáles son las variables más importantes para explicar la variabilidad en los indicadores sociales de la Amazonía. Los resultados que este análisis arroja hace posible identificar 16 componentes principales. Los tres mayores tienen la capacidad explicativa que se muestra en el Cuadro No. 3.

El primer componente principal (Cuadro no. 4), marca una muy fuerte asociación con las variables relativas a la infraestructura y tiene muy escasa asociación con la actividad petrolera (en general coeficientes de correlación menores al 5%, a veces positivos y a veces negativos). Este componente, capaz de explicar el 36% de la varianza total estaría indicándonos la profundidad en el tiempo del proceso de construcción de infraestructura, la consoli-

dación de su articulación al espacio nacional y el desarrollo de instituciones. Este componente está además muy fuertemente asociado con los principales indicadores de calidad de vida: los índices compuestos del Infoplan en relación a salud, vivienda y educación, tienen asociaciones superiores al 85%. Este componente principal parece ser el más asociado a la calidad de vida de la población.

La actividad petrolera tiene un valor explicativo apreciable, con una capacidad explicativa del 11% (Cuadro No. 5), como segundo componente principal. En este caso, la asociación de las variables petroleras es bastante alta. Por ejemplo, una asociación del 68% con el número de pozos y de un 54% con la producción de crudo. Está también fuertemente asociado con todas aquellas variables que hemos anotado propias de los cantones petroleros, especialmente tasas de crecimiento, sectores no formales de la PEA y una estructura ocupacional específica. Tienen una moderada o baja asociación con los indicadores de pobreza (alrededor del 20%). Es relevante seña-

Dendograma de aglomeración jerárquica. Cantones amazónicos.
Variables: infraestructura, educación, pobreza y PEA



lar que en este caso encontramos una asociación relativamente fuerte, pero inversa con la participación femenina en la PEA (-39%).

Dendogramas y agrupaciones

A partir de los datos anteriores, podría pensarse que la actividad petrolera no es un factor que determine una estructura social específica. Sin embargo, eso no es sino una lectura superficial de los datos que hemos anotado. En realidad los datos lo único que demuestran es que la presencia del petróleo no es lo que más explica, o lo que más se asocia al conjunto de la variabilidad social de la región amazónica (existiendo eso sí una clara asociación con ciertos acotados campos de variables).

Para determinar cuánto se parecen entre sí las realidades de los cantones en los cuales existe actividad petrolera, hemos procedido a realizar un análisis de agrupaciones. Para ello hemos utilizado el programa SSPS; se han elaborado dendogramas de aglomeración utilizando el método de Ward, con la técnica de la distancia Euclídea y con valores estandarizados de 0 a 1. El resultado que hemos obtenido se refleja en el dendograma siguiente y nos permite concluir que si bien la presencia del petróleo no es lo que segrega y diferencia de manera más radical a los cantones que desarrollan esta actividad, sí tiene una muy clara asociación y muestra la gran cercanía que tienen los cuatro cantones que hemos calificado de petroleros. Cabe señalar que en el curso de este trabajo hemos ensayado un sinnúmero de formas de agrupar los datos y de ponderar las variables, y en todos los casos se ha mantenido este fuerte nivel de asociación.

Comentarios finales

Los datos que hemos trabajado no permiten señalar que la presencia de la actividad petrolera sea la causa principal de la situación de

bienestar o malestar de las poblaciones de la región amazónica. Todo parece indicar que son otros los factores fundamentales que determinan la calidad de vida de la población. En otras palabras, en relación a las variables analizadas, la presencia de actividad petrolera no arregla el nivel de vida de la población, ni lo destruye.⁶

La explotación petrolera genera una dinámica específica; comprenderla sería fundamental para las autoridades con responsabilidades en las zonas en que esta actividad se desarrolla o se está proponiendo desarrollarla. Este análisis solamente estadístico ya permite identificar algunas orientaciones que podrían ser prioritarias en el caso de que existiera una voluntad real de mitigar, o en su caso prevenir, los impactos de esta actividad. Estos se refieren a manejar el crecimiento buscando evitar el desorden y la informalidad y previendo oportunamente las necesidades de infraestructura.

Por otra parte aparece con claridad que en las zonas de actividad petrolera sí existe una estructura social específica. Los indicadores que hemos analizado pueden ser un comienzo en la tarea de describir la sociedad petrolera en nuestro país. Esta descripción es necesaria si se pretende reparar las desventajas que existen en las zonas petroleras y maximizar el bienestar de su población.

Bibliografía

- Acosta, Alberto, 2000, "El petróleo en el Ecuador: una evaluación crítica del pasado cuarto de siglo" en Varios autores, *El Ecuador post petrolero*, Quito, Acción Ecológica, ILDIS.
- , 1992, *El reto de la energía en las próximas dos décadas*, Quito, Siglo XXI,

⁶ En este análisis no se han incluido indicadores de violencia ni de toxicidad del medio.

- CONADE, GTZ.
- Arteaga, Aída, 2003, "Indicadores de gestión e impactos de la actividad petrolera en la Región Amazónica Ecuatoriana", en Guillaume Fontaine (Ed.), *Petróleo y Desarrollo sostenible en el Ecuador. 1. Las reglas de juego*, Quito, FLACSO, GPA Petroecuador.
- Albán, Jorge, 2003, "Participación, consulta previa y participación petrolera", Guillaume Fontaine (Ed.), *Petróleo y Desarrollo sostenible en el Ecuador. 1. Las reglas de juego*, Quito, FLACSO, GPA Petroecuador.
- Bustamante, Teodoro y Jarrín, María Cristina, s. f., "Indicadores sociales, distribución espacial y estudios de caso: una aproximación a las particularidades socio económicas de las zonas petroleras", Flacso-Ecuador, Quito.
- Falconí, Fander, 2002, *Economía y desarrollo sostenible: ¿Matrimonio feliz o divorcio anunciado? el caso del Ecuador*, FLACSO.
- INFOPLAN, 1999, *Desarrollo Social y Gestión Municipal en el Ecuador, Jerarquización y Tipología*, Quito.
- Kimerling, Judith, FCUNAIE, 1993, *Crudo Amazónico*, Quito, Abya-Yala.
- San Sebastián, Miguel, Hurtig, Anna-Karin, 03/2004, "Oil Exploitation in the Amazon Basin of Ecuador: A Public Health Emergency", en *Revista Panamericana de Salud Pública*, 15 (3).
- Varea, Ana María, editora, 1995, *Marea Negra En La Amazonía. Conflictos Socioambientales Vinculados a la Actividad Petrolera En El Ecuador*, Quito, Abya-Yala, ILDIS, FTPP, UICN, 400 p.

Fuentes estadísticas

- INFOPLAN, 2004, version 2.0.
- SIISE, 2003, Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, Versión 3.5.
- INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1974, 1982, 1990, 2001.
- FLACSO, Observatorio Socioambiental, Sistema de Información Geográfico.

Microconflictos ambientales y crisis de gobernabilidad en la Amazonía ecuatoriana¹

Guillaume Fontaine

Doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Francia).
Profesor Investigador de FLACSO-Ecuador
Email: gfontaine@flacso.org.ec

Fecha de recepción: septiembre 2004
Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

Este artículo analiza la relación entre contaminación y conflictos ambientales en el norte de la Amazonía ecuatoriana. La idea central que se defiende es que el manejo de conflictos por la empresa petrolera del Ecuador, Petroecuador, puede llevar a negociaciones “eficientes” a corto plazo, a costa de la institucionalización de los arreglos y de un tratamiento de las causas estructurales de los conflictos. Este entorno, condicionado por una gestión ambiental inadecuada en el norte de la Amazonía, constituye el telón de fondo de los conflictos radicales en el centro y el sur de la región y seguirá siendo un marco referencial contra la política petrolera del Estado. En particular, el clima de tensión social que resulta de esta situación es agravado aún más por la mediatización del juicio contra Chevron-Texaco. Sin una redefinición de las políticas públicas –en particular políticas ambiental y social responsables y equitativas– este clima amenaza con desembocar en una crisis de gobernabilidad democrática.

Palabras clave: Petróleo, contaminación, Amazonía, conflictos ambientales, gobernabilidad democrática, Ecuador

Abstract

This paper analyzes the relationship between oil spills and ecological conflicts in the northern Amazon of Ecuador. The central idea is that conflict management by the state-owned oil company, Petroecuador, can lead to “efficient” negotiations in the short term, at the cost of a long-term perspective, that seeks the institutionalization of agreements and an effective treatment of the structural causes of environmental conflicts. This context is determined by an inadequate environmental management in the Northern Amazon and constitutes the background of wider protracted conflicts, in the Central and Southern parts of the region. Especially, the resulting tense social relationships are actually worsened by the mediatization of the Chevron-Texaco trial. As a matter of fact, it will probably remain the framework for oil policies. Without a redefinition of public policies –especially a responsible and equitable environmental and social policies– this could lead to a crisis of democratic governability.

Key words: Oil spills, pollution, Amazon, ecological conflicts, democratic governability, Ecuador

Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 21, Quito, enero 2005, pp. 35-46
© Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador.
ISSN: 1390-1249

1 Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el “Segundo Encuentro de Ecuatorianistas de LASA. Mesa 24: Gobernabilidad democrática y desarrollo sostenible” (Quito, 26/06/2004). Estoy muy agradecido del equipo del

La contaminación originada por las actividades petroleras en el norte de la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) desde la era Texaco (1972-1992) representa un factor esencial en los conflictos socio-ambientales. No obstante, este alto nivel de contaminación en el área actualmente operada por la empresa estatal Petroecuador contrasta con el nivel relativamente bajo de enfrentamientos en la misma zona. En realidad, la baja polarización de los conflictos ambientales se debe a un tipo de manejo de conflictos que los vuelve invisibles en vez de institucionalizar los arreglos. Para explicar esta paradoja revisaremos los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras en el norte de la región amazónica en el periodo 1994-2002 (I), luego analizaremos el tipo de manejo de conflictos aplicado por la empresa estatal y las percepciones locales de la misma (II), finalmente veremos en qué medida este tipo de manejo de conflictos incide sobre la gobernabilidad democrática en la región amazónica (III).

Factores de conflictos en el norte de la RAE

El Distrito Amazónico, operado por Petroecuador, abarca 49.160 km² y 35 parroquias. El área de estudio es constituido por los campos más antiguos -Shushufindi y Sacha- que fueron explotados a partir de 1969 y 1971 sucesivamente por el consorcio Texaco-Gulf, luego Texaco-Gulf-CEPE, Texaco-CEPE y Petroecuador. Son también los más importantes en producción petrolera: a medianos

de los ochenta acumulaban el 74% de la producción total del consorcio CEPE-Texaco, mientras que el 26% de la producción restante salía de 12 campos (Gordillo 2003: 238). Entre 1994 y 2002 ambos campos siguieron representando el mayor porcentaje de la producción acumulada, aunque desde medianos de la década del noventa Shushufindi entró a una fase de decrecimiento tendencial².

Estos campos afectan directamente a cinco parroquias -Shushufindi, Limoncocha, Enokanqui, La Joya de los Sachas y San Carlos- que cubren 1.726,5 km². Alrededor de la mitad de la población se concentra en las cabeceras cantonales. Shushufindi es el segundo cantón de Sucumbíos, con 32.184 habitantes. El cantón La Joya de los Sachas es el segundo de Orellana, con 26.363 habitantes (OSA 2003). La población ubicada en el área directa de influencia del campo Shushufindi está compuesta mayoritariamente de colonos (100 comunidades) y de menos 10 comunidades indígenas (4 quichua, 1 shuar, 2 secoya y 1 siona). Por su lado, la población ubicada en el campo Sacha se compone de 25 comunidades de colonos y 6 quichua. (Varios Autores 2000: 88-89).

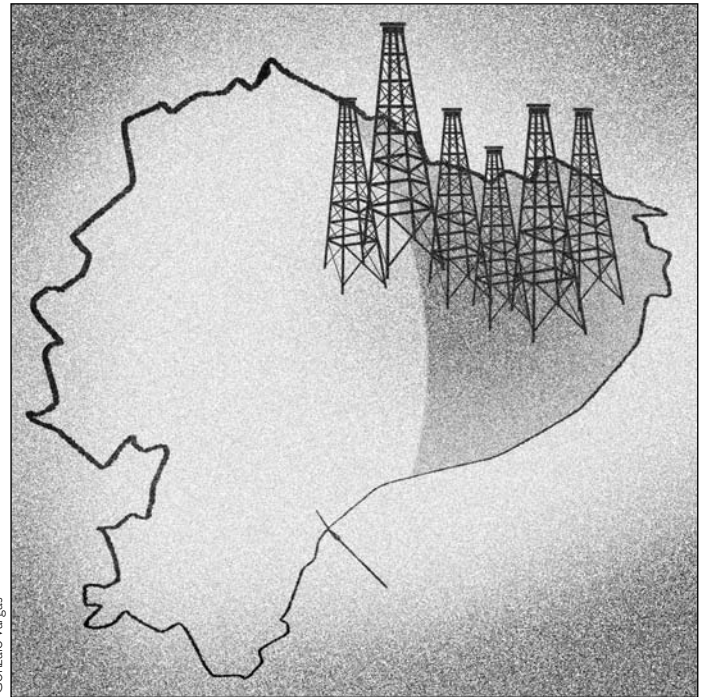
La duración de vida de esos campos y su importancia en la producción regional se traducen por una concentración excepcional de infraestructuras petroleras: cinco estaciones de almacenamiento, una refinería, una planta procesadora de gas, un gasoducto y 105 pozos en Shushufindi; cuatro estaciones y 191 pozos en Sacha. También cuentan con los mayores pasivos ambientales de la era Texaco: 151 piscinas según Petroproducción (ie: el 12% del crudo y el 46% del volumen de aguas residuales) o 183 piscinas según el Frente de Defensa de la Amazonía. Por último, son afectados por una contaminación crónica ocasionada por las actividades de producción

Observatorio Socio Ambiental, en particular Karen Andrade, María Cristina Jarrín, Santiago Vallejo y Diego Sánchez, que me ayudaron a levantar y sistematizar la información de campo que ampara esta investigación. Agradezco también a Edmundo Guerra, Iván Narváz y Fredy Rivera por sus comentarios. Las interpretaciones y los posibles errores son de mi responsabilidad exclusiva.

2 En 2001, Shushufindi produjo 24,3 millones de barriles y Sacha 16,5 millones (OSA, 2003).

y transporte. El volumen derramado en el Distrito Amazónico entre 1994 y 2002 alcanza 32.611,5 barriles, es decir, 304,8 barriles por mes durante 9 años. A nivel regional, la tasa de recuperación promedio fue del 68% en este periodo. El mayor volumen de crudo derramado se registra en Sacha, con 20.132,5 barriles. En promedio, se derramaron 188,15 barriles por mes, de los cuales se recuperó el 88%. En una oportunidad (1996) se registró un volumen derramado superior a 10.000 barriles por año y en dos oportunidades (1999 y 2000) se registraron volúmenes superiores a 3.000 barriles. En los otros campos del Distrito Amazónico, el promedio derramado es mucho menor: 49,5 barriles por mes en Libertador, 44,6 en Auca, 21,6 en Shushufindi y 5,2 en Lago Agrio. La información sobre las superficies afectadas, disponible desde el año 1997, confirma que el campo Sacha está entre los más contaminados del Distrito Amazónico, con un promedio anual afectado de 63.637 m². Si bien es cierto esta área es inferior al área contaminada en el campo Libertador (78.411 m²), es muy superior a los de Shushufindi (37.842 m²) y Auca (38.143 m²) (OSA 2003).

Según el balance provisional de los derrames por causas, que se realizó a partir de 991 reportes entre 1994 y 2001, 310 derrames se deben a fallas de equipo y 135 a negligencias de operación (Arteaga 2003). De ello se puede deducir que Petroecuador podría reducir más del 45% de los derrames mediante un mayor mantenimiento de los equipos y una mejor gestión de los recursos humanos. Otra causa de accidentes proviene del hecho que los oleoductos no enterrados pueden ser atropellados por carros o máquinas agrícolas. Finalmente, en últimos años, el intento de robo de tubería se ha vuelto una frecuente fuente de derrames: entre 1997 y 2002, se registraron 122 denuncias por hurtos (entre los cuales 14 en Sacha y 35 en Shushufindi), aunque tan solo 32 desembocaron en procesos judiciales (OSA 2003).



Gonzalo Vargas

Como se pudo ver, la contaminación por actividades petroleras en el norte de la RAE está particularmente concentrada en los campos más antiguos y más productivos de la Amazonía ecuatoriana: Sacha y Shushufindi. Ahora bien, la mala gestión ambiental en estas áreas crea un entorno hostil y se vuelve una causa de conflictos latentes y difusos. A continuación analizaremos cómo Petroecuador enfrenta estos retos, a través de sus programas de relaciones comunitarias.

Manejo instrumental de conflictos

Las relaciones comunitarias de Petroecuador pasaron por tres periodos, relacionados con la evolución de la normativa ambiental y el estatuto legal de la empresa y sus filiales.

Creada tras la adopción de la Ley de hidrocarburos de 1971, la Corporación Estatal de Petróleos del Ecuador (CEPE) no tuvo una política de relaciones comunitarias sistematizada durante los 13 primeros años de su existencia. Éstas se caracterizaban por su in-

formalidad, en un contexto de legislación ambiental incipiente hasta la Ley de prevención y control de contaminación de 1976. A partir de 1984 se fijaron los primeros lineamientos de una política, de corte asistencial y coyuntural, es decir, para facilitar la ejecución de las obras de las empresas y sus contratistas, mitigando y anticipando los conflictos locales. Así fue creado el Fondo de Desarrollo Comunal, destinado a financiar “obras de beneficio comunal” cuya ejecución era a cargo de organismos seccionales y organizaciones comunitarias.

Tras la Ley 45, de septiembre de 1989, CEPE cedió paso a Petroecuador y sus filiales –Petroproducción, Petrocomercial, Petroindustrial-. En este periodo se concretaron los primeros intentos de planeación corporativa, con la creación de la Unidad de Protección Ambiental (UPA) de Petroecuador. Sin embargo, la lógica burocrática de la reforma generó un conflicto de competencias entre esta entidad y la UPA de Petroproducción, cuyas oficinas de relaciones comunitarias y de asesoría legal funcionaban ya en el Distrito Amazónico. En este periodo, el marco legal se amplió más que nunca, con la Ley de hidrocarburos de 1993, el Reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas de 1998 (reformado en 2001) y la Ley de gestión ambiental de 1999.

La conversión de la UPA de Petroecuador en una Gerencia (GPA) con presupuesto propio, en 2001, marcó el inicio de un cuarto periodo, aunque su funcionamiento haya sido afectado por el cambio de gobierno en 2003 y la consiguiente inestabilidad en el directorio de Petroecuador. Desde luego, la política de relaciones comunitarias osciló entre el modelo tradicional y un modelo de planificación estratégica, sin que haya desaparecido la competencia entre las unidades afines de Petroproducción y Petroecuador.

En la actualidad, tres entidades están involucradas en el manejo de conflictos: la Ofici-

na de relaciones comunitarias y la Oficina de asesoría legal de la UPA de Petroproducción, y la GPA de Petroecuador. La primera tiene a su cargo la gestión de compensaciones en obras sociales mediante acuerdos colectivos con las poblaciones afectadas por las operaciones de Petroproducción. La segunda es responsable de los acuerdos y convenios de indemnizaciones individuales. La tercera interviene en la planificación de la política social y ambiental de Petroecuador y sus filiales.

Esta rápida revisión muestra que, desde 1970, la política de relaciones comunitarias de la empresa estatal obedece a una lógica funcional de prevención o resolución de conflictos, aunque en el último periodo se afirmó una voluntad de planificación estratégica de la responsabilidad social.

Los acuerdos suscritos entre la Oficina de relaciones comunitarias de Petroproducción y las parroquias de los campos Sacha y Shushufindi abarcan cinco tipos de actividades. Se destaca la importancia de las obras de construcción y lastrado para las calles, o la entrega de material de construcción, desbroce, juegos para parques infantiles, etc. En segundo lugar, aparece la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado, así como obras de electrificación. Luego viene la entrega de material de oficina y material escolar, la atención médica y los dispositivos de salud y, por último, la ayuda para la realización de parcelas agrícolas demostrativas.

Los convenios suscritos entre la GPA de Petroecuador y la población de los campos estudiados se reparten entre cuatro tipos de actividades. En primer lugar se destacan los “proyectos de arrastre”, que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida a través de obras de infraestructuras de educación, salud y puentes, equipos médicos, cultivos alternativos y proyectos avícolas, capacitación socioambiental a promotores comunitarios, eventos deportivos y prevención de drogadicción. En segundo lugar vienen los “proyectos

de salud integral”, que atañen a la reconstrucción de subcentros de salud y la ampliación de un hospital. En tercer lugar están los “proyectos de educación”, que incluyen programas de protección integral y muebles (sillas, escritorios, etc.). En cuarto lugar vienen “proyectos de infraestructura comunitaria”, que abarcan obras de construcción, sistemas de agua, muros de contención y viviendas oficiales para la Policía Nacional.

La RAE en su conjunto se benefició de proyectos de construcción y operación de la unidad médica fluvial Umiña, implantación de un sistema de electricidad fotovoltaica para diversas comunidades, investigaciones académicas, lucha contra las hepatitis B y D. También se financiaron varios proyectos culturales (grabación de CD, compilación etnomusicológica, publicación de un libro de fotos, etc.), el equipamiento de bibliotecas y un estudio de contaminación en los campos petrolíferos, por el Frente de Defensa de la Amazonía.

Como se puede observar, los convenios de la GPA de Petroecuador demuestran una voluntad de planificar la gestión social a un nivel nacional y estratégico. No obstante, no buscan enfrentar los retos planteados por la contaminación masiva registrada en el área de Sacha y Shushufindi. Desde luego, es preciso analizar las percepciones locales en relación con esta política, para determinar el nivel de riesgo real de conflictos ambientales en la zona.

En el periodo 1994-2002, se emitieron más de 2.600 actas para indemnizaciones, compensaciones y medidas diversas, tan sólo en las oficinas de relaciones comunitarias y de asesoría legal. Entre éstas, 1.150 atañen a indemnizaciones o compensaciones por contaminación o muerte de animales.

Según la Oficina de asesoría legal de Petroproducción, se firmaron 2.554 convenios, demandas o acuerdos de indemnización en este periodo, más 288 casos sin fecha (que no tomamos en cuenta aquí). Al nivel del Distrito Amazónico, el 43,46% de las actas son ori-

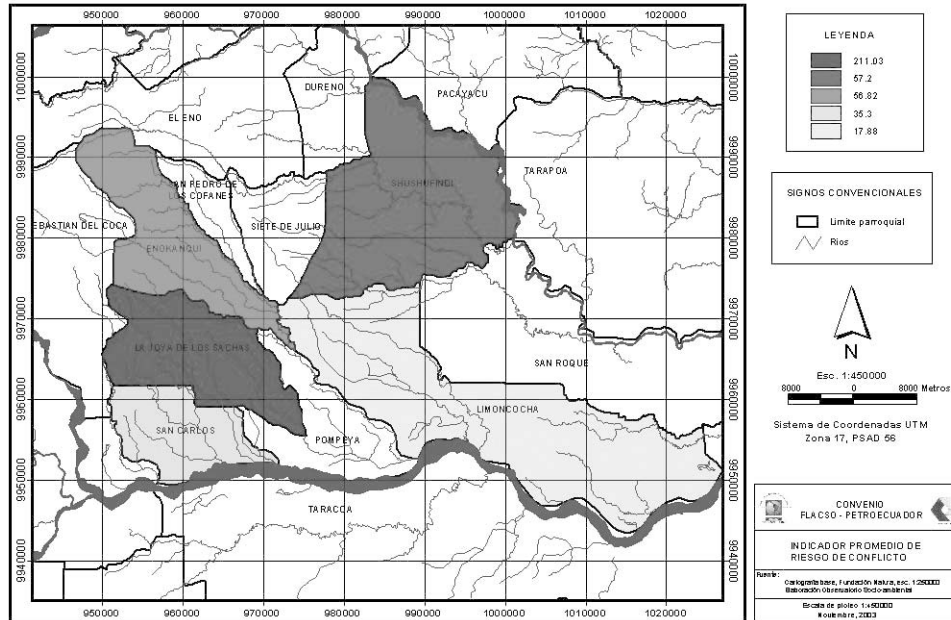
ginados por la contaminación o la muerte de animales –debido en general a la presencia de piscinas de crudo o residuos de derrames. El resto se reparte entre la adquisición de servidumbre para las operaciones de exploración y explotación (el 26,9%) o para la electrificación (el 26,64%). En el área de estudio, se reportaron 185 actas originados por contaminación o muerte de animales, 191 actas de servidumbre para operaciones y 100 actas de servidumbre para electrificación local. A ello se añaden los megaproyectos de electrificación en el Distrito, que representan el 19,77%.

La información proporcionada por la Oficina de relaciones comunitarias de Petroproducción (diciembre de 2002) consta de 51 documentos (convenios, actas de cooperación o proyectos de convenios). Las comunidades del área de influencia directa de Sacha se beneficiaron de 11 convenios o actas de cooperación y 5 proyectos de convenio. En comparación, Shushufindi recibió mucho menos ayuda, ya que constaba en la misma fecha de 3 convenios o actas. Las comunidades de los demás campos se repartían los 32 convenios, actas y proyectos de convenios restantes.

Finalmente, se reportaron 204 convenios en ejecución o por ejecutarse en 2003 en la Unidad sociocultural de la GPA de Petroecuador. Los proyectos que benefician a la RAE representan tan sólo el 44,12% del total. Las provincias de Sucumbíos y Orellana apenas representan el 20% del total nacional, en cuanto a los proyectos específicos, y el 25,5% si se incorporan los proyectos que beneficiaron a la región en su conjunto. Esta repartición no refleja la presencia de la empresa estatal en el norte de la Amazonía y de manera especial en ambas provincias.

A pesar de esta profusión de proyectos, la población local muestra cierta desconfianza hacia la política de relaciones comunitarias de Petroecuador. Ciertamente es que, para algunos sectores de la sociedad civil (como la junta pa-

Figura 1.
Indicador promedio de conflictividad real en Sacha y Shushufindi.



Fuente: OSA (2003).

roquial de San Carlos), las relaciones con ella son buenas, siempre y cuando contribuye al desarrollo local. Reconocen que hay problemas, debidos al incumplimiento de ciertos compromisos, pero consideran que la empresa se esfuerza por aportar en obras de compensación social al bienestar de aquellas comunidades.

En otros casos, el grado de frustración expresado es proporcional a la gravedad y la frecuencia de los derrames. Por ejemplo, los numerosos derrames que se registraron en la Joya de los Sachas, suscitan fuertes críticas, principalmente debido a las demoras en la remediación y la falta de planificación ambiental.

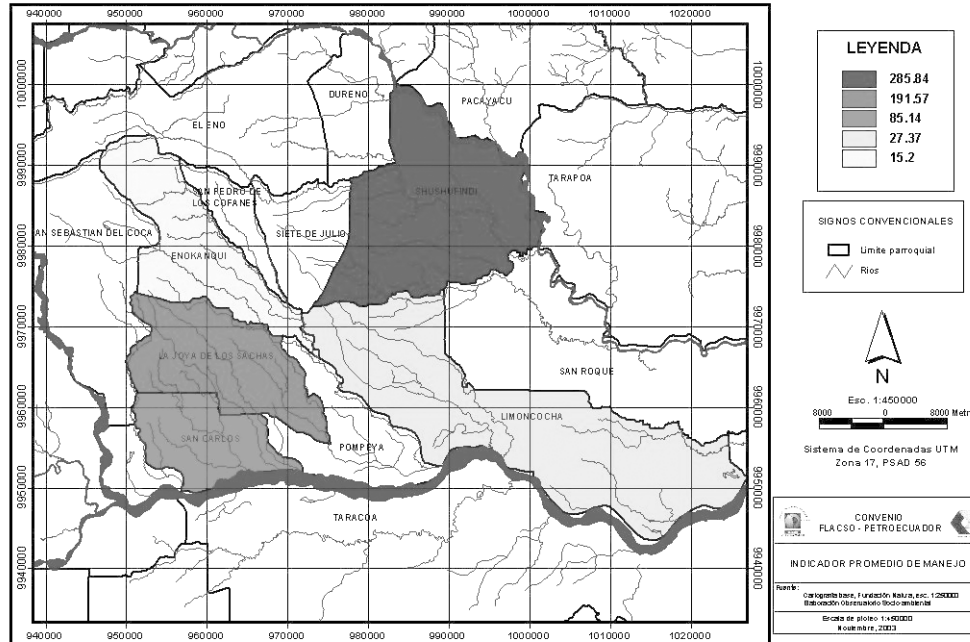
Por último, encontramos actitudes de franca desconfianza, debido a la repetición de reclamos y enfrentamientos irresueltos con la empresa. Este fenómeno es particularmente patente en las zonas de mayores impactos socio-ambientales, que coinciden con las zonas

donde las infraestructuras petroleras son a la vez más concentradas y obsoletas, como en el caso de Shushufindi.

Como se pudo constatar anteriormente, la política de relaciones comunitarias de Petroecuador sigue siendo desligada de las necesidades de la población, en particular en cuanto a la gestión ambiental. El desfase entre la profusión de actas y el nivel de satisfacción de los actores locales opaca el nivel real de riesgos de conflictos ambientales en esta zona. Para medir el nivel de riesgo real de conflicto, es preciso considerar la correlación de dos factores: el nivel de contaminación o riesgo ambiental³ y el nivel relativo de manejo de conflictos rela-

3 Definimos el nivel de riesgo ambiental, como la correlación entre cuatro factores en una determinada zona: la presencia de piscinas, la frecuencia de derrames, el volumen de crudo derramado y el volumen de crudo no recuperado.

Figura 2.
Indicador promedio de manejo de conflictos en Sacha y Shushufindi.



Fuente: OSA (2003).

cionados con la contaminación⁴. Así es como calculamos dos coeficientes de variación con respecto al promedio parroquial del Distrito Amazónico: el de contaminación o riesgo ambiental (detallado según las causas) y el de manejo de conflictos mediante acuerdos y convenios. La correlación de ambos indicadores, ponderada por la densidad poblacional, da un índice de riesgo real de conflictos en cada parroquia del área, que contrasta con el nivel de manejo de conflictos (Cf. Figuras 1 y 2).

Limoncocha aparece con el nivel de riesgo real más bajo del área de estudio, con el índice de 17,9⁵. Este resultado se explica en parte

por la baja densidad poblacional en esta parroquia (6 habitantes/km²) y en parte por que el riesgo ambiental global es inferior al promedio del distrito por parroquia. Sin embargo, cabe recordar que la presencia de piscinas y la frecuencia de los derrames en esta parroquia representan riesgos mayores al promedio (1,4 cada uno⁶). Por otro lado, el nivel de manejo de conflictos es particularmente bajo (0,18), ya que no se registraron actas firmados por la Oficina de relaciones comunitarias.

San Carlos se ubica en segundo lugar, con el índice de 35,3. Este resultado se explica por su relativamente baja densidad poblacional (17,8 habitantes/km²). Vale insistir en que padece de un nivel de riesgo ambiental (1,7)

4 Definimos el nivel de manejo de conflictos relacionados con la contaminación como la correlación entre los acuerdos de indemnización por contaminación, muerte o enfermedad de animales. Estos acuerdos resultan a menudo de conflictos con los afectados, mientras que el precio del derecho de servidumbre resulta en general de procesos de negociación de tipo comercial.

5 Base 100 = promedio por parroquia del área de estudio.

6 Coeficiente 1 = nivel promedio por parroquia del Distrito Amazónico.

muy superior a los de Enokanqui y Limoncocha. Ello se debe al nivel particularmente alto de riesgo relacionado con el volumen derramado no recuperado (2,3), el cual es comparable al de Shushufindi. Además, si bien es cierto esta parroquia beneficia de un nivel de manejo de conflictos superior a los de Limoncocha y Enokanqui, éste queda por debajo del promedio (0,85).

Enokanqui y Shushufindi se ubican en tercer lugar, con índices similares: 56,8 y 57,2. Cabe recordar que todos los indicadores de riesgo por causa para Enokanqui están por debajo del promedio, lo cual da un indicador de riesgo ambiental bajo (0,81). No obstante, vale insistir en que el nivel de manejo de conflictos ahí es particularmente bajo (0,15), en particular debido a la escasez de actas firmadas con la Oficina de relaciones comunitarias. En cambio, en Shushufindi, todos los indicadores de riesgo por causa se ubican por encima de los promedios del Distrito Amazónico, lo cual da un nivel de riesgo ambiental 3,8 veces superior al promedio. No obstante, en la medida que el nivel de manejo de conflictos es también relativamente alto (2,8), la correlación entre riesgo ambiental y manejo de conflictos es similar a la de Enokanqui, pese a una densidad poblacional dos veces superior (43,5 habitantes/km²).

Finalmente, el alto índice de riesgo real en La Joya de los Sachas (211) se explica por la conjunción de altos niveles de riesgo con niveles insuficientes de manejo de conflictos y alta densidad poblacional (50 habitantes/km²). En particular, el riesgo relacionado con el volumen de crudo derramado (19) supera considerablemente los niveles registrados en otras parroquias, lo cual agrava el riesgo implicado por la presencia de piscinas y la frecuencia de derrames. Por otro lado, el nivel de manejo de conflictos (1,9) no compensa estos resultados y se ubica por debajo de Shushufindi.

La ausencia de correspondencia entre los niveles de riesgo ambiental y niveles de asis-

tencia a la población del área evidencia que no existe correlación entre contaminación y manejo de conflictos. Por otro lado, la presencia de fuentes permanentes de contaminación –no necesariamente masiva– y la siempre incompleta limpieza y remediación crean un clima de tensión constante, aunque sea de baja intensidad. La falta de respuestas idóneas por parte de Petroecuador y el Estado ecuatoriano, no sólo para la limpieza y remediación, sino también en términos de indemnizaciones y compensaciones por obras sociales, generan un clima de desconfianza, hacia la empresa estatal y cualquier empresa petrolera en el país. A continuación veremos en qué medida y por qué razones este fenómeno se convierte en factor de crisis de gobernabilidad democrática de la región amazónica.

Factores de crisis de gobernabilidad democrática

Un problema crucial para la sociología de conflictos ambientales es la evaluación del nivel de riesgo y la magnitud de un conflicto. El nivel de riesgo de conflicto por contaminación puede variar considerablemente según si ocurre en áreas pobladas o no, cultivadas o no, etc. En ese sentido, la contaminación del agua de uso doméstico es quizá el mayor factor de conflicto, y no depende tanto del volumen derramado como de la ubicación y la importancia de la fuente contaminada para los afectados –según si existe fuentes alternativas o no, si los derrames son repetitivos aunque de baja magnitud, si se producen reiteradamente infiltraciones desde una piscina alejada, etc.

Otro factor de conflicto que no reflejan necesariamente las estadísticas ambientales, es el factor subjetivo –emocional o estético–, que concierne a la calidad de vida de los pobladores debido a la cercanía de infraestructuras petroleras. Sean defectuosas o en buen es-

tado, estas infraestructuras generan un entorno hostil y constituyen una agresión continua contra los sentidos y el psiquismo de los pobladores, lo cual puede generar tensiones constantes, aunque de baja intensidad. Tal es el caso de estaciones como Sacha en San Carlos que, a medida que se ampliaron, generaron una imagen de desolación, como resultado de la progresiva invasión por el ruido, el mal olor, los mecheros y las tuberías oxidadas a la vista.

Ahora bien, en varias zonas del norte de la RAE, subsisten conflictos latentes o de baja intensidad, que pueden desembocar en medidas de hecho o en conflictos abiertos cuando se reinician las operaciones en estas zonas. Además, la presencia de núcleos de organizaciones sociales, ampliados y consolidados por la existencia del conflicto alrededor de la herencia dejada por Texaco, contribuye a mediatizar los impactos socio-ambientales negativos, producidos por la industria petrolera desde los años setenta. Ciertamente es que las condiciones de precariedad que afectan a la población amazónica constituyen todavía el marco de relaciones de poder extremadamente desequilibradas. Sin embargo, los actores locales demuestran una creciente capacidad de presión y negociación con la empresa estatal, reforzada por su creciente capacidad de interpelación del Estado ecuatoriano, a través de la opinión pública nacional e internacional.

Al respecto, con la llegada al Ecuador de la demanda contra Chevrón Texaco -aceptada por el presidente de la Corte Superior de Nueva Loja, el 13 de mayo 2003- el "caso Texaco" se volvió un referente imprescindible para entender los conflictos ambientales actuales en toda la RAE y hasta en otros países amazónicos. Por supuesto, no es el primer conflicto ambiental mediatizado a escala internacional que estalló en Ecuador: basta con recordar el conflicto entre la Organización de los pueblos indígenas del Pastaza (OPIP) y Arco-AGIP, que arrancó en 1989 con la ex-

ploración sísmica del bloque 10 (Pastaza), o la "campaña Amazonía por la vida" lanzada en 1990 para la defensa del Parque Yasuní. En todos ellos, siempre hubo un efecto demostrativo excepcional. Los ecologistas radicales ven "el caso Texaco" no solo como una "clave para cuestionar el modelo petrolero en el Ecuador" sino que destacan, además de sus aspectos judiciales, que éste abarca la organización y la educación popular en las comunidades amazónicas y el compromiso del Estado ecuatoriano (Ramos 2000:228, Jezic 2001:185). Por ello, el "caso Texaco" se volvió un referente constante en los conflictos ambientales que estallaron en el centro y en el sur de la región, alrededor de Sarayacu y del Transcutucú (bloques 23 y 24).⁷ Por lo tanto, lo más probable es que seguirá siendo el telón de fondo de las próximas rondas de licitación petrolera anunciadas por el Estado ecuatoriano, incluso en el megaproyecto ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), para el cual se busca una alianza estratégica con el sector privado.

Hemos subrayado en otra parte que los conflictos socio-ambientales en el norte de la RAE se desarrollan en un contexto de pobreza endémica y falta de integración al ámbito nacional (Fontaine 2003a). A ello se agrega el déficit de gobernabilidad democrática cuyas características merecen ser recordadas aquí.⁸ Asumimos, siguiendo a Camou (2001:39), que hay un déficit de gobernabilidad cuando las demandas de la sociedad y las respuestas del sistema institucional entran en desequilibrio crónico, lo que se traduce por la aparición de "anomalías" percibidas como inaceptables por los actores organizados, que ame-

5 Base 100 = promedio por parroquia del área de estudio.

6 Coeficiente 1 = nivel promedio por parroquia del Distrito Amazónico.

7 Por un análisis de estos conflictos, Cf. Varios autores, 2002; López, 2004.

8 Para un análisis más amplio de la relación entre política petrolera y crisis de gobernabilidad en Ecuador, Cf. Fontaine, 2003: 89-142.

nazan la estabilidad institucional por la presión política. Una situación de crisis de gobernabilidad surge cuando aquellas anomalías se multiplican y constituyen “un conjunto de desequilibrios inesperados y/o intolerables entre demandas sociales y respuestas gubernamentales”.

En su dimensión política, se traduce por la falta de eficiencia del sistema institucional.⁹ Señales de ello son la confusa división o la superposición de competencias entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la ineficiencia de los mecanismos de control y la insuficiente responsabilidad del Estado frente a la ciudadanía. Por ejemplo, es notoria la dificultad de acceder (cuando existen) a los informes de monitoreo ambiental de la Dirección nacional de protección ambiental. También es conocido el control del Ministerio de Energía y Minas en materia ambiental, para la validación de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental de las empresas, salvo en áreas protegidas (que son del dominio del ministerio del Ambiente). A ello se agrega la falta de coherencia de las políticas públicas entre sí, particularmente tajante en el caso de las políticas energética y extractiva, ambiental y neoindigenista, como lo muestra la superposición de áreas protegidas, territorios indígenas legalizados y bloques petroleros en la Reserva Cuyabeno y el Parque Yasuní. Por último, es patente la inoperancia de la administración local del desarrollo y la incapacidad del ECORAE de canalizar los recursos procedentes de la renta petrolera para fomentar un modelo de desarrollo sostenible a escala regional y local (Andrade 2004).

En lo económico, la crisis de gobernabilidad se traduce ante todo por la excesiva dependencia hacia los ingresos de las actividades

petroleras en Ecuador (por parte del Estado central y los organismos seccionales), la conformación de economías de enclave y la insuficiente integración de la RAE al mercado nacional. Se traduce también por la privatización de la política social, es decir, la delegación de responsabilidades sociales a las empresas (públicas y privadas). Esta política se opone a la falta de autonomía financiera de Petroecuador, que desemboca en presupuestos operativos restringidos para enfrentar la crisis ambiental y social en la cual está sumergida la población del norte de la RAE.

En lo social, es notoria la persistencia de la pobreza y las patologías sociales, que 32 años de explotación petrolera sólo han profundizado. Otro factor de crisis de gobernabilidad democrática en este ámbito es la falta de autonomía de los movimientos sociales frente a los poderes locales, así como la falta de actores estratégicos encargados legítimamente de representar los intereses colectivos de las poblaciones afectadas por las actividades petroleras, a excepción notable del Frente de Defensa de la Amazonía, con sus 17 organizaciones miembros de primer y segundo grado.

Finalmente, en su dimensión ética, cabe mencionar el clientelismo, el nepotismo y la corrupción, que obstaculizan el ejercicio de la democracia, tanto al nivel local como al nivel regional. Pero el mayor problema es la fragilidad del tejido social y la ausencia de una verdadera identidad regional, asumida por las poblaciones. Este fenómeno, diagnosticado por el Consejo Provincial de Sucumbíos (2002), contrasta con la importancia de la problemática territorial y la vitalidad de las reivindicaciones identitarias planteadas por las organizaciones indígenas amazónicas desde los ochenta.

Al fin y al cabo, la falta de respuesta por parte de la industria petrolera y del Estado ecuatoriano a las demandas de la sociedad civil –por una política ambiental responsable y por una política social equitativa– conlleva la

⁹ Este aspecto corresponde a la crisis de “*governance*” en la literatura anglosajona, cuya traducción adecuada al español es “*gobernanza*”. (Cf. Solà, 2000)

radicalización de los conflictos ambientales, que suele acompañarse de la militarización de los espacios de confrontación. Frente a los impactos negativos generados por las actividades petroleras en el norte de la RAE, la posición de los movimientos indígenas y ecologistas se cristaliza en torno a la defensa territorial y la exigencia de una moratoria a aquellas actividades en el centro y el sur. En ese contexto, la política petrolera del Estado debe evolucionar, so pena de dar cabida a una crisis de gobernabilidad.

Conclusión: la paradoja de la negociación “eficiente”

La multiplicidad de los actas firmados por las Oficinas de relaciones comunitarias y de asesoría legal de Petroproducción, junto con los convenios de la GPA de Petroecuador, contribuye a explicar la baja polarización de los conflictos ambientales comparado con el alto riesgo ambiental en Sacha y Shushufindi. La importancia de las actas de indemnización, comparado con los de compensación, demuestra una preferencia por el tratamiento individual de los conflictos, frente a un tratamiento colectivo o comunitario. Ello confirma que las relaciones comunitarias de Petroecuador siguen basadas en técnicas de mitigación y resolución de los conflictos, sin real planificación a escala regional. No se revirtió esta práctica con la conversión de la UPA de Petroecuador en Gerencia, a pesar de la importancia del presupuesto manejado por esta entidad (más de 20 millones de dólares en 2003).

Al fin y al cabo, la multiplicación de acuerdos o convenios que conlleva la negociación caso por caso no garantiza la “paz social” a un Estado y a una industria que padecen de una imagen generalmente negativa entre la población amazónica y se volvieron el blanco de los movimientos ecologistas e indígenas.

Por otro lado, la aplicación de un modelo de relaciones comunitarias de corte asistencial y contingente impide a la población local participar de los supuestos beneficios socioeconómicos de las actividades petroleras, aunque ésta siga sufriendo sus impactos sociales y ambientales negativos. En este sentido, el manejo de conflictos por las diferentes unidades de Petroecuador implicadas puede ser “eficiente” a corto plazo pero es inoperante a largo plazo. Este efecto perverso de los mecanismos de negociación caso por caso, es una clave esencial para entender la radicalización de los conflictos ambientales en el país. Por último, se vuelve un factor de crisis de gobernabilidad democrática, no sólo al obstaculizar la armonización de las políticas públicas hacia un modelo de desarrollo sostenible, sino también al impedir la participación de la sociedad civil en la definición del mismo.

Bibliografía

- Andrade, Karen, 2004, “El papel del Ecorae en la Región Amazónica Ecuatoriana. Un ejemplo de crisis de gobernabilidad democrática en el Ecuador”, en G. Fontaine, editor, *Petróleo y Desarrollo sostenible en Ecuador. T2. Las Apuestas*, FLACSO, Quito.
- Arteaga, Aída, 2003, “Indicadores de gestión e impactos de la actividad petrolera en la Región Amazónica Ecuatoriana”, en G. Fontaine, editor, *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. T1. Las reglas del juego*, FLACSO, GPA Petroecuador, Quito, pp. 51-78.
- Camou, Antonio, 2001, “Estudio preliminar”, en A. Camou *et al.*, 2001, *Los desafíos de la gobernabilidad*, FLACSO, Plaza y Valdés, México.
- Consejo Provincial de Sucumbíos, 2002, “Plan participativo de desarrollo estratégico de la provincia de Sucumbíos 2002-

- 2012”, Nueva Loja, mimeo.
- FDA (Frente de Defensa de la Amazonía), 2001, “Texaco heritage – pozos”, Lago Agrio, mimeo, 320 p.
- Fontaine, Guillaume, 2003a, “Más allá del caso Texaco. ¿Se puede rescatar al Nororiente?”, en *ÍCONOS* No. 16, FLACSO-Ecuador, Quito, pp. 129-137.
- , 2003b, *El Precio del petróleo. Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica*, Quito, FLACSO, IFEA, 530 p.
- Gordillo, Ramiro, 2003, *¿El Oro del diablo? Ecuador: historia del petróleo*, Editora Nacional, Biblioteca General de Cultura, Quito.
- Jezic, Tamara, 2001, “Ecuador: The Campaign against Texaco Oil”, en D. Cohen *et al.*, 2001, *Advocacy for social justice. A global action and reflexion guide*, Oxfam America – Advocacy Institute, Washington D. C., pp. 185-202.
- López, Víctor, 2004, “Para entender el conflicto entre Sarayacu, Estado y empresas operadoras del bloque 23. Apertura petrolera, desarrollo constitucional de los derechos colectivos y crisis en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana”, en G. Fontaine, editor, *Petróleo y Desarrollo sostenible en Ecuador. T2. Las Apuestas*, FLACSO, Quito.
- OSA (Observatorio Socio Ambiental), 2003, “Estudio sobre los conflictos socio ambientales en los campos Sacha y Shushufindi (1994-2002)”, FLACSO, mimeo, Quito, 127 p.
- Ramos, Ivonne, “El Megáfono, la tela y el tambor. La campaña contra Texaco”, en E. Martínez, editor, *El Ecuador post petrolero*, Acción Ecológica, ILDIS, Quito, pp. 228-236.
- Solá, Amadeu, 2000, “La traducción de *governance*”, en *PuntoyComa* (Servicio de Traducción de la Unión Europea), 65.
- Varios Autores, 2000, *Planificación socioambiental y compañías petroleras*, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, UPA de Petroecuador, Quito.
- Varios Autores, 2002, “Petróleo, Ambiente y derechos en la Amazonía Centro Sur”, CDES, OPIP, Amazanga, Quito.

Camisea: ¿por qué cuesta tanto el gas barato?

Carlos Soria

Ph.D. por The Flinders University of South Australia
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
Email: carsoria@ec-red.com

Fecha de recepción: septiembre 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

El caso Camisea muestra como las decisiones de invertir más o menos en las medidas sociales y ambientales de los megaproyectos terminan afectando a las poblaciones más vulnerables. Una detallada revisión de los impactos causados a lo largo del trazado del gasoducto permite mostrar la ineficiencia de los actuales esquemas de supervisión aplicados por el BID, el OSINERG y el Ministerio de Energía y Minas entre otros. El artículo revisa el aporte crucial de la sociedad civil organizada, a pesar de su fraccionamiento ideológico y práctico. Información detallada de las vulneraciones ocurridas confirman la lección aprendida que sugiere la necesidad de crear en el BID un auditor ambiental y social del BID, que reporte a un consejo tripartito de representantes de la sociedad civil, los pueblos indígenas y la banca multilateral.

Palabras clave: Amazonía, gas, indígenas, políticas, Derechos Humanos, Perú.

Abstract

The Camisea case shows that decisions to invest more or less in the social and environmental aspects mega-projects end up affecting the vulnerable populations. One detailed revision of the impacts caused throughout the layout of gas pipeline shows the inefficiency of current schemes of supervision applied by the I.A.D.B., the OSINERG and the Ministry of Energy and Mines among others. The paper reviews the crucial contribution of the organized civil society, in spite of its ideological and practical division. Detailed information of human rights affected confirm the learned lesson that suggests the need to create in the I.A.D.B. an environmental and social auditor of the project it finances, that reports to a tripartite council formed by civil society, indigenous peoples and multilateral banks representatives.

Key words: Amazon, Gas, Indigenous Peoples, Policies, Human Rights, Perú

“No todo desarrollo es bueno
para los pobres”

Padre Gastón Garatea¹

El yacimiento de gas de Camisea fue descubierto durante la segunda mitad de los 1980, durante los difíciles años del gobierno de Alan García (1985-1990). Un primer acuerdo exploratorio por 3.500 millones de dólares con Royal Dutch Shell no llegó a concretarse. Finalmente, el consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP) –conformado por las empresas Tecgas N. V., Pluspetrol Resources Corporation, Hunt Pipeline Company of Peru L. L. C., S K Corporation, Sonatrach y Graña y Montero S. A.– se adjudicó el proyecto con una inversión comprometida de 1.600 millones de dólares². Esos 2.000 millones de diferencia entre ambas inversiones explican en buena medida el amplio margen de utilidad, así como el amplio conjunto de externalidades negativas que el proyecto traslada a la cuenta del ambiente, los pueblos indígenas y las poblaciones locales. Este artículo presenta algunos de estos casos, registrados por consultores independientes, así como por funcionarios del propio gobierno peruano.

En primer lugar tan sólo AIDSESP³ y algunas organizaciones ambientales norteamericanas como *Rainforest Action Network* y *Amazon Alliance* se han opuesto al proyecto Camisea. Mientras que el resto de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y nacionales han aceptado la necesidad e importancia del proyecto, pero han discrepado con

la forma de su implementación y con las externalidades negativas del mismo que han sido abusivamente cargadas a la cuenta de los actores más débiles en el proceso.

El proceso de implementación ha estado caracterizado por una política de hechos consumados y de discurso ambiguo en temas ambientales que, en la práctica, ha dejado de lado la cautela del ambiente y de la población. Como en otros conflictos socioambientales la generalidad de las afirmaciones se incrementa en la medida que se incrementa la jerarquía del funcionario que la plantea. Así se ha pasado de las afirmaciones detalladas de problemas específicos por parte de las organizaciones críticas al proyecto, a las afirmaciones de la empresa, el Ministro de Energía y Minas o el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre que el proyecto cumple con los estándares internacionales para el caso (claro que sin decir que la legislación peruana es débil y que el Estado no financia adecuadamente la supervisión de la misma).

La sociedad civil se ha dividido entre algunos críticos al proyecto como AIDSESP, el Foro Ecológico, el Foro Ciudades para la Vida y la Sociedad Nacional del Ambiente, entre otros, y unas más conciliadoras, que implementan componentes del proyecto como CONAP⁴, Pro Naturaleza y la Red Ambiental Peruana. Esta alineación de fuerzas, por demás débil, es aún más débil si se considera que los críticos al proyecto han estado divididos por el interés de AIDSESP de ser el vocero único de los mismos, a lo que Foro Ecológico planteó que los enfoques indígena y ambiental eran complementarios.

Pero definitivamente el impacto más grave viene por el lado de las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. En un texto ya clásico, Jean Jackson señala que existen cuatro tipos de efectos negativos en la relación entre

1 Presidente de la Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza.

2 “Otorgan a Transportadora de Gas del Perú S.A. la concesión de transporte de gas natural por conductos de Camisea al City Gate en Lima”, Resolución Suprema 101-2000-EM (06/12/2000).

3 Asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana.

4 Confederación de nacionalidades amazónicas del Perú.

Estado y sociedades a pequeña escala, es decir, aquellos grupos de cazadores-recolectores, con baja densidad poblacional, carentes de estratificación y centralidad política, que practican la horticultura. Esos efectos son la exterminación y el genocidio⁵; la pérdida de las actividades económicas propias del sistema de autosubsistencia y del control en la autonomía, especialmente respecto de los derechos sobre la tierra y los recursos naturales; la ruptura del equilibrio poblacional y el deterioro en la salud; la reducción de la autonomía cultural y autodeterminación (Jackson 1984).

En una carta previa al cierre financiero del préstamo del BID⁶ el Foro Ecológico⁷ señaló:

5 Sobre el tema, merece un tratamiento aparte el caso de la salud de los pueblos en aislamiento voluntario en el caso Camisea, donde el propio Ministerio de Salud reconoce que se han producido muertes.

6 La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa encargada del transporte de gas natural y líquidos desde Camisea a la costa, realizó una solicitud de financiamiento al BID y a la Corporación Andina de Fomento (CAF). Dicha solicitud de préstamo fue aprobada por ambos directorios requiriendo una serie de condiciones que deben ser satisfechas antes de la firma del préstamo o cierre financiero y/o cumplidas a lo largo del préstamo. El consorcio ha publicado el estado del cumplimiento en <http://www.camisea.com.pe/esp/estados.asp/>

Organizaciones de la sociedad civil desde Conservación Internacional y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hasta Foro Ecológico están descontentos con este reporte y solicitaron a Antonio Salas y Luisa Elvira Belaunde, evaluar una revisión del mismo consultado a las organizaciones indígenas presentes en el caso. Dicho reporte fue presentado en un taller que dio motivo a que las diferentes organizaciones se pronunciaran manifestando su descontento con el cierre del proyecto. La carta del Foro Ecológico que se cita en este artículo se origina en dicho contexto.

El financiamiento del BID consiste en un préstamo de 75 millones de dólares, del capital ordinario (préstamo A) por un plazo de hasta 14 años, y un préstamo sindicado de hasta 60 millones de dólares (préstamo B) por un plazo de hasta 12 años, cuyos recursos provienen de instituciones financieras que suscriben acuerdos de participación con el BID. La tasa de interés en ambos préstamos será equivalente a las tasas del mercado del sector privado (BID 2004).

“[Después de] contrastar las aseveraciones del informe de cumplimiento [...] estamos en condiciones de afirmar que hay serias deficiencias tanto en el comportamiento del BID, del Gobierno del Perú, a través de las varias agencias y niveles del Estado que participan, así como por parte de las varias empresas del consorcio del Gas de Camisea”.⁸

Las críticas al BID y su préstamo al gobierno del Perú se centraron en que “ni un solo dólar de los 5 millones” que pagarán todos los peruanos se destinó a fortalecer las capacidades de la sociedad civil peruana, o a estimular su coordinación y participación, siendo el caso que los recursos del préstamo se han destinado a agencias estatales para compra de software, camionetas 4x4 y otros. Más aún, en julio de 2004, con la llegada del cierre del

En diciembre de 2002 el BID aprobó un préstamo de 5 millones de dólares al gobierno peruano para fortalecer la capacidad institucional de las agencias gubernamentales para inspeccionar, supervisar y vigilar las medidas de mitigación ambiental y social y los impactos del proyecto de Camisea, así como tomar acciones adicionales que atenúen los impactos ambientales y sociales.

7 El Foro Ecológico del Perú surgió como un espacio de debate de políticas ambientales en el contexto de la pre temporada electoral de 1995. A partir de entonces se ha ido consolidando como una red nacional de ONG, ciudadanos y organizaciones de bases, interesados en promover el desarrollo sostenible del Perú. En su última Asamblea, en 2001, participaron más de 1200 miembros y unas 250 organizaciones.

8 Carta del 26 de Julio de 2004 dirigida por Julio Díaz Palacios, Presidente del Foro Ecológico del Perú, a Enrique Iglesias, Presidente del BID, sobre el cumplimiento de las condiciones exigidas por el banco al Proyecto del Gas de Camisea. En esta carta el Foro Ecológico señalaba que no había recibido respuesta a ninguna de las cartas dirigidas al BID hasta entonces.

El módulo de transporte del gas y de los líquidos del gas desde Camisea hasta la costa y la distribución del gas en Lima y Callao fue adjudicado al consorcio formado por las empresas Techint (Argentina), Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil Co. (USA), SK Corp. (Corea), Sonatrach (Argelia) y Graña y Monte-ro (Perú) y los correspondientes contratos de concesión fueron firmados el 9 de diciembre del 2000.

financiamiento, las ONG peruanas financiaron sus reuniones de coordinación y su capacidad de propuesta sin recibir el apoyo del préstamo del BID, del consorcio Gas de Camisea⁹ o del Grupo técnico de cooperación interinstitucional (GTCI)¹⁰ éste último crea-

do para mejorar, entre otros, la relación con la sociedad civil. Peor aún, las condiciones del BID no incluyen un monitoreo de biodiversidad, condición mínima de un proyecto que implica impactos directos sobre cinco áreas naturales protegidas y reservas territoriales indígenas.

Un segundo grupo de críticas del Foro Ecológico se orientó al gobierno del Perú y sus agencias, pues el Presidente Toledo y su Ministro de Energía y Minas aseguraron en todo momento que el gas de Camisea llegaría a Lima el 9 de agosto de 2004, lo que implicó una marcha forzada del proyecto. Esto redundó en que quienes plantearon observaciones por los incumplimientos al estudio de impacto ambiental (EIA) han sido despedidos o forzados a renunciar.¹¹ Más aún, el GTCI no ha sido un espacio de debate y reflexión sobre el comportamiento del Estado en la ejecución del proyecto, sino que ha funcionado como una oficina de coordinación del Ministerio de Energía y Minas, para asegurar que el proyecto no fuera entorpecido por las múltiples agencias y sectores con competencias sobre el proyecto.

Un tercer grupo de críticas del Foro Ecológico se refiere a TGP, Pluspetrol y las sub-

9 El esquema diseñado para el desarrollo del proyecto comprendió dos módulos que fueron ofrecidos en la modalidad de proyectos integrales, lo cual significa que se fijaron los parámetros objetivos a cumplir y se dejó en manos de los inversionistas la decisión y flexibilidad para elegir los detalles técnicos de diseño, construcción y operación, dentro del cumplimiento de las normas vigentes en el país. Así el primer módulo del proyecto es el de explotación de los yacimientos de gas de Camisea y el segundo el de transporte del gas y de los líquidos del gas desde Camisea hasta la costa y la distribución del gas en Lima y Callao.

El módulo de explotación de hidrocarburos en el lote 88 – Yacimientos de Gas de Camisea fue adjudicado al consorcio formado por las empresas Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil Co. (USA), SK Corp. (Corea) e Hidrocarburos Andinos (Argentina) y el correspondiente contrato de licencia fue firmado el 9 de diciembre del 2000.

El módulo de transporte del gas y de los líquidos del gas desde Camisea hasta la costa y la distribución del gas en Lima y Callao fue adjudicado al consorcio formado por las empresas Techint (Argentina), Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil Co. (USA), SK Corp. (Corea), Sonatrach (Argelia) y Graña y Montero (Perú) y los correspondientes contratos de concesión fueron firmados el 9 de diciembre del 2000.

10 Mediante el Decreto Supremo 120 - 2002 - PCM el gobierno creó el GTCI Camisea, con la finalidad de coordinar y fortalecer los mecanismos de supervisión, vigilancia y fiscalización de los aspectos ambientales y sociales derivados de la ejecución del Proyecto Camisea. Este está conformado por el Organismo supervisor de la inversión de energía (OSINERG), el Ministerio de agricultura – Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la Comisión nacional de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos (CONAPAAA), el Consejo nacional del ambiente (CONAM), el Ministerio de salud – Dirección general de salud ambiental (DIGESA), la Defensoría del pueblo, el Ministerio de transporte – Dirección general de caminos, el Instituto nacional de desarrollo (INADE), el Ministerio de agricultura – Programa especial de titulación de tierras, la Dirección general de capitanías y guardacostas en la marina (DICAPI), el Instituto nacional de cultura (INC) y el Ministerio de energía y minas – Dirección general de asuntos ambientales (DGAA) y Dirección general de hidrocarburos (DGH).

Los objetivos del GTCI son :

- a. Garantizar la protección ambiental de las áreas del proyecto, coordinando la supervisión, monitoreo y fiscalización de aspectos ambientales y sociales.
 - b. Contribuir a una visión de desarrollo sostenible de las comunidades y poblaciones del proyecto.
 - c. Contribuir a preservar los valores étnicos y culturales de las comunidades y poblaciones del Proyecto Camisea.
 - d. Ser contraparte gubernamental del Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los recursos del Tesoro Público.
- 11 Como uno de los directores del Instituto de Defensa Civil, que opinó a favor de realizar una evaluación multidisciplinaria del tendido de la red de gas en Lurín y Pachacamac, en vez de la evaluación de riesgos que ordenó su sucesor, así como funcionarios del GTCI, que han sido removidos por presión del Consorcio del Gas de Camisea

contratistas empresas que han presionado a los funcionarios para que no opinen en contra del proyecto y cuando así lo han hecho para que su información no se difunda en el sitio web oficial del proyecto¹². Por ejemplo, el informe del Ministerio de Salud sobre los fallecimientos entre las poblaciones de la Reserva Nahua-Kugapakori y las poblaciones Machiguenga del Bajo Urubamba no fue aceptado para ser publicado en la página web del proyecto y sólo se publicó en Internet en el portal de AIDSESP¹³. Por otro lado, el ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA de la planta de gas de Pluspetrol señalando en la selección de sitio que Playa Loberia en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas era el único sitio posible en toda la costa peruana después de considerara 17 posibles sitios, incluyendo Playa Melchorita. Unos meses después al considerar la propuesta de Hunt Oil para otra planta de gas, esta vez en Playa Melchorita, en la selección de sitio se dice nuevamente que es el único sitio posible en toda la costa peruana después de considerar a 17 posibles sitios. Peor aun, Pluspetrol descartó el diseño de ingeniería ahora aprobado para Hunt Oil.

Finalmente, las compensaciones han sido forzadas sobre la población sin darle oportunidad de recibir asesoría legal o contable para evaluar los impactos que se les compensaba. Algunos afectados han sido discriminados por organizar a la población para defenderse. Ese es el caso de Ángel Bautista a quien solo se le compensó por uno de los tres conceptos¹⁴ que se compensó a los demás.

12 www.camisea.com.pe/

13 www.aidesep.org.pe/

14 Los contratos de compensación por derecho de vía, el derecho adquirido por TGP para utilizar una banda 25 metros de ancho a lo largo del gasoducto, comprendían tres conceptos:

- a. el daño directo a cultivos y propiedad dentro de los 25 metros,
- b. El lucro cesante por el periodo de producción, ser-

El “Informe Caffrey” manifiesta que el objetivo del personal de relaciones comunitarias de las empresas del consorcio era negociar las cantidades de compensación, comunidad por comunidad (Caffrey 2002). Durante febrero y marzo, Pluspetrol, TGP y Techint presionaron a cada comunidad para que firmara acuerdos de compensación. El proceso, los cálculos, los documentos legales y técnicos eran muy complejos, por lo que, según Caffrey:

“[Las negociaciones] han agobiado a las comunidades indígenas creando un ambiente de confusión, tensión y competencia. Las comunidades no están preparadas para responder a las tácticas eurocéntricas de negociación utilizadas por los abogados y gestores de las compañías que las han visitado. Dichas comunidades carecen de asistencia técnica y legal adecuada para tomar decisiones informadas. El proceso de negociación es completamente inapropiado e injusto. Las compañías han dictado los términos de negociación y las comunidades se sienten presionadas a responder aunque no entiendan completamente los términos o las propuestas de las compañías no sean suficientemente adecuadas” (Caffrey 2002)

En otro caso, Caffrey relata una carta de un acuerdo entre Techint y la comunidad Chokoriari, en el Bajo Urubamba, por el uso de dos hectáreas para un campamento de trabajadores. Esta carta tenía cláusulas que obligarían a la comunidad a hacer cosas que no habían sido consultadas a la comunidad. Estos documentos y la percepción de las comunidades sobre el proceso *subrayan el hecho de que sus derechos para efectuar un consentimiento informado y libre han sido y continuarán siendo violados si no se crean cambios significativos.*

Por su parte, los comisionados de las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho,

- vicios y demás que se pierde por efecto de las obras de instalación del gasoducto, y
- c. el daño directo a cultivos y propiedad fuera de los 25 metros,

Cusco, Huancavelica e Ica visitaron las zonas del tendido del gasoducto. Recibieron quejas de ciudadanos y comunidades y reportaron:

“En la zona andina de Ayacucho y Huancavelica se presentaron problemas ambientales (tala de árboles frutales y madereros; daño a pastos naturales por excavación de zanjas y por derrame de líquidos químicos tóxicos; migración y muerte de animales silvestres por uso de explosivos; destrucción de piscigranjas y fuentes de agua; alteración y depredación de flora y fauna; alteración del paisaje natural; contaminación de agua, suelo y aire, así como contaminación sonora), problemas socio-económicos (afectación de las vías de comunicación terrestre hacia las comunidades; generación de conflictos internos dentro de las comunidades por los acuerdos suscritos por sus dirigentes; la contratación de dirigentes en el proyecto Camisea debilitó la capacidad de negociación y reclamación de las comunidades; conflictos entre las comunidades por acceder a trabajo en el Proyecto Camisea; no se respetó el derecho de consulta a las comunidades; inseguridad ciudadana por la llegada de foráneos; reclamos de madres solteras y niños/as no reconocidos por personal de empresas ejecutoras, por ejemplo, en el Distrito de San Miguel; contratación de mano de obra foránea y no de la zona; conflictos entre los comuneros debido a los insatisfactorios términos que aceptaron sus juntas directivas o dirigentes en la negociación de los acuerdos compensatorios con Techint –en algunos casos los acuerdos se dieron sin participación de los comuneros afectados por el derecho de vía–; falta de información de la comunidad, lo que hace que los comuneros no tengan capacidad para entrar en una negociación; desbalance de poder que afecta a los ciudadanos y comunidades en las negociaciones con las empresas Techint ó TGP; subevaluación de tierras para fines de compensación en los acuerdos por el derecho de vía; trato diferenciado para fijación del monto de la compen-

sación en función al nivel de organización comunal; criterios no uniformes para determinar compensaciones; afectó ingresos económicos distribución inequitativa de regalías entre las regiones; elevación del costo de vida; incremento de enfermedades respiratorias y de transmisión sexual; destrucción de sitios arqueológicos encontrados en la ruta del gasoducto) y problemas político-institucionales (ausencia de entidades estatales que supervisen las operaciones de tendido de la tubería y el cumplimiento de acuerdos; falta de recursos y capacidad de respuesta de las instituciones del Estado para proteger los derechos de los ciudadanos; deficiente manejo de la problemática local por las entidades reguladoras del Estado; insuficiencia de mecanismos regulares de reclamación; indefinición de competencias entre entidades reguladoras; desconocimiento e inoperancia de las entidades reguladoras del Estado)”¹⁵.

En la zona amazónica de Cusco, Alto y Bajo Urubamba se han presentado problemas ambientales: migración de aves y peces por contaminación sonora, de aguas y tala de bosques, afectación de la fauna y biodiversidad en general. Se acompañaron de problemas socio-económicos: falta de información de las comunidades nativas sobre los EIA, inseguridad ciudadana por llegada de migrantes, mujeres infectadas con enfermedades de transmisión sexual (sífilis), falta de asesoramiento a las comunidades y ciudadanos para afrontar las negociaciones con las empresas del consorcio, cambio de las costumbres y pérdida de identidad de los pueblos amazónicos, cambio de los patrones extractivos de los recursos naturales; falta de titulación de tierras, surgimiento de nuevas enfermedades en la zona y muertes por enfermedades (gripe, sífilis), cambio de hábitos alimenticios en la población nativa, migración de colonos y exclusión

15 La relación original fue elaborada por el Dr. Iván Ormachea Choque.

de los nativos de sus zonas de influencia; invasión de tierras de pueblos amazónicos por colonos, incremento en el consumo de alcohol; cambios en los roles familiares productivos (los varones salen a trabajar para las actividades del proyecto Camisea y las mujeres asumen las labores económicas que anteriormente asumían los varones), presencia de comerciantes en la zona del proyecto, presencia de prostitución, ingreso de migrantes y foráneos aumenta presión sobre los recursos naturales, asimetría en el manejo de la negociación por falta de información de los ciudadanos y las comunidades, discriminación laboral (extranjeros obtienen mayores ingresos por el mismo trabajo que realizan los trabajadores locales o nacionales y se prefiere a recomendados o parientes de autoridades locales al contratar mano de obra), invasión de tierras en el paso del gasoducto para obtener compensaciones por el derecho de vía). También hay problemas político-institucionales: afán protagónico de los gobiernos locales y regionales por el posible manejo de recursos provenientes de las rentas de las actividades del proyecto Camisea, falta de coordinación entre las autoridades para resolver reclamos de los ciudadanos, discrepancia entre las organizaciones que representan o protegen los derechos de los pueblos amazónicos sobre temas vinculados al Proyecto Camisea – la estatal CONAPAAA¹⁶ y las indígenas AIDSESP, COMARU¹⁷ y CONAP).

En la vertiente occidental de los Andes, departamento de Ica se han presentado problemas ambientales: contaminación de aguas del río Pisco, afectación al ecosistema del camarón de río, ubicación de la planta de fraccionamiento de líquido de gas natural en la playa Lobería (en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas), contaminación



Gonzalo Vargas

sonora producida por las actividades de buques, la planta de fraccionamiento, camiones y maquinaria en general, alteración de los ciclos de migración de aves que visitan la reserva, incremento de buques en la bahía de Paracas puede afectar las labores de pescadores artesanales y aumentar las probabilidades de colisiones y contaminación de las aguas marinas. También hay problemas socio-económicos: afectación a asociaciones de recolectores de camarón del río Pisco, potencial afectación de las actividades turísticas de dañarse el ambiente de la Reserva Nacional de Paracas y posible incremento de industrias y empresas asentadas en la zona de amortiguamiento de la reserva.

En Lima, ciudadanos de la zona sur de Lima (Papa León XIII) se quejan de no haber sido informados con anticipación de las obras que se realizarán para tender la tubería de gas hacia Lima. Por otro lado, ciudadanos de la zona Lurín Pachacamac, luego de hacer un seguimiento del tendido de la red principal de gas, han denunciado incumplimientos de los compromisos asumidos en el EIA como que el gasoducto principal da curvas de 90° cuando no debería hacerlo¹⁸, el conducto no

16 Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

17 Consejo Machiguenga del Río Urubamba.

cumple con estar forrado con polietileno desde su fabricación, lo que ha causado que mientras esperaba ser enterrado ya mostrara efectos de la corrosión salina –ello se agrava si se considera que los suelos de la zona muestran un ciclo de ascenso y descenso de aguas salinas del subsuelo.

De manera más específica Iván Brehaut, un consultor contratado por el GTCI para revisar el tema de las compensaciones, señala debilidades de las federaciones para poder asimilar un proceso legal y de valorización económica, pues la sola presencia de las federaciones en los procesos de negociación no es garantía de un proceso equilibrado entre empresas y comunidades, como tampoco la participación de las ONG que no están facultadas a intervenir en contratos privados. Ninguna negociación puede ser equitativa si los términos de la misma, así como las escalas de valorización, no son abiertamente discutidas con los diferentes actores del proceso, comunidades, federaciones, empresa y Estado, lo que no ha ocurrido en el caso. La información sobre los procedimientos para establecer compensaciones no puede ser información reservada. Negociar las compensaciones únicamente al nivel de comunidad no es lo más conveniente, aunque algunas de las comunidades así lo hayan deseado e impuesto; antes de iniciar las negociaciones, los actores deberían haber definido criterios para guiar los acuerdos y garantizar estándares mínimos para la compensación, así como garantizar la asesoría legal y técnica necesaria para las comunidades –en el caso de la comunidad de Huancano, Ica, los campesinos fueron instruidos de no solicitar consejo legal ni ense-

ñar la propuesta a nadie-. Las autoridades y organizaciones que participan en acuerdos de compensación, como observadores o asesores, deberían elaborar un informe en donde se plasme su opinión respecto a la equidad del proceso y de los acuerdos. Existen serios cuestionamientos a los procesos de compensación desarrollados por TGP en el Alto Urubamba, así como por el uso de valorizaciones diferentes a las de CONATA¹⁹, como oficialmente se comprometió ante el Estado. Brehaut concluye que el Estado debería revisar la valorización de las servidumbres y el proceso de negociación de compensaciones aplicado por TGP (Brehaut 2004).

Que el ministerio de Energía y Minas se comporte como lo ha hecho y favorezca la estrategia de hechos consumados de “Camisea como sea” no sorprende, pero que el BID haga oídos sordos a propuestas concretas para corregir estos defectos, sí nos desilusiona de la idoneidad de estos organismos para evaluar el impacto ambiental de los proyectos que ellos financian. Para mostrar un ejemplo, en su carta el Foro Ecológico planteó:

“Que el equipo ambiental del BID con participación de la sociedad civil peruana pueda participar de una visita de inspección a todo el trayecto del gas de Camisea, no sólo en sobrevuelo sino con visitas de campo, como requisito fundamental para dar paso al cierre del financiamiento.

Que se realice una auditoria independiente, que ayude a prevenir impactos para los próximos 32 años del proyecto.

Que se convoque a la sociedad civil y al GTCI a proponer estándares de calidad en la gestión de dicho proyecto.

Que se provea acceso a toda la información de monitoreo.

Que se financie la participación de la sociedad civil peruana en el proyecto y su monitoreo.”

El BID contestó a través de su responsable pa-

18 Se trata de una línea principal del ducto con casi 1500 libras de presión por pulgada. La disposición es que las curvas deben tener un ángulo de 28 grados en vez de 90 grados, obviamente ello requiere mayor distancia para la curva, pero tratándose de una línea principal hay que evitar incrementos excesivos de la presión sobre la línea.

19 Consejo nacional de tasaciones.

ra asuntos ambientales señalando de manera general que se había dado adecuado seguimiento al tema ambiental, pero sin contestar de manera específica ninguno de los cinco puntos planteados como requisitos para el cierre de préstamo. ¿De qué sirve que el BID tenga un departamento de temas ambientales y unas políticas ambientales, si cuando llega la implementación de los proyectos que financia se deja arrastrar por las políticas de hechos consumados, que en el caso Camisea han hecho que las infracciones al EIA original no sean sancionadas sino que se convirtieron en “una modificación al EIA” -que fuera aprobada después de que ya habían ocurrido los hechos que supuestamente este documento “preveía”-?

No resulta extraño, entonces, que la población no confíe en la seriedad de la intervención del BID y los mecanismos nacionales de fiscalización que intervienen en estos proyectos, como el OSINERG y, menos aun, en el Ministerio de Energía y Minas. Estos casos no hacen sino confirmar la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil como vehículo para el diálogo entre la sociedad, el Estado y las empresas sobre la oportunidad del desarrollo. Ha llegado la hora de crear en el BID un auditor ambiental y social, que reporte a un consejo tripartito de sociedad civil, pueblos indígenas y banca multilateral.

Bibliografía

BID, 2004a, “BID aprueba 135 millones de dólares para proyecto de gas natural de

Camisea de Perú. Financiamiento de una de las inversiones más importantes en la historia de Perú”, Comunicado de prensa, 10 de septiembre de 2003, www.iadb.org/NEWS/Display/PRView.cfm?PR_Num=164_03&Language=Spanish/

BID, 2004b, “BID y TGP firman financiamiento de \$75 millones para proyecto de gas natural Camisea. Inversión histórica reportará importantes beneficios económicos y sociales al Perú”, Comunicado de prensa, 30 de agosto de 2004, www.iadb.org/NEWS/DISPLAY/PR-Print.cfm?PR_Num=183_04&Language=Spanish/

Brehaut, Iván, 2004, “Informe final de consultoría, diagnóstico de los procedimientos de compensación a las comunidades nativas del ámbito del proyecto Camisea”, Ministerio de Energía y Minas y Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional.

Caffrey, Patricia B., 2002 (abril), “Estudio Ambiental y Social Independiente del Proyecto de Gas Camisea, elaborado por encargo de AIDSESEP y COMARU”, www.amazonwatch.org/amazon/PE/camisea/reports/camisea_ind_study_020506_esp.pdf/

Jackson, Jean, 1984, “The Impact of the State on Small-Scale Societies” in: “Studies in Comparative International Development”, XIX, 2, Summer: 3-32.

PERUPETRO, 2004, “Contratación del Proyecto Camisea”, <http://mirror.perupetro.com.pe/camisea05-s.asp/>

Los conflictos ambientales del gas boliviano

Marc Gavaldá Palacín

Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Colabora con la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba-Bolivia)

Mail: guarapitu@cascall.org

Fecha de recepción: septiembre 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

Los ajustes neoliberales introducidos en la legislación boliviana han facilitado la apropiación de los recursos hidrocarburíferos por parte de las transnacionales petroleras. Estas compañías invaden territorios indígenas y áreas protegidas. En su accionar generan graves conflictos ambientales con las comunidades locales. La construcción de los gasoductos Bolivia-Brasil, Cuiabá y Gasyrg así como la oposición de la población a exportar gas a Estados Unidos nos reflejan cómo la población se organiza para resistir al expolio de las compañías petroleras. Las movilizaciones populares de “La Guerra del gas”, en octubre 2003 no han terminado, porque el gas sigue en manos extranjeras.

Palabras clave: compañía petrolera, gas natural, conflictos ambientales, gasoducto, territorios indígenas, Bolivia

Abstract

The Neoliberal Structural Adjustment introduced in Bolivian Law have facilitated the appropriation of the Hydrocarbon Resources by the transnational oil companies. These companies invade indigenous territories and protected areas. Their activities generate serious environmental conflicts with the local communities. The construction of the Bolivia-Brazil, Cuiabá and Gasyrg gas pipelines as well as the popular resistance to the exportation of gas to the USA illustrates how the people organize themselves to resist the pillage of the oil companies. The popular mobilizations of the “Gas War” in October have not yet finished, as the gas continues to be in foreign hands.

Key Words: Oil Company, Natural Gas, Environmental Conflicts, Gaspipeline, Indigenous Territories, Bolivia

En octubre de 2003, Bolivia amaneció sin presidente y con un saldo de 80 muertos y centenares de heridos de bala durante las movilizaciones conocidas como La Guerra del Gas. El descubrimiento de que el presidente Sánchez Losada había firmado un contrato de exportación de gas a Estados Unidos fue la chispa que prendió la mecha. Las empresas beneficiarias del contrato (Repsol, British Gas y BP) aguardaban silenciosas el desenlace del conflicto que les quitó de las manos la posibilidad de exportar los 13,42 trillones de pies cúbicos de gas a un precio de oferta. El proyecto del consorcio Pacific LNG pretendía licuar diariamente 30 millones de m³ de gas en las costas de Chile para venderlo a las termoelectricas californianas de Sempra Energy obteniendo unos beneficios millonarios.

El vicepresidente Carlos Mesa tomó el mando del país, consiguiendo una tregua de las movilizaciones sociales con la promesa de iniciar un proceso de revisión de los contratos petroleros. Este proceso culminó con el referéndum de mayo de 2004, en el que el pueblo boliviano asiste con desencanto a una consulta que pretende “cambiar todo para que no cambie nada”. En palabras del presidente Mesa: “No se pueden modificar los contratos con las petroleras porque esto es declarar la guerra al mundo”.

Este artículo visualiza los primeros años del neoliberalismo petrolero en Bolivia. A diferencia de otros países como Ecuador y Colombia, la explotación petrolera en este país no arrancó en magnitud sino hasta la década de los noventa. Analizaremos el marco legal que fue impuesto por agentes externos para convertir a Bolivia en “pasto de transnacionales”. Las concesiones petroleras invaden territorios indígenas y áreas protegidas. Por otro lado, repasaremos el desarrollo de los conflictos socio-ambientales de los mega-proyectos de gas detallando cómo las poblaciones se organizaron en defensa de su entorno inmediato y sus recursos mientras el estado asumió un rol defensor de los intere-

ses extranjeros en contra de su propia población y territorio.

El ajuste estructural

En 17 años de neoliberalismo en Bolivia lo evidente es que el modelo ha fracasado, pues no ha resuelto los principales problemas de los bolivianos y más por el contrario ha empujado a más y más personas a la miseria extrema. Los diferentes gobiernos han aplicado incondicionalmente las recetas de los organismos internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). Decreto a decreto, se ha desnacionalizado el país, que ha visto como sus empresas históricas, estructuradas con el ahorro interno de los trabajadores, pasaban a manos de transnacionales.

Se descuartiza el Estado

Durante el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997) se reformularon todas las leyes en base a los nuevos moldes de la Banca Multilateral. A este proceso se le llamó “ajuste estructural” y constituye uno de los hitos históricos en la pérdida de la soberanía nacional de Bolivia. Nunca, en tan poco tiempo, el país perdió tanto: el país se desprendió de todas las infraestructuras estatales, sus yacimientos y sus trabajadores.

El Estado también perdió su rol como ente regulador. Esto queda suficientemente reflejado en la nueva Ley del sistema de regulación sectorial, donde aparece la figura de las superintendencias.¹ Estas instituciones fueron creadas por el Banco Mundial como gobiernos paralelos independientes del Estado para regular alguna actividad productiva del país. Son financiadas por el Banco Mundial y por las propias empresas a partes iguales, y amparadas en la Ley SIRESE; se les otorgan un po-

1 N. del E.: Esta ley, conocida como Ley SIRESE, es la ley 1600 del 28 de octubre de 1994.

der por encima del propio Estado, o sea, son estructuras no democráticas de empresarios que se regulan a sí mismas. Y como se esperaba, desde su creación, la Superintendencia de hidrocarburos ha actuado como verdadero defensor de la impunidad petrolera.

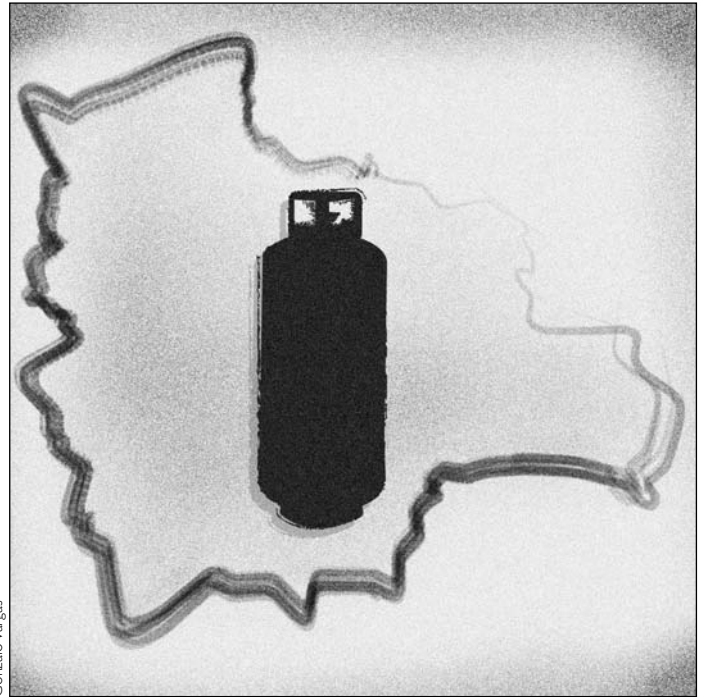
La Ley de capitalización transfiere el ahorro interno boliviano (concentrado en la industria estatal) hacia las transnacionales.² El primer paso consistió en hundir intencionalmente a las empresas estatales. Luego se cuantificaba su patrimonio y por último se ofreció las empresas a socios extranjeros, quienes se quedaron con el control de la empresa y el 50% de las acciones con la simple promesa de inversión de la misma cantidad que el patrimonio cuantificado. El otro 50% quedaría repartido entre todos los bolivianos a través de los fondos de pensiones, administrados también por bancos extranjeros. En total, se pagó 835 millones de dólares por una empresa cuyos activos alcanzaban 1.105 millones de dólares. Las reservas probadas eran de 161 millones de barriles, es decir, 4.830 millones de dólares, al precio de 30 dólares / barril. Esta cantidad es superior a la deuda externa del país. Además fueron entregados gratuitamente a las empresas Chaco y Andina, 6 trillones de pies cúbicos de gas en reservas probadas. (Mariaca 2000).

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue dividida en cuatro, y repartida a tres consorcios extranjeros provenientes de España, Estados Unidos y Holanda. Momentáneamente se dejó las refinerías (YPFB Residual) en manos de los antiguos operarios de YPFB, para en 1999 ser privatizada.

Nueva Ley de hidrocarburos

El 30 de abril de 1996 se aprobó la nueva Ley de hidrocarburos, que atraería inversiones,

2 N. del E.: Se trata de la ley 1544 del 21 de marzo de 1994.



Gonzalo Vargas

convirtiendo a Bolivia en un país petrolero. Los cambios fundamentales que introducía esta ley escrita en los despachos de una consultora de Washington son la rebaja de impuestos del 50% al 18% y la ampliación de las concesiones tanto en extensión (hasta 1,5 millón de ha) como en tiempo (40 años).

La asfixia total del ente estatal se produce con el Decreto Supremo 24806, del 4 de agosto de 1997 por el que se entrega la propiedad de los hidrocarburos a las transnacionales en boca de pozo. Bajo estas disposiciones se suscriben 78 *joint ventures* o contratos de riesgo compartido, por 40 años. El decreto fue abrogado por Carlos Mesa, con otro decreto en 2004, el que, al no tener carácter retroactivo, permite que el Decreto Supremo 24806 esté vigente en los próximos 36 años.

Petróleo, ¿riqueza o castigo?

Llegaron las transnacionales atraídas como moscas a la miel. El territorio subandino amazónico fue repartido sobre el mapa geológico. La protección de las cabeceras de ríos amazónicos y las frágiles culturas indígenas

estaban de más en un cálculo que sólo entiende de barriles y metros cúbicos.

Transcurridos dos lustros, el pueblo boliviano ha comprendido el precio del engaño. El país fue despojado de sus empresas, la economía nacional se ha hundido y a pesar de la construcción de nuevos gasoductos y un aumento exponencial de las exportaciones de gas, el tesoro nacional sigue financiando a las transnacionales a costa de recortar los ya de por sí insuficientes presupuestos sociales. El petróleo parasitó la economía boliviana.

Conflictos socio-ambientales de la actividad petrolera

La industria petrolera no es limpia

Tanto las actividades exploratorias como productivas impactan seriamente en el ambiente. Para determinar la ubicación de los yacimientos hidrocarburíferos, la compañía realizará uno o varios proyectos de exploración sísmica sobre el territorio. Esto es, abrir sendas de dos metros de ancho por unos veinte kilómetros de longitud, donde enterrarán y explotarán explosivos a 10 metros de profundidad que emitirán unas ondas cuyos ecos detectarán una línea de sismógrafos. Para tal efecto, habrá que no sólo deforestar los caminos sino construir campamentos móviles, helipuertos y zonas de descarga. Un proyecto sísmico simple puede necesitar entre 300 y 1000 km de longitud de brechas, 200 helipuertos y mil zonas de descarga.

La exploración sísmica tiene impactos importantes en áreas boscosas tropicales, en cuanto son nuevas vías de acceso para la colonización, caza o tala de maderas nobles. A parte, las comunidades originarias son ocupadas por centenares de trabajadores foráneos que irrumpen con patrones de conducta occidentales, como la prostitución y el alcoholismo.

Ubicado el yacimiento, se iniciará la perforación escalonada de pozos exploratorios

que, de resultar positivos, hipotecan durante por lo menos los siguientes 30 años la vida de las comunidades vecinas. Cuando la compañía abandona el territorio, deja tras de sí un paisaje deteriorado, deforestado y con un historial de derrames y accidentes. Las abundantes lluvias actúan de vectores de contaminación fluvial de cualquier charquito de productos químicos que haya quedado al descubierto. La industria petrolera limpia en ecosistemas tropicales no existe.

La superposición petrolera

La jerarquía legal que se estableció entorno a las leyes petroleras, que por su "interés nacional" prevalecían por encima de otras leyes o reglamentos "secundarios" como la Ley 1333 de Medio Ambiente, el Reglamento ambiental del sector hidrocarburos o la Ley INRA, ha generado un estado de desprotección que vulnera tanto a extensas áreas de conservación biológica como amplios grupos poblacionales del país.

Dice el artículo 1 de la Ley de hidrocarburos que "*Todos los yacimientos de hidrocarburos son propiedad inalienable del Estado*", el cual a través de contratos de riesgo compartido, los otorga a las empresas transnacionales. Donde pone "yacimientos" léase "subsuelo"... y ya tenemos el marco legal establecido que abre puertas a la ocupación de territorios. Si bien la superficie terrestre no es propiedad de las petroleras, sí les pertenece el subsuelo, que es lo mismo que decir que pueden operar ahí donde el sismógrafo indique presencia de hidrocarburos.

Además, las petroleras pueden expropiar vía derecho de servidumbre a las familias que habiten en cualquier predio donde abrir un camino, construir una planchada, helipuerto o campamento.

Áreas protegidas

En el país existen 21 áreas protegidas, con una extensión de 167.417 km², que represen-

tan el 15,2% del territorio nacional, que hoy se ven amenazadas por la creciente actividad petrolera. Esas zonas son ricas en biodiversidad, fauna, flora y en su territorio albergan a comunidades originarias que en todo el tiempo han vivido en una relación de sostenibilidad con los recursos.

En total, 11 áreas protegidas fueron invadidas por las empresas petroleras para realizar trabajos de exploración, prospección y sísmica. En la región amazónica, las empresas petroleras se adjudicaron tres bloques (Río Hondo, Rurrenabaque y Tuichi) en el área protegida del parque Madidi y Pílon Lajas; el bloque Sécore en el parque nacional Isiboro Sécore; el Amboró Espejos en el parque nacional Amboró; Chimoré I en el parque nacional Carrasco. En la región chaqueña el parque nacional Serranía de Aguaragüe ha sido concesionado a empresas petroleras en los bloques San Alberto, San Antonio, Bereti y Tarija Oeste. En el parque nacional Sama operan las petroleras en el bloque Cambarí.

A parte, existen muchas regiones del país que no gozan de ninguna protección pero que su inaccesibilidad las ha conservado como bosques primarios no intervenidos. En el Beni, la serranía de Eva-Eva y Mosestenes están aún inexploradas; se sabe de la existencia de núcleos indígenas chimanes aún por contactar. En el departamento de Chuquisaca, la serranía de Iñaño conserva manchas de bosque boliviano-tucumano que albergan una de las colonias más grandes de paraba frente-roja, endémica de Bolivia.

Lo cierto es que con protección o sin ella, son muchas y de gran alcance las áreas ecológicas que van a ser impactadas y degradadas irreversiblemente en Bolivia, si no se cambia la política fiscalizadora del Estado a las empresas petroleras.

Territorios indígenas

El conflicto indígena con las petroleras se enmarca en una de las intersecciones geográficas

más habituales del país: el punto en que se cruza el derecho indígena con las concesiones hidrocarburíferas. Lo cierto es que existe una repetida coincidencia entre bloques de exploración hidrocarburífera y los territorios comunitarios de origen (TCO), lo cual no es extraño teniendo en cuenta que del total del territorio nacional, 611.100 km² (un 55,6%) son de potencial hidrocarburífero (Orduna 2004).

Entre otras, Repsol-YPF es de las que más territorios ha intervenido. La compañía tiene concesiones que se superponen a un total de 17 TCO repartidos en las regiones amazónica y chaqueña. De Norte a Sur, los bloques Rurrenabaque y Tuichi abarcan los territorios de las etnias amazónicas chimanes, mosestenes y tacanas. A parte, la etnia nómada esse ejja, que recorre las playas del río Beni, también se verá afectada por las operaciones hidrocarburíferas, aunque no tiene un territorio titulado. El bloque Sécore atraviesa el territorio indígena multiétnico -donde conviven comunidades chimanes, moxeñas y yurakarés-, el territorio indígena chimán y el territorio indígena del parque nacional Isiboro Sécore, refugio ancestral de la etnia yurakaré.

La fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, al ser intervenidos, coincide con la fragilidad cultural de los grupos étnicos que los habitan. Su reducido número de habitantes y el escaso contacto los hace propensos a romper bruscamente sus actividades tradicionales, trabajar para la empresa con contratos temporales que introducen en las comunidades hábitos como el alcoholismo, el abandono de la familia o las actividades agrícolas y recolectoras. Cuando Repsol ingresó al interior del territorio chimán ofreció cepillos de dientes pretendiendo imponer costumbres higiénicas ajenas. En cambio, durante la construcción del primer pozo exploratorio, la empresa se dedicó a comprar las piezas de caza que los hombres de la comunidad cazaban para alimentar a los suyos. Desde entonces, ya no cazaban para la subsistencia sino para vender las piezas a la compañía y comprar alcohol a los

comerciantes que entraban a vender productos al campamento petrolero.

En la región chaqueña, Repsol invade varios TCO de la etnia guaraní, como Charagua Norte, Kaami, Itikaguasu y Tapiete. Estos territorios, ubicados en la llanura chaqueña, también son afectados por la construcción de dos gasoductos de 500 km, que transportan el gas chaqueño a Santa Cruz, donde es exportado a Brasil por el Gasoducto Bolivia – Brasil. En la serranía del Aguara Güe, donde se descubrieron las reservas más grandes de gas, el bloque Caipipendi invade el TCO Tentayapi, donde viven las comunidades guaraníes que por su inaccesibilidad han conservado la cultura más pura. En un manifiesto fechado en julio del 2004, la comunidad de Tentayapi se pronunciaba a favor de tomar medidas activas para impedir la entrada de Repsol en sus territorios. Otra etnia afectada son los weenhayek, pescadores del río Pilcomayo, que ya expresaron su rechazo a la construcción del gasoducto Yacuiba Río Grande, oposición que fue desestimada por la Superintendencia de hidrocarburos.

Conflictos ambientales de los gasoductos

Esta parte nos ayudará a visualizar el contexto de impunidad con el que se mueven los grupos económicos en Bolivia, para entender por qué empresas como Repsol-YPF están apostando tanto en este país y por qué se sabe tan poco de sus actividades. En los últimos años, diferentes conflictos han desenmascarado el verdadero talante de las multinacionales, que no han dudado en ignorar y aplastar los derechos humanos para defender sus intereses económicos. En cada uno de los conflictos, las poblaciones afectadas se organizan de una u otra forma para defender sus derechos, mientras que el gobierno siempre ha demostrado su utilidad como protector de los intereses privados, que llegan incluso a fortalecerse.

Gasoducto Bolivia – Brasil

Los 1.750 millones de dólares que ha costado el gasoducto Bolivia – Brasil, unen los 3.000 km que separan los pozos de gas bolivianos con las industrias de las periferias de Saõ Paulo. Esta obra es un gran negocio para Enron y Shell, en Bolivia, y Petrobras, en Brasil, el cual tiene además un trato de preferencia para exportar todo el gas que produce en Bolivia. El gasoducto es propiedad de dos consorcios establecidos en Bolivia y Brasil, formados por Transredes, Enron, Shell, Petrobras y BTB. Los bancos realizaron préstamos por el valor de: 310 millones de dólares (Banco Mundial), 240 millones de dólares (BID) y 84 millones de dólares (Corporación Andina de Fomento) (Gavaldá 1998). Pero la imagen de los prestamistas quedó salpicada por todos los atropellos a los derechos humanos que acompañaron su construcción. El Banco Mundial dirigió toda una campaña para mostrarse como un prestamista *correcto* que garantiza la ética y el respeto en sus inversiones, pero no fue así. Durante toda la construcción se reportaron graves incidentes, o *situaciones no contempladas*.

A finales de 1998, a raíz de una huelga de la plantilla de trabajadores bolivianos discriminados por su salario respecto al resto de obreros, el gobierno ordenó la militarización de las obras para no incumplir el cronograma de entrega. A lo largo del tramo boliviano del gasoducto, vecinos de los municipios afectados se organizaron en comités de fiscalización para reportar todos los impactos del gasoducto. A parte de la deforestación de miles de hectáreas, la fragmentación de ecosistemas y la apertura de accesos, los impactos sociales fueron escandalosos. En la tranquila población de Carmen Rivero Torres, donde los humedales del pantanal dan paso a extensas llanuras de pastos, la empresa constructora invadió el pueblo con 2.000 trabajadores. En dos meses el pueblo se quedó sin agua y sin luz, hubo violaciones, seis menores de edad embarazadas, alcoholismo y delincuencia. Cuando

las denuncias del comité de fiscalización llegaron a Estados Unidos, el Banco Mundial quedó en evidencia. Desde Washington partió un avión con destino a Carmen Rivero Torres para desmentir las denuncias. Una comisión de funcionarios del Banco Mundial, acompañado por responsables de la empresa Gas Transboliviano, Petrobras y la Consultora Dames & Moore recorrieron el pueblo, entrevistándose con la gente. En una reunión en la escuela, los pobladores exigieron una “damnificación socioeconómica” por los daños, “*dado que los impactos ambientales son irreversibles y no se pueden cuantificar*” (Gavaldá 2003). En esta reunión se puso en evidencia la inutilidad del monitoreo de la consultora norteamericana Dames & Moore, contratada para monitorear las obras en contraposición al comité de fiscalización formada por voluntarios del pueblo (Crespo 2000).

Gasoducto a Cuiabá

Al año siguiente, apareció en escena el gasoducto a Cuiabá. Este nuevo gasoducto exporta gas barato boliviano a la sobredimensionada planta termoeléctrica, que construyó la compañía Enron en la ciudad de Cuiabá. Con este proyecto Enron suministrará electricidad a un millón de consumidores brasileros y a las poblaciones fronterizas de Bolivia, que comprarán su propio gas convertido en kilovatios. En realidad, lo que buscaba Enron con esta obra era liberarse de Petrobras (socio del gasoducto Bolivia–Brasil) para disponer de su propio tubo que alimente su central térmica. El proyecto requirió de una inversión de 570 millones de dólares, la mitad de los cuales aproximadamente era para enterrar los 626 km de gasoducto. Como muchas otras obras de Enron en el mundo, recibió el financiamiento de OPIC, aunque sus estatutos prohibían financiar la intervención de bosques primarios tropicales (OICH 2001). El trayecto del gasoducto a Cuiabá se podía haber diseñado bajo una lógica de evitar las zo-

nas más vulnerables, pero se optó por la solución barata, o sea una línea recta, de 30 metros de ancho destruyendo todo a su paso. El trazado del gasoducto atravesaba el bosque seco Chiquitano, una mancha de bosque virgen de 100 km de diámetro, calificado entre los bosques secos con mayor riqueza de especies y endemismos del planeta. Evidentemente, todo esto no se decía en el deficiente Estudio de evaluación de impacto ambiental aprobado por el gobierno, que consideraba el bosque Chiquitano como si fuera una parte del pantanal (Entrix 1998). Este hecho motivó que tanto las poblaciones locales como un entramado de organizaciones sociales bolivianas e internacionales se opusieran al trazado del proyecto. Esta oposición llegó incluso al Congreso norteamericano, donde se demostró la incompatibilidad del proyecto con los estatutos del banco OPIC, que prohíbe el financiamiento de obras que supongan una intervención directa a los bosques primarios tropicales. Entonces OPIC encargó otro estudio complementario que determinó que “*el Bosque Seco Chiquitano puede ser el área más grande de bosque seco remanente relativamente poco disturbado en el Neotrópico, sino en el mundo entero*” (OICH 2001).

Si la OPIC retiraba el préstamo, Enron y Shell lo tendrían más difícil para llevar a cabo el proyecto, pero a última hora Enron se sacó de la manga un acuerdo con cinco organizaciones para la ejecución de un Programa de conservación del bosque seco Chiquitano de 20 millones de dólares. Estas organizaciones, tres de ellas extranjeras, negociaron en nombre de los bolivianos la destrucción de un ecosistema único, a cambio de convertirse en un poder económico regional más fuerte que el Estado (Molina 2000). En cambio, las 37 comunidades de indígenas chiquitanos y ayo-reos afectadas directamente por la construcción del gasoducto, recibieron después de dos años de movilizaciones y negociaciones un Plan de desarrollo indígena, presupuestado en casi 2 millones de dólares. Las cinco insti-

tuciones del negociado con Enron, sacaron diez veces más, sólo con una firma.

Sus primeras actuaciones fueron constituirse en fundación para tener más movilidad financiera y proponer la creación de áreas de conservación privadas. Se cerraba el ciclo. Comprando tierras a algunos particulares, la fundación retornaría los favores a la oligarquía gobernante que impulsó el gasoducto incluso a costa de redactar nuevas leyes para evitar la inconstitucionalidad del proyecto. Pero también había otros intereses para Estados Unidos. En mayo del 2000, la fundación de Amigos de la Naturaleza (una de las beneficiadas con los 20 millones de Enron), hizo una solicitud a la Dirección general de biodiversidad para extraer variedades de maní silvestre en la chiquitanía debido a la amenaza de desaparición que supone la construcción del gasoducto. En la solicitud se detallaba el convenio que tenían la fundación con el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos para practicar la conservación *ex situ* de las plantas de maní. La Dirección general de biodiversidad aceptó esta acción de biopiratería por una donación de 6.000 dólares. En estos momentos Estados Unidos habrán patentado las propiedades de resistencia a la sequía y plagas de la planta. Las comunidades de indígenas chiquitanos y ayoreos, que protegieron este singular ecosistema durante miles de años, recibirán a cambio sólo las molestias de la maquinaria de Enron, cuando circulan por la extensa brecha del gasoducto donde tienen derecho de vía.

Estas comunidades organizaron un monitoreo activo de los impactos del gasoducto. En cada comunidad, un promotor ambiental realizó informes mensuales de los daños provocados por las obras. Durante la construcción se denunció la destrucción de caminos, dañar explotaciones ganaderas y contaminar cuerpos de agua, especialmente en la zona del pantanal. Por ejemplo, en la comunidad de Entreríos se contaminó el curso de agua que abastecía la comunidad. La única medida de

mitigación realizada por la empresa fue la colocación de un vistoso cartel que ponía: “Prohibido tomar agua”. (OICH 2000).

Dos gasoductos paralelos: Gasyrg y Yabog

El gasoducto Yacuiba – Río Grande (GASYRG), fue rebautizado de su nombre original (Yabog-II) para no crear confusiones con la competencia. Se trata de la construcción de un gasoducto paralelo al ya existente gasoducto Yabog, que conecta Yacuiba con la estación de Río Grande, donde se empalma con el gasoducto Bolivia – Brasil. El motivo de añadir otro gasoducto al ya existente es puramente mercantil. El gasoducto Yabog I pertenece al consorcio Transredes (Enron-Shell) y esta empresa les impondría una tarifa por el uso del gasoducto. Este dato motivó a las empresas propietarias de los campos San Alberto y San Antonio a construir su propio conducto, aunque ello suponga la destrucción de más de 431 kilómetros de bosque seco tropical. Este monstruoso gasoducto, de capacidad superior al gasoducto Bolivia – Brasil, el cual fue considerado como el “proyecto del siglo”, tiene un diámetro de 32 pulgadas y una capacidad de transporte de 22,7 millones de m³ diarios.

Sus dueños, agrupados en el consorcio Transierra S. A., son los titulares de los campos San Alberto y San Antonio, o sea Petrobras, Total y Andina (Repsol-YPF). El consorcio Transierra S. A. pretende cubrir el 70% de la demanda de gas a este país.

Las poblaciones indígenas afectadas por el trazado del nuevo conducto se opusieron enérgicamente al proyecto, así como también los habitantes de la región del Chaco, lo que generó una serie de problemas en la región del Chaco. El pueblo indígena weenhayek presentó ante la Superintendencia de hidrocarburos su oposición a la construcción del Gasyrg. Los weenhayek argumentaban que el conducto atravesará su territorio, al igual que las tierras que son habitadas por el pueblo guaraní, que también presentó su oposición.

Pero la Superintendencia de hidrocarburos de Bolivia, organismo creado y financiado por el Banco Mundial y las propias empresas petroleras, declaró improcedentes las objeciones de la empresa Transredes, del pueblo weenhayek y de la Asamblea del pueblo guaraní. Con esta decisión, el consorcio Transierra arrancó el operativo de construcción del Gasyrg. Según la Superintendencia *“la Licencia Ambiental otorgada a Transierra, descalifica la aseveración de la Asamblea del Pueblo Guarani y de los Weenhayek, referida a la inexistencia de una evaluación de impacto ambiental del gasoducto, y consecuentemente la legalidad de la licencia”*. De nuevo los estudios de impacto ambiental, procedimientos inconsultos en los que una consultoría recoge datos de todo lado para recopilarlos en un documento de 200 páginas sin sentido, sirven para justificar la destrucción ambiental y los atropellos de los grandes proyectos a las poblaciones.

La noticia tampoco causó mayor sorpresa en la sede del gobierno. En círculos políticos se dijo que estaba previsto, por una cuestión de emergencia nacional para cumplir obligaciones asumidas por el Estado, un decreto para autorizar la construcción del conducto si el litigio se extendía en la Superintendencia.

La guerra del gas

El proyecto LNG

Para la exportación de gas natural a México y Estados Unidos, en el mes de junio de 2001, se conformó el consorcio Pacific LNG. Consiste en construir un gasoducto entre el campo Margarita que se encuentra en Tarija Bolivia y el Puerto de Mejillones en Chile, licuificar diariamente 30 millones de m³ de gas sometiéndolo a alta presión, para transportarlo en un tren de barcos diarios a las costas de México, donde será de nuevo gasificado y

transportado a California por medio de un gasoducto. La empresa Sempra Energy se encargaría en este momento de quemar el combustible en plantas térmicas para convertir el gas en kilowatios.

Estas empresas son socias del campo Margarita, que se encuentra dentro del bloque Caipipendi, en los siguientes porcentajes: Maxus (Repsol YPF) 37,5%, British Gas con 37,5% y Unión Texas de Bolivia con 25%. La empresa operadora de este campo es la empresa Repsol a través de la empresa Maxus Bolivia. El campo Margarita posee 13,42 trillones de pies cúbicos de gas natural y 303,48 millones de barriles de petróleo, según la certificación de reservas al 1 de enero del 2001, realizada por la consultora de Goldyer & Mac Naughton. El consorcio estima que, en total, el proyecto comprometería una inversión de aproximadamente 5.000 a 7.000 millones de dólares y que podría culminarse a mediados del año 2005.

En las actuales circunstancias, definidas por las reformas en el sector petrolero boliviano, la participación del Estado dentro del proyecto Pacific LNG y los beneficios que de él pueden obtener son pocos e insuficientes. Analizando la propuesta que el consorcio tiene para los precios en boca de pozo (de 0,60 dólar por millar de pies cúbicos de gas natural e explotarse), la participación del Estado boliviano se reduciría aún más, debido a que de los 60 centavos de dólar que llegaría a costar el millar de pies cúbicos tan sólo 10 se quedarían en Bolivia en concepto de regalías. Lo que en los hechos deja de ser una venta para convertirse en un regalo y subvención a los mercados de Norteamérica, donde el precio del millar de pies cúbicos de gas natural oscila entre los 4 y los 6 dólares. De concertarse una venta de 30 millones de m³ de gas natural al día, los ingresos anuales para Bolivia, por el 18%, sumarían en total 41,7 millones de dólares al año: diez veces menos de los que hasta 1993 entregó la empresa YPF al Estado boliviano.

Alrededor y dentro del campo Margarita viven decenas de comunidades guaraníes, las cuales, a pesar de vivir sobre millones de dólares en gas, no han recibido de las petroleras sino contaminación y pequeñas limosnas. Por ejemplo, con el pozo Margarita X3, perforado sobre una planchada de 2 has en el año 2000, la extema vecindad (500 metros) con la comunidad guaraní de Cumandaroti ha generado graves molestias. Durante los primeros años, los comunarios se quejaban de que el calor del pozo les daba dolor de cabeza por el mal olor, resfríos y mucho calor que provocó el abandono de un campo de cultivo.

El calor que sentían los comunarios no es casual. Según registros de prensa, en octubre de 2000, Maxus-Repsol solicitó al Viceministerio de Energía e Hidrocarburos la autorización para la quema de gas natural en el pozo X-3. Argumentando la falta de mercado y la necesidad de comprobar el tamaño de la reserva, durante el año 2000, Repsol quemó 3.900 millones de pies cúbicos de gas (Orduna 2004).

La generalización del conflicto

Los acontecimientos de la Guerra del gas, primero, y los artificios del referéndum, después, trasladaron el conflicto ambiental de los pobladores que viven en la boca del pozo a la concienciación de la población urbana en torno a la recuperación de los recursos. En una década, la población boliviana dejó de creer que las transnacionales petroleras sacarían al país del hundimiento económico. *Ahora ya sabe que son el problema más que la solución.* Las voces de la nacionalización vuelven a sonar en la calle, aunque como advierte el presidente, todo está atado a favor de las transnacionales y sus intereses. Bolivia vive una época difícil que deberá enfrentar con valentía. O seguir exportando hidrocarburos baratos, a la par que exporta familias desempleadas y daña sus ecosistemas, o retomar el control de sus recursos aunque esto signifique enfrentarse

con las transnacionales y sus países de origen.

Pero no basta con nacionalizar el gas o reconstruir YPFB, pues la contaminación no entiende de patrias. Una explotación petrolera en áreas amazónicas o territorios indígenas puede ser igualmente dañina, ya sea boliviana o extranjera. La apuesta está en la industria a pequeña escala, el suministro de gas doméstico y de automoción como camino hacia un desarrollo integral con las energías renovables, como inversión duradera, sostenible y respetuosa con las poblaciones locales.

Bibliografía

- Crespo, Guardia, 2000, *Problemática Socio-ambiental del Gasoducto Bolivia-Brasil*, Probioma y OLCA, Santa Cruz.
- ENTRIX-PCA, 1998, "Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Gasoducto a Cuiabá, Tramo Boliviano", Santa Cruz.
- Gavaldá, Marc, 1999, *Las Manchas del petróleo boliviano*, CEDIB, FOBOMADE, Cochabamba, 219 p.
- , 2003, *La Recolonización*, Icaria, Barcelona, 217 p.
- MARIACA, Comité de Defensa de los Recursos Naturales, 2000, "Las reservas de gas no acaban de ser descubiertas", en Boletín FOBOMADE, La Paz.
- Molina, Patricia, 2000, "El proyecto Cuiabá: cómo comprar conservacionistas", FOBOMADE, La Paz.
- OICH (Organización Indígena Chiquitana), 2000, "Informes de vigilancia socio-ambiental de los pueblos indígenas al gasoducto Bolivia-Brasil lateral Cuiabá", Santa Cruz.
- OICH (Marc Gavaldá), 2001, *Guía para enfrentar la industria extractiva en territorios indígenas*, CEADES, Santa Cruz.
- Orduna, Víctor, 07/05/2004, "Donde hay hidrocarburos, hay indígenas", en *Pulso*, La Paz.
- Varios Autores, 30/11/2001, "La 'Super' encamina la construcción del Gasyr", en *El Deber*, Santa Cruz.

El patrimonio como domesticación de la cultura

Comentarios al Dossier de ICONOS 20

Gey Espinheira

Dr. en Sociología. Profesor de la Universidade Federal da Bahia

Mail: gey.e@terra.com.br

Fecha de recepción: octubre 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Traducción del portugués: Nilma Martins.

Revisión final: Edison Hurtado

Resumen

Tres de los artículos publicados en el dossier de ICONOS 20 “Patrimonio, memoria y ‘regeneración’ urbana”, convergen en reconocer algunos efectos perversos de la restauración de centros históricos y espacios públicos. Este artículo explora los argumentos presentados en esos artículos y los entiende como parte de un proceso que, en nombre del turismo, domestica la cultura.

Palabras clave: patrimonio cultural, centros históricos, regeneración urbana, turismo, estudios urbanos, Quito, Guayaquil, Pelourinho

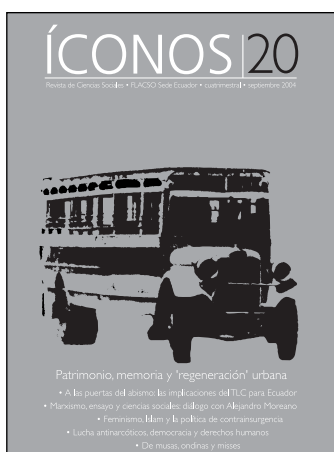
Abstract

Three of the articles formerly published in the dossier of the journal ICONOS 20 entitled “Patrimonio, memoria y ‘regeneración’ urbana” (Cultural Heritage, Memory and Urban Regeneration), recognize some of the perverse effects of the preservation and regeneration of Historic Centers and other public spaces. The present work explores the arguments developed by those articles, and approaches them in the context of a process that, in the name of tourism, domesticates culture.

Key Words: Cultural Heritage, Historic Centers, Urban Regeneration, Tourism, Urban Studies, Quito, Guayaquil, Pelourinho

Una mirada al Pelourinho¹

En la edición No. 20 de *ÍCONOS*, el arquitecto y urbanista brasileño, Paulo Ormino, pasa revista a las cuatro últimas décadas del Pelourinho, es decir, desde que se iniciaron los primeros estudios y trabajos de recuperación-restauración del Centro Histórico de Salvador de Bahía. Reconociendo y caracterizando algunas fases de una cronología de intervenciones y algunas ideologías en cada época, el análisis sobrio y preciso expone los principales programas internacionales y nacionales en relación al patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, demostrando que en casi todos los países -sino en todos- las motivaciones para la acción fueron de origen externo, y cuando fueron orientadas nacionalmente éstas siempre se procesaron a través de la centralidad del Estado y no como el resultado de movilizaciones locales. Esa condición externa y centralizada de las intervenciones configura dos situaciones que pueden ser sintetizadas en colonialismo y autoritarismo. Como colonialismo nos topamos con la dependencia de una autoridad externa para que brinde reconocimiento y de inicio al proceso de valorización del patrimonio -a través de su respaldo a autoridades nacionales y regionales, antes que locales-, lo cual sirve como justificación de la acción. Desde la situación de autoritarismo nos encontramos con un rasgo anacrónico, caduco, el del compromiso del gobierno con sectores privados, el de la apropiación de la administración pública como una gestión de familia y de grupos, tal como lo formularon



con precisión Victor Nunes Leal (1948) y Sérgio Buarque de Holanda (1936) cuando resaltaban al “hombre cordial” como el tipo-ideal weberiano del político brasileño.

Es por eso que, en esta perspectiva, tiene gran importancia la figura carismática de Antonio Carlos Magalhães, Senador de la República y ex-gobernador de Bahía en tres períodos. Y es que este personaje -de una forma mesiánica- propuso “modernizar Bahía sin borrar su pasado”, eligiendo así el campo de la cultura como un elemento que otorgaría nacionalmente la identidad al *baiano* (de Bahia). Éste sería un ser híbrido que transita cómodamente entre la cultura hegemónica y la cultura popular, que atraviesa las creencias religiosas y es aceptado por ellas, así como por las etnias de las naciones afro-brasileras -afro-baianas- del candomblé y de los grupos culturales populares. En ese marco, el Pelourinho se ha convertido en un nicho de conservación y reproducción de la cultura popular proyectado internacionalmente, donde -entre muchos otros y de tan variada calidad- estuvieron bailando y cantando Michael Jackson y Paul Simon, pero también Lula y el Reverendo Tuto de África del Sur (quien estuvo un poco antes de la visita de Mandela). Ir al Pelourinho es una de las obligaciones de rigor de todos los que visitan Salvador, así como subir a la colina del Bomfim y llegar al famoso templo religioso.

Antonio Carlos Magalhães hizo de la recuperación del Pelourinho un proyecto político de larga duración. No solo lo inició, sino que lo retomó después en otros dos momentos luego de significativos intervalos de ausencia en el círculo del poder gubernamental. Es debido a esa determinación respecto al campo cultural que Paulo Ormino lo cita por su nombre en su texto, sin destacar a figuras que lo sucedie-

1 “Pelourinho” es el nombre con el que es conocido el centro histórico de la ciudad colonial de Bahía y que fue declarado “patrimonio de la humanidad” por la UNESCO.

ron en los intervalos en que no estuvo en el poder y reconociendo –así– cómo la cultura asumió preeminencia en la vida de las grandes ciudades y particularmente en Salvador.

Con el correr del tiempo, el proceso de incorporación de esa área de la ciudad a una dinámica económica moderna se centró en el turismo cultural como prioridad y éste, paradójicamente, generó efectos perversos, amplios y profundos, siendo el principal el propio vaciamiento cultural y su sustitución por un conjunto de actividades: actores, bailarines, músicos, cantores, bandas de percusión y grupos, colocados todos en un escenario colonial. Hablamos de restaurantes, boutiques, bares, los más diversos almacenes y talleres de oficios cargados de un énfasis en lo lúdico representacional. Como contrapartida, la población fue retirada a través de una expulsión con indemnizaciones insignificantes, compulsorias. Un barrio mixto, comercial/residencial y bohemio, con una tradición como lugar de prostitución (Espinheira 1971 y 1984), se tornó exclusivamente en un barrio de servicio que ocupaba básicamente las plantas bajas. En un lenguaje económico, Paulo Ormino habla de este proceso de remoción de la población moradora, pero también habla del fracaso de la sustitución por equipamientos para la elite, de la clausura sucesiva de actividades sin raíces, de la resistencia de la población expulsada y de la persistente presencia de la población flotante, aquella que no dejaron de ir a la Misa de la Bendición², a las plazas de Reggae³, a los bares de Cravinho⁴, a las tarimas armadas para shows sema-

nales que atraen a centenares de visitantes y - en ocasiones especiales- a millares de personas (territorio libre para el consumo de marihuana), o al contiguo Rocinha: un gueto negro rastafari ubicado en la cuesta, al cual se tiene acceso por la calle Alfredo de Brito y que, situado a menos de cien metros de la Plaza del Pelourinho, ocupa predios arruinados.

La heterogeneidad venció a la homogeneidad pretendida por los idealizadores del nuevo ambiente. Y así, el Pelourinho es ahora el lugar de mayor concentración de soldados de la Policía Militar, un lugar donde el turista tiene una comisaría destinada exclusivamente para su protección. Como hemos visto, es bajo la protección del turismo como una inversión rentable que se “regeneró” el Pelourinho -como bien demuestra Paulo Ormino- pero también donde este tipo de reorientación se mostró insuficiente para garantizar la sustentabilidad de esta área restaurada⁵.

2 Fiesta que, con asistencia predominante de la población afro-descendiente y de los turistas más curiosos y participativos, ocurre los martes al final de la tarde en la Iglesia y Convento de San Francisco y que acepta su afición profana a danzas, cánticos y bebidas en los bares más diversos, palcos y plazas de reggae.

3 La influencia de Bob Marley es grande en Salvador, donde el reggae se convierte en una especie de identidad negra contemporánea. Nótese que en Salvador el 80% de su población es afro-descendiente.

4 Bebida a base de aguardiente de caña, con clavo, canela y miel.

5 En el gobierno Waldir Pires (1987-1990) fue elaborado el Plan Habitacional del Centro Histórico, pero éste no fue implementado, ni tampoco tomado en



Vista del Pelourinho

Los problemas estructurales brasileños quedan en evidencia: el Estado asumió los gastos sin la participación de los propietarios y beneficiarios privados. La vieja apropiación de lo público por lo privado tiene ahí un ejemplo notorio y persistente: es el Estado quien mantiene, con recursos públicos, la animación artificial de eventos semanales y eventuales que marcan las fiestas lúdicas y religiosas del calendario soteropolitano⁶. Ni siquiera los propietarios, inquilinos u ocupantes cuidan de las fachadas de los edificios que usan; lo externo, lo visual “es del Estado”; así, con una frecuencia elevada, es necesario repintar y arreglar paredes externas para mantener la imagen colorida del Pelourinho.

La elite se alejó del centro histórico. Sólo pocos de sus representantes comparecen cuando reciben visitas de afuera: rápidamente transitan por el Pelourinho, entran en algunas iglesias y museos, como turistas pasivos, pero sin vivenciar el área. Las calles, las aceras hechas de piedra “cabeza o corazón de negro” que no permiten el taco alto de las mujeres elegantes, o la misma gente de Bahia que allí frecuente, parecen asustar a aquellos que cuando vienen por estos rumbos lo hacen en sus carros cerrados o rodeados de seguridades

que cargan cuerdas de aislamientos en los grupos de carnaval, o construyen camarotes cerrados en puntos estratégicos desde donde ven las calles, pero protegidos por paredes y seguridades.

Rápidamente, el Pelourinho va ajustándose a la cultura baiana -a la baianeidad-, una conversión hacia la cultura popular que contradice todo planeamiento gubernamental que lo quería para la gente de afuera, que lo quería como un lugar privilegiado para la “cultura turística”.

Por último, Paulo Ormino destaca un hecho ineludible: los centros históricos no resuelven sus problemas si no se resuelven los problemas sociales de la gente que vive en ellos. El lugar del pueblo, de la reproducción de la cultura de Salvador, es también un lugar central, un lugar desde donde se puede llegar a los más diversos barrios con sólo tomar un transporte. En una ciudad pobre, con una población de bajos ingresos, el costo del transporte significa mucho y esto es un factor importante para que el Pelourinho, ubicado en el centro de la ciudad, sea el principal lugar de placer de la población de baja renta, sobre todo de los jóvenes que demandan música y espectáculo, que quieren asistir y participar de grupos famosos como el Olodum, Filhos de Gandhi, del Axé Music, del Pagode y, ahora, del “Arrocha”. Sin estrategia social, todo lo que se renueve (“regenera”) será arruinado nuevamente, como se comprobó en el proceso iniciado unilateralmente por un Estado protectionista y paternalista para con los ricos. Un proceso que buscaba mantener la tradicional imagen de Bahia (percibida ya por Gregorio de Matos en los años 1600s): “madrasta de sus naturales, y de los extranjeros madre” (Matos



Tomado de El Ecuador en el centenario de la Independencia de Guayaquil, 1920

Guayaqui, calle Villamil, hacia 1920

cuenta en la recuperación física de la década del 90, manteniendo así la tradición de discontinuidad administrativa en la sucesión de los gobiernos.

6 Referente a Salvador, capital del Estado de Bahia-Soterópolis.

s.f.: 39). Sin embargo, no se puede menospreciar la resistencia cultural, la resistencia de lo lúdico y las manifestaciones vitales de un pueblo que se reconoce en el centro histórico y lo toma como lugar de reproducción cultural y de afirmación de su identidad.

Guayaquil: la fabricación del antisocial

Siguiendo la línea de análisis de los efectos perversos de la renovación-restauración de los centros históricos, Chris Garcés enfatiza el proceso de exclusión social desatado en Guayaquil como un resultado objetivo de políticas oficiales contra personas concebidas como “antisociales”, un tipo de ser humano supuestamente trasgresor del orden público: personas tipificadas como ladrones, consumidores de drogas, prostitutas y homosexuales, pero también desocupados, trabajadores informales y, en fin, todos los que Bauman llama “consumidores defectuosos” (1998:24) y que son vistos como “suciedad social”.

Las políticas de renovación-restauración van al encuentro de aquellos que no se adaptan al nuevo escenario y activan una serie de dispositivos para poner en práctica el alejamiento de estos indeseables. Entre esos dispositivos tenemos, en primer lugar, la reorganización de la seguridad pública, tanto aquella ejercida directamente por las fuerzas policiales como aquella llevada a cabo por organizaciones paralelas creadas para diluir el impacto de la acción gubernamental; estas últimas fueron creadas bajo la figura de servicios tercerizados por el Estado, incluyendo de esta manera una estrategia de complicidad de la sociedad civil a través de ONGs que, en nombre de la cultura, de las artes, del medio ambiente, actúan conjuntamente con las fuerzas policiales. En segundo lugar, la persecución activa a los trabajadores informales y su reubicación en zonas alejadas, generalmente de poco movimiento, lo que lleva al fracaso



Chris Garcés

so de esos comerciantes y prestadores de servicios informales. En tercer lugar, el silencio o ausencia de crítica pública sobre las formas cómo se procesan las transformaciones urbanas y sociales en esas áreas.

El autor destaca las campañas masivas a través de los medios para la reconstrucción del imaginario social, histórico, cultural y político sobre esas áreas “recuperadas”; campañas en las que nuevos actores verdaderamente actúan en el fortalecimiento de un nuevo *ethos* urbano, de un nuevo *habitus* que busca involucrar a sus nuevos ocupantes y visitantes. Asimismo, en el caso específico de Guayaquil, el componente religioso de la moralidad cristiana aumenta el carácter dramático del llamado al sentimiento purificador y redentor de la misión sacrosanta de la iniciativa gubernamental, fuertemente apoyada por organismos internacionales de la ONU.

En el caso de Guayaquil no sólo hay un nuevo escenario urbano y nuevas operetas escenificadas, que buscan sustituir la espontaneidad y la autenticidad en las formas de hacer, crear e inventar los modos de ser en la vida cotidiana de la población, sino que hay un artificialismo creado y apadrinado, que sustituye la heterogeneidad cultural por una homogeneidad impuesta ahora como la forma ideal de vida urbana. El nuevo código de con-

vivencia apunta a la seguridad de comerciantes y turistas, y a la selección de aspectos artísticos y culturales que los turistas vienen a ver y experimentar. En nombre del orden, de la higiene, del medio ambiente, de la virtud moral cristiana y de la seguridad, los “antisociales” (así tipificados por su apariencia física y por las representaciones culturales -sobre todo los jóvenes-) son expelidos a los perímetros sombríos (que deben ser evitados por los extranjeros y por las personas de familia) o a barrios periféricos donde son alejados de los ojos de la ciudad. Ciudadanía para unos; para otros, violación de los derechos humanos en relación a lo que gobierno, religión, cultura y política consideran indeseable. Una violación contra los informales: confiscación de las mercancías y detención de los propios trabajadores; contra los no trabajadores, “jorga de vagos, vagabundos y consumidores de drogas”, “sospechosos de ser ladrones”; contra los jubilados: por dañar el paisaje y comprometer el ambiente con sus lánguidas presencias y por sus conversaciones en grupos; contra los jóvenes que escuchan música en la calle y bailan hip-hop, break-dance... y contra cualquier otra espontaneidad creada por la población en sus artes de crear, de hacer la invención de lo cotidiano (De Certau 1994).

La exclusión social promovida arremete contra la concepción de democracia ya que cae en un peligroso juego de descalificación de todos aquellos que no encajan en el padrón de ciudadanía de la sociedad inclusiva; aquella sociedad compuesta por los “consumidores validos” en la terminología de Bauman, pero también por los que se conforman con el injusto orden establecido y que lo justifican en base a la idea de que cada uno es responsable de su destino personal, de su éxito o fracaso. En esta perspectiva, los “fracasados” son “culpables”, y si éstos atentaren contra la propiedad privada o contra el orden público se activarán inmediatamente medidas eficaces como la prisión o la simple eliminación.

En su artículo, Garcés registra el aumento extraordinario de la población encarcelada -refiriéndose a la Penitenciaría del Litoral- que llega a una elevación de 200% y cuyo número absoluto de internos es 3.500. Garcés enfatiza, además, en la pesadilla kafkiana ya que una gran mayoría de estos presos no tiene una sentencia formulada explícitamente. Esta situación nos lleva al análisis de Wacquant sobre algunas teorías en boga, adoptadas en los Estados Unidos y exportadas hacia otros países, como “...la determinación del Estado para castigar los ‘disturbios’ y, al mismo tiempo, librar a ese mismo Estado de sus responsabilidades en la génesis *social* y *económica* de la inseguridad e insistir en la responsabilidad *individual* de los habitantes de las zonas ‘incivilizadas’, a quiénes incumbiría de ahora en adelante ejercer por sí mismos un control social cercano” (2001:30).

Los centros históricos regenerados expelen a la gente “incivilizada”, y cuando ésta se resiste a sus insidiosas formas de “operar” dentro sistema oficial, aparece la prisión y la eliminación definitiva de estos reincidentes tipificados como bandidos. Las políticas de regeneración urbana, económica, social y cultural son las mismas que producen el efecto paradójico de la violación de los derechos humanos, de la exclusión más extrema y, también, de la violación de la cultura de las ciudades. La renovación-restauración de centros históricos discrimina y excluye, construye sujetos peligrosos, así como construye nuevas formas y medios de seguridad, elevando la criminalidad, castigando la pobreza e hiriendo profundamente la democracia.

¡Prohibido besarse!

A partir de la experiencia de Guayaquil, Chris Garcés enfatiza en la exclusión social como un efecto paradójico de los proyectos de regeneración de áreas centrales degradadas pero

con un valor histórico y cultural. Paulo Ormindo, por su lado, analiza cuatro décadas de esfuerzos que, en nombre del turismo cultural, buscan la recuperación del centro histórico de Salvador de Bahía a través de diversos programas internacionales y nacionales; Ormindo argumenta que los problemas sociales de las poblaciones centrales no son resueltos, sino camuflados a través de la expulsión de esos moradores y usuarios. Pese a tener diferentes focos de análisis, tenemos una convergencia entre los dos autores. Eduardo Kingman, por su lado, vuelve su mirada a la eficacia de las inversiones, al devenir en ruinas del espectáculo de la renovación, a las imágenes de la pobreza y a las fantasías de la riqueza, a la faena cotidiana de ritos festivos para el encantamiento de los visitantes, al murmullo del día a día, a la algazara de las conmemoraciones. Otra realidad toma lugar: el patrimonio cultural es el amago de la cuestión y se vuelve un aspecto técnico, de especialistas, o sea, una opinión autorizada sobre la cultura, los centros históricos y el patrimonio. En la medida en que el espectáculo se convierte en el principal objetivo de lo que se hace, el autor pone en cuestionamiento el problema de la cultura cuando está de por medio un enriquecimiento o empobrecimiento de la misma.

Concepciones diversas -y contradictorias- sobre la ciudad califican sus espacios y eligen el centro histórico como un espacio de reproducción cultural por excelencia. Es la vieja concepción de que hay una racionalidad en el organismo urbano, en donde ciertas áreas son de apropiación afectiva, aquellas que reconocemos con los posesivos “mi calle”, “mi barrio”, y donde también están otras áreas, aquellos no-lugares, cuyo ejemplo mayor es el centro de la ciudad, y dentro de él, la memoria, lo histórico. “Sin la ilusión monumental, a los ojos de los vivos, la historia no pasaría de ser una abstracción” (Augé 1994:68). Es en ese no-lugar, imposible de ser apropiado por los individuos pero que también es el lugar de



Quito, mercado en la plaza de San Francisco, hacia 1890

todos, vivos y muertos, en donde el pasado - en su presencia y representación- se sacraliza y expresa la ontología de la ciudad. Bajo esta concepción, algunas vertientes de opinión buscan rescatar el centro histórico de manos de aquellos que se apropian del espacio público para establecer sus actividades, ya sea con la colocación de algunos equipos (vendedores de comida, vendedores ambulantes, etc.), o bien con sus propios cuerpos (como los trabajadores del sexo o de otras formas de mano-de-obra en espera).

En esa concepción, el centro histórico, visto como el patrimonio histórico y ambiental de *todos*, no puede ser rehén de una población de bajos ingresos que se beneficia de él a cambio de su factor deterioro y que no tiene capacidad de invertir en el mantenimiento de los edificios arruinados, contribuyendo así al ineludible proceso de destrucción de lo que ya está en proceso de arruinamiento. La conclusión es evidente: es necesario retirar a los moradores y recuperar los predios; hace falta una nueva población que tenga suficiente poder adquisitivo para dar sustentabilidad al conjunto urbano revitalizado. Si bien las *autoridades* que dicen qué y cómo hacer son especialistas, son los políticos los que tienen la facultad de decidir para quién; los políticos, sin

embargo, no deciden sin rodearse antes de las opiniones de esas otras *autoridades*, los intelectuales de la cultura. Se configura así lo que Kingman registra con propiedad: “se parte de la idea de que la ciudad es un organismo que tiene un centro o eje a partir del cual puede reorientarse. En el fondo se trata de la ilusión tecnocrática de que la ciudad puede ser ordenada, de que se puede imprimir en ella una racionalidad que abarque todos los campos, incluyendo el de la cultura”. Siguiendo la reflexión de este autor, nos encontramos frente a una “cultura de la racionalidad”, una verdadera forma de intervención sobre las emociones -como si eso fuese posible- de las personas a través de reglas, posturas, normas y leyes que llegan al clímax de la prohibición del beso.

El patrimonio y la cultura se enfrentan. Si, según lo afirmado por Augé (1994:66), “la alusión al pasado torna más complejo el presente”, esta alusión se concretiza en la culturización del patrimonio: éste, con su fuerza simbólica, somete la cultura a los dictámenes de los especialistas -a las opiniones autorizadas- que dicen que el centro histórico debe ser y representar “lo que efectivamente es”, la memoria física de la cultura del pasado. Emerge, por tanto, una confrontación entre cultura hegemónica y subalterna, para usar las categorías de Gramsci, tal como el autor destaca al referirse al discurso sobre la diversidad en el que se evidencian dos aspectos: el primero -dice Kingman- “se orienta a poner en funcionamiento los mecanismos de distinción entre alta y baja cultura”, detallando los espacios y funciones destinados a separar a las personas. “Lo segundo -continúa- está relacionado con la conversión de las manifestaciones populares en mercancía o espectáculo, fuera de cualquier proceso de participación de la propia gente que no sea en calidad de meros espectadores”. La conclusión es que este “festival de diversidad” acaba por expresar nuevas formas de racismo.

Los antiguos y tradicionales maestros de obras, albañiles, carpinteros, se oponen a los

actuales procesos de intervención, no sólo en tanto depositarios de un saber-hacer, sino también como representantes de la cultura popular que participan en procesiones, cantos y danzas, juego corporales desarrollados en los espacios de la ciudad que dan vida a toda la materia de los lugares, en sus formas, recodos y juegos de luz y sombra. Todo ese movimiento barroco que requiere atención de los sentidos y del alma y que ahora se encuentra disciplinado por un orden que coordina las emociones y las somete a prohibiciones e intimidaciones.

El patrimonio, así concebido, es un vacío cultural. Eso es lo que se puede percibir en la sensibilidad del autor, al menos en esta pequeña cita: “hasta hace poco había todo un mundo público relacionado con una rica imaginaria popular, pero hoy ese mundo ha sido reducido a los antiguos baños de la iglesia y convertido de alguna manera en un sub-mundo. La propia imaginaria ha sido afectada por esas circunstancias, así como el espacio cultural...”.

El autor se pregunta si hay falta de sensibilidad de los especialistas y políticos o si es una tendencia internacional, “propia de la sociedad del espectáculo, consistente en hacer del patrimonio y de la cultura mercancías”. Las culturas se tornan espectáculos desprovistos de contenido, o mejor dicho, de sentido, de aquello que en el espacio y con el espacio liga el cuerpo al alma. Se trata de un centro histórico en tanto escenario o arena donde todo puede suceder, pero sólo según las órdenes de los especialistas y de los “administradores de la cultura”. Quedan fuera los que viven la historia, los que son, verdaderamente, quienes hacen cultura. Ahí es donde se procesa lo que con pertinencia el autor denominó la “domesticación de lo popular”: un proceso que vacía de significado a los ritos y los símbolos de la ritualidad y la simbología, en otras palabras, que vacía la fantasía en el pastiche de la fantasía ausente de la creación.

En el campo del patrimonio, de la memoria y de la identidad, la cultura es manipulada.

Kingman dice: “asistimos a la construcción de una memoria selectiva y excluyente: a la identificación del patrimonio con unos supuestos orígenes o esencias, a una domesticación y cosificación de la memoria. El problema no radica en el valor que se dé a una zona, sino en saber de qué modo determinados significados se convierten en hegemónicos”. Lo trágico de la recuperación física de lugares urbanos es el vaciamiento de la cultura, de los significados, una forma de separar el ojo de la mano y del alma, como dice Valéry, el fin de la narrativa según Benjamín (1975). Sin la narración, una parte del mundo, la de la arqueología de la ciudad, es decir, el centro histórico visto como patrimonio cultural, es un escenario de espectáculos vaciado de sus creadores.

Los artículos de Paulo Ormino, Chris Garcés y Eduardo Kingman, publicados en *ICONOS* 21, convergen en reconocer la exclusión social, la puesta en escena de nuevas formas de racismo bajo el disfraz de la expresión democrática de las diferencias, el respeto a la diversidad sintetizada en el multiculturalismo, el cual Hall (2003) denuncia como una de las trampas de la contemporaneidad: cultura domesticada en el escenario de una ópera posmoderna en el lugar del no-lugar, espectáculo espectacular en el vacío de la historia desecha.

Bibliografía

- Augé, Marc, 1994, *Não-Lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade*, Papirus, traducción de María Lúcia Pereira, Campinas, Sao Paulo.
- Azevedo, Paulo Ormino, 2004, “El Pelourinho de Bahia, cuatro décadas después”, en *ICONOS* No. 20, Flacso-Ecuador, Quito, septiembre, pp. 45-52.
- Bauman, Zygmunt, 1998, “O sonho da pureza”, en *O mal-estar da pós-modernidade*, Jorge Zahar Ed., traducción de Mauro Gama y Claudia Martinelli Gama, Río de Janeiro.
- Benjamin, Walter, 1975, *A modernidade e os modernos*, Tempo Brasileiro Ed., traducción de Heindrun Krieger, et al., Río de Janeiro.
- Buarque de Holanda, Sérgio, 1981 (1936) “Raízes do Brasil”, José Olympio 14 ed. Río de Janeiro.
- De Certau, Michel, 1994, *A invenção do cotidiano: artes de fazer*, Vozes Ed., traducción de Ephraim Ferreira Alves, Petrópolis, Río de Janeiro.
- Espinheria, Carlos Geraldo (Gey), 1971, *Comunidade do Maciel*, Secretaria da Educação e Cultura, Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, Salvador.
- , 1984, *Divergência e prostituição: uma análise da comunidade protitucional do Maciel*, Tempo Brasileiro, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Río de Janeiro, Salvador.
- Garcés, Chris, 2004, “Exclusión constitutiva: las organizaciones pantalla y lo antisocial en la renovación urbana de Guayaquil” en *ICONOS* No. 20, Flacso-Ecuador, Quito, septiembre, pp. 53-63.
- Hall, Stuart, 2003, “A questão cultural”, en *Da diáspora: identidades e mediações culturais*, Ed. UFMG, UNESCO-Brasil, Brasília-Belo Horizonte.
- Kingman, Eduardo, 2004, “Patrimonio, políticas de la memoria e institucionalización de la cultura”, en *ICONOS* No. 20, Flacso-Ecuador, Quito, septiembre, pp. 26-34.
- Matos, Gregorio, s.f., “Romance”, en *Poemas escolhidos*, Círculo do Livro, São Paulo, p.39.
- Nunes Leal, Victor, 1948, “Coronelismo, enxada e voto”, en *Revista Forense*, Río de Janeiro.
- Wacquant, Loïc, 2001, *As prisões da miséria*, Jorge Zahar Ed., traducción de André Telles, Río de Janeiro.

La desventura de ser soltero: introducción a la sociología rural de Pierre Bourdieu

Luciano Martínez Valle

Dr. en Sociología. Profesor-Investigador de Flacso-Ecuador

Mail: lmartinez@flacso.org.ec

Fecha de recepción: julio 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

Este trabajo busca abrir la discusión sobre la metodología utilizada por Bourdieu para abordar la sociedad rural francesa. Lejos de ser una apología sobre el libro de Bourdieu “Le bal des célibataires”, se trata de una reflexión que recupera algunos temas pertinentes para el análisis de la sociedad rural de los andes del norte.

Palabras clave: Herencia, crisis campesina, matrimonio rural, habitus, campo social.

Abstract

This article explores the Bourdieu's methodology about French rural society. Far from being an apology of Pierre Bourdieu's book “Le bal des célibataires”, this is a critical reflection which retrieves some relevant subjects for the research of contemporary Andean rural society.

Key Words: Inheritance, peasant crisis, rural marriage, habitus, social champ

Dentro de la prolífica producción sociológica de Bourdieu, el libro *Le Bal des célibataires*¹ (literalmente, “El baile de los solteros”), todavía no traducido al español, es sin duda una de las más importantes contribuciones de sociología rural realizada por este autor. El libro recoge varios estudios publicados en revistas especializadas de difícil acceso hoy en día, revisados y actualizados con el ojo crítico de este sociólogo que ha despertado las discusiones más apasionadas sobre las características de la sociedad actual.² El libro cubre un período que va desde los años sesenta hasta los setenta, en el cual ya se había cristalizado una fuerte modernización de la sociedad rural francesa. Esa modernización fue impulsada desde los años cincuenta en gran parte por la Juventud Agrícola Católica (JAC), que privilegiaba una agricultura más productivista, con una generación de ingresos más elevados y un modo de vida más moderno (Champagne 2002:11).

Un primer aspecto a considerarse es la preocupación de Bourdieu por acercarse nuevamente a la sociedad rural, a donde pertenece su familia de origen y él mismo. El autor vuelve sus ojos sobre la sociedad campesina de Béarn ubicada en el Pirineo francés en búsqueda de una conciliación con su pasado y un redescubrimiento personal en ese proceso, lo que el sociólogo llama “socioanálisis” (y que fue su preocupación en los últimos trabajos basados en la autocrítica socio-

lógica), un paso necesario del conocimiento científico.³

Para ello, Bourdieu es consciente de las “rupturas” que ha debido emprender tanto en el plano académico como en el personal. El primero significó prácticamente un renunciamiento a la filosofía por la sociología y dentro de ella por la “sociología rural” que, como manifiesta el autor, se encontraba situada “en lo más bajo de la jerarquía social de las disciplinas”. Pero además, este “renunciamento electivo que implicaba un desplazamiento negativo en el espacio universitario tenía como contrapartida el sueño confuso de una reintegración en el mundo natal” (2002:10). La segunda ruptura tiene que ver con las características metodológicas de este acercamiento al mundo campesino: la utilización del trabajo “duro” sociológico (encuestas, estadísticas, en una época en que no existían las computadoras) y de las entrevistas que implican nadar en las aguas profundas del mundo campesino.

“A través de una total inmersión, se cumple una reconciliación con las cosas, las gentes, de las cuales me había alejado insensiblemente por la entrada en otro mundo y que la postura etnográfica impone respetar naturalmente. El retorno a los orígenes es acompañado de un retorno controlado de lo rechazado” (2002:11).

Preocupación temprana de un *engagement* con el mundo rural que se encontraba en crisis, lo que implicaba no sólo una dimensión académica sino también política, postura que caracterizó las últimas obras de este sociólogo y que le valió las críticas infundadas de la aca-

1 Pierre Bourdieu, 2002, *Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn*, Éditions du Seuil, Paris. La traducción de las citas de este libro, de otros libros y de artículos en francés utilizados en este ensayo, son estrictamente personales.

2 Estos artículos son: “Célibat et condition paysanne”, publicado originalmente en *Études Rurales*, 5-6, avril-septembre, 1962; “Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction”, en *Annales*, 4-5, juillet-octobre, 1972; “Reproduction interdit. La dimension symbolique de la domination économique”, en *Études Rurales*, 113-114, janvier-juin, 1989.

3 Este es el argumento central de uno de sus últimos libros: “La experiencia vinculada al pasado social puede y debe ser movilizada en la investigación, a condición de haber sido previamente sometida a un examen crítico riguroso. La relación al pasado que permanece presente y actúa bajo la forma de habitus, debe ser socioanalizada” (Bourdieu 2002:218).

demia y los medios de comunicación (Bouveresse 2004)⁴.

Un segundo aspecto importante es que en el contexto del análisis de la sociedad rural francesa, se ensayan las categorías centrales de análisis que más tarde van a ser empleadas en la abundante obra “bourdieusiana”: “campo social”, “habitus”, “hexis corporal”. Si bien estas categorías ya se encuentran en los trabajos pioneros de Bourdieu sobre la sociedad Kabyl del norte de África, todavía no habían sido utilizadas en el contexto rural de la sociedad francesa⁵.

Un tercer aspecto es que con esta reedición de los trabajos sobre el campesinado francés se dispone de un valioso material metodológico para abordar la realidad rural. Una aproximación casi etnológica para lograr captar el mundo simbólico de una sociedad tradicional y un análisis sociológico para detectar los mecanismos económicos que encierran las estrategias de las familias campesinas. Este aspecto es sin duda el más importante desde el legado metodológico de la obra de Bourdieu, y el que permite ilustrar las investigaciones que todavía están por desarrollarse en nuestro medio. Es interesante también mencionar que en este trabajo se concretiza la ruptura con la visión estructuralista en el proceso de investigación que influenciaba desde las preguntas centrales, el método de observación, hasta el lenguaje utilizado, visión que al parecer todavía predominaba en los estudios sobre la sociedad Kabyl africana (Silverstein 2003). Según

Bourdieu, esta ruptura se concretizaba en “el paso de la regla a la estrategia, de la estructura al habitus y del sistema al actor socializado” (Bourdieu 2000:12). La combinación de las técnicas duras sociológicas con el análisis en profundidad a través de entrevistas a los campesinos, muestra la falacia de las discusiones posmodernas que buscan privilegiar (debido al temor o a la debilidad en el uso de las matemáticas) el discurso, la subjetividad, en detrimento del análisis cuantitativo, creando una “oposición estéril entre individuo y sociedad” (Champagne 2002:117).

El objetivo de este trabajo es doble: por un lado, rescatar la perspectiva metodológica del abordaje específico de una sociedad rural en crisis y, por otro, discutir el alcance del enfo-



4 “En la *Miseria del Mundo*, que ha sido un *best seller* y que ha contribuido a descubrir la sociología para un buen número de gentes que ignoraban probablemente todo y no tenían ninguna razón particular de interesarse en ella, Bourdieu manifestaba de una manera pública y solemne su compromiso al lado de todos los excluidos de nuestra sociedad, comenzando por un capítulo dedicado a los que encarnan hoy día el más alto grado de sufrimiento, de humillación y de indignidad social” (Bouveresse 2004:28).

5 Las investigaciones sobre la sociedad campesina de Béarn se realizan entre 1959 y 1960 y la primera de ellas se publica en 1962.

que bourdieusiano para el análisis de las sociedades rurales ubicadas en los Andes del norte. Antes que hacer una apología del trabajo del sociólogo, lo que interesa es recuperar el poderoso instrumental teórico-analítico que constituyen las categorías centrales del análisis de Bourdieu, en este caso sobre la sociedad rural.

Los ejes del análisis de Bourdieu sobre una sociedad rural en crisis

En su acercamiento sociológico al campesinado de la región del Béarn francés, Bourdieu se encuentra con una sociedad rural en crisis. Una crisis que afectaba a los patrones de reproducción campesinos, no sólo en el ámbito económico, sino también en el cultural y simbólico.

Una primera explicación central de la crisis campesina es la cada vez mayor dificultad que tienen las familias para transmitir la herencia al primogénito (*ainé*, en francés, pero que en realidad se trata del primer hijo en orden de nacimiento). Es en torno a esta problemática que el sociólogo desarrolla una brillante explicación tanto de los factores internos que afectan a la familia campesina, como de los externos, provenientes de un entorno cada vez más amplio en el que se desenvuelve la sociedad rural.

El objetivo de los matrimonios campesinos en la región estudiada era que el patrimonio, en especial la tierra, sea conservado y transmitido en su integridad a las generaciones posteriores. En este contexto, la división de la propiedad era considerada como la peor calamidad de la sociedad campesina.

“Todo el sistema tiene por función conservar la totalidad del patrimonio al primogénito” (Bourdieu 2002:26). “De hecho, hay que tomar muy en serio las prácticas que testimonian que todos los medios son buenos para proteger la integridad del patrimonio y para

descartar las virtualidades de división de la propiedad” (2002:185).

De allí, que la preocupación de las familias gire en torno a este problemática casi en una forma obsesiva.

En la estrategia de conservación del patrimonio, el buen funcionamiento de los mecanismos de herencia era central. La decisión de quién debía heredar ya estaba establecida, pero si existía algún problema era siempre el *pater familias* quien decidía en última instancia en beneficio de un hijo varón⁶. Había también que establecer una correcta estrategia matrimonial. Para ello, era necesario que el heredero pueda casarse “bien”, es decir, que encuentre una novia “adecuada” a su estatus económico y sobre todo social. El matrimonio en esta sociedad era un *affaire* de familia, mientras que las decisiones individuales no tenían mayor peso. No obstante, existían bastantes dificultades para la realización del “mercado matrimonial”, principalmente porque había que considerar la dimensión de la dote proporcionada por la novia.

Los matrimonios realizados de arriba hacia abajo, es decir, de herederos de alto rango con esposas de menor rango, eran aceptables; pero la situación inversa era desastrosa para las familias en la medida en que el monto de la dote de una novia rica podía arruinar la situación económica y social de una familia de menor poder económico. El temor a no poder pagar la dote si no existía descendencia o si se producía una separación entre los cónyuges (en la medida en que la mujer siempre era la propietaria de la dote) y, especialmente, la pérdida de autoridad del marido en el seno de la nueva familia, eran argumentos que impulsaban a evitar este tipo de matrimonios. Aquí, el sociólogo analiza con detalle todos los me-

⁶ Bourdieu critica la “brutal discriminación de sexos” que estaba presente en esta sociedad campesina desde la infancia: el acceso segregado a los cafés, las tareas diferentes en la producción y los pocos contactos entre los jóvenes (2002:51-52).

canismos que implementan las familias y el rol de la dote en los matrimonios; éste, en fondo, puede considerarse como una estrategia donde lo económico tiene un rol central en la reproducción familiar.

“Por medio de la dote, la economía rige los intercambios matrimoniales, los matrimonios tendían a realizarse entre familias del mismo rango o punto de vista económico” (Bourdieu 2002:177).

El celibato afectaba principalmente a los *cadets*, los hijos varones que venían a continuación del heredero, quienes incluso debían sacrificarse para conservar el patrimonio; pero poco a poco también empezó a afectar a los herederos, sobre todo cuando se empezó a “alargar el espacio social” de la misma sociedad campesina (Champagne 2002). En definitiva, como señala Bourdieu,

“la autoridad de los padres, la fuerza de las tradiciones, el apego a la tierra, a la familia y al apellido, obligan al *cadet* a sacrificarse, ya sea que migre a la ciudad o a América, ya sea que se quede en la propiedad, sin mujer y sin salario” (2002:51).

Pero toda esta estrategia minuciosa que llevaba a las familias a calcular detalladamente si la dote de la novia más los recursos familiares alcanzaba para recompensar a los hijos no favorecidos por la herencia, tenía sus límites. Uno de ellos, y talvez el más dramático, era la dificultad de contraer matrimonio por parte de los mismos herederos. De esta manera, la reproducción se interrumpía y entraba en crisis la familia y la misma sociedad campesina. “El celibato aparece como el signo más claro de la crisis que afecta el orden social” (Bourdieu 2002:56). Así como era una calamidad la división de la propiedad, era peor la presencia de propiedades sin herederos.

El alargamiento del espacio social se produce luego del primer cuarto del siglo XX y se manifiesta principalmente en un alza de los

precios de la tierra y en una mayor articulación del espacio rural con el urbano. Como lo señala Bourdieu, “el hecho esencial es sin duda que esta sociedad antes relativamente cerrada sobre sí misma, definitivamente se ha abierto hacia fuera” (2002:67).⁷ Los impactos de esta nueva situación van desde una revalorización de la propiedad y la dificultad de pagar la dote, hasta la pérdida progresiva de la autoridad paterna, del rol colectivo en las decisiones matrimoniales, y el éxodo rural de los jóvenes (especialmente mujeres) que acarrea sin duda una desvalorización de la sociedad campesina en su conjunto. Los valores de los pueblos rurales y de las pequeñas ciudades irrumpen no sin resistencias en las aldeas dispersas del medio rural. Se establece una nueva oposición entre los pueblerinos y los campesinos, que prepara la oposición mucho más neta entre los ciudadanos y los campesinos. El estilo de vida urbana penetra más fácilmente entre la población femenina y, por lo mismo, los matrimonios se realizan en un radio de acción que sobrepasa la dimensión anterior estrictamente rural. Las dificultades de casarse aumentan y crecen los solteros entre la población campesina.

En este proceso de desarticulación de la sociedad rural, ha sido central el rol de las mujeres que “miran más hacia la ciudad que hacia sus aldeas o aldeas vecinas, las cuales les prometen aquello de lo cual quieren huir” (Bourdieu 2002:83). Como consecuencia, las jóvenes rechazan la idea de casarse con un campesino y en la medida en que están más prestas a adoptar el modelo urbano de vida, buscan salir del mundo campesino y se vinculan más rápidamente a actividades fuera del espacio rural.

⁷ En este sentido, Hervieu y Viard hablan del contraste entre el “movimiento urbano caracterizado por los intercambios y comparaciones, de concurrencias a veces de conflictos, mientras que el del pueblo es un movimiento de clausura y de repeticiones: perpetuarse sobre el mismo territorio, perpetuar el patrimonio, incluso en el sentido religioso. Cada pueblo es el centro del mundo” (2001:94).



Antonio Mena

Finalmente, la relación anteriormente complementaria entre pueblos o pequeñas ciudades y las aldeas se rompe cuando la economía de mercado impone las reglas de juego a la pequeña agricultura, tanto a nivel de la producción como de la comercialización y de los precios, elementos económicos no controlados por los campesinos y que responden a una lógica exterior, la de las empresas agroalimentarias. En un capítulo apasionante denominado “Del mundo cerrado al universo infinito”, Bourdieu describe esta dolorosa ruptura que conducirá finalmente al triunfo del mercado sobre los valores de la sociedad campesina, al “derrumbe del mundo social con base local” o “localocentrismo”. Se genera, entonces una verdadera revolución “simbólica” en donde las mujeres y los hijos no herederos se constituyen en los verdaderos agentes de la modernización o, como señala

Bourdieu, en el “caballo de Troya del mundo urbano” (2002:227). Se trata de un proceso de “conversión colectiva de la visión del mundo” que parte del convencimiento individual de las ventajas y valores del mundo urbano. Según el francés,

“la conversión colectiva que conduce a las salidas cada vez más numerosas y que terminará por afectar a los mismos sobrevivientes es inseparable de lo que hay que denominarlo como una revolución copernicana: el lugar central, inmutable, sede de una jerarquía inmutable y única, no es más que un punto cualquiera en un espacio más amplio, peor aún, un punto bajo, inferior, dominado. La comuna, con sus jerarquías (la oposición entre grandes y pequeños campesinos), se encuentra restituida en un espacio social más largo, en el seno del cual los campesinos en su conjunto ocupan una posición dominada” (2002:227-228).

La crisis del espacio simbólico: el baile campesino

Las fiestas de los campesinos estaban vinculadas con sus prácticas cotidianas en torno al trabajo y la sociedad rural⁸. Con el alargamiento del espacio social, el baile de Navidad cumplía una función importantísima al viabilizar el encuentro entre los jóvenes de los dos sexos, dadas las escasas posibilidades de que se materialice en una población rural dispersa.

“Dada la separación drástica entre la sociedad masculina y la femenina, dada la desaparición de los intermediarios y el aflojamiento de los vínculos sociales tradicionales, los bailes que se hacen periódicamente en el pueblo o en la ciudades vecinas constituyen la única ocasión de encuentro socialmente aprobada” (Bourdieu 2002:111).

8 Patrick Champagne destaca la desaparición progresiva de las fiestas comunales y la sustitución por un “calendario de fiestas individuales”, así como también la “desaparición de las fiestas religiosas vinculadas a determinadas actividades agropecuarias” (2002:155-156).

No obstante, este espacio simbólico se transforma también en el enfrentamiento entre la sociedad campesina y la sociedad urbana; se transforma en un verdadero “choque de civilizaciones”. La dinámica de este espacio pertenece a los jóvenes estudiantes o ciudadanos, mientras que los campesinos, especialmente los solterones “herederos”, se convierten en simples espectadores de una dinámica corporal para la cual no están preparados y tienen pocas posibilidades de intervención. El autor lo señala muy agudamente:

“esta conciencia desdichada de su cuerpo que le conduce a aislarse (a diferencia del ciudadano), que le inclina a una actitud introvertida, raíz de la timidez y de la torpeza, le prohíbe la danza, le prohíbe las actitudes simples y naturales en presencia de las jóvenes. En efecto, avergonzado de su cuerpo, se encuentra molesto y torpe en todas las situaciones que exigen que salga de sí mismo o que de su cuerpo en espectáculo” (Bourdieu 2002:117).

Así pues, en la competencia que se realiza en el baile, en tanto nuevo espacio del “mercado matrimonial”, quienes salen perdiendo son los campesinos, especialmente los herederos que cada año contemplan cómo se escapan las posibilidades de casarse y tener descendencia para dar continuidad al patrimonio. En ese sentido, “el baile es en efecto la forma visible de la nueva lógica del mercado matrimonial”; este mercado matrimonial que anteriormente estaba controlado por las familias, “en adelante está abierto a la competencia más brutal y más desigual” (Bourdieu 2002: 229, 233).

Las consecuencias sobre la desvalorización del mundo campesino son muy claras. Por un lado, en la esfera de la producción ya se ha generado una desvalorización mercantil, pero a ésta se suma ahora una desvalorización simbólica, que incide en los valores de la sociedad rural y en un proceso de desculturización, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres, que conduce a su vez a un “efecto de desmoralización que ejerce una representación pesimista del futuro

de la clase (...) al surgimiento en la conciencia de los campesinos de una imagen catastrófica de su futuro colectivo” (Bourdieu 2002:241).

Bourdieu termina señalando que esta crisis puede tener dos efectos diametralmente opuestos: o a la desmoralización, que conduce a la desbandada, en tanto suma de las fugas individuales, o bien a la movilización, que conduce a la búsqueda de una solución colectiva de la crisis. Esto va a depender en gran parte de la “posesión de instrumentos simbólicos” que permita primero matricular la crisis y luego organizar una respuesta colectiva. Se trata de una propuesta política interesante que explica las diversas reacciones campesinas frente al derrumbe de un espacio social invadido por el mercado y la importancia de disponer de instrumentos simbólicos alrededor de los cuales la clase en crisis pueda dar una respuesta.

No obstante, la visión final del sociólogo es poco optimista sobre el futuro político de los campesinos, pues en la medida en que los principales rasgos de “sus condiciones de existencia” generan un comportamiento individualista, a nivel político “les impide pensarse ellos mismos como una clase capaz de movilizarse con el objetivo de imponer una transformación sistemática de las relaciones sociales” (Bourdieu 2002:259). Un análisis que recuerda la visión pesimista del “saco de papas” de Marx cuando estudiaba el comportamiento político del campesinado francés en la coyuntura revolucionaria de 1848 (Marx 1974).

El análisis de Bourdieu extendido a los Andes

En este acápite, más que hacer una aplicación (que por lo demás sería completamente forzada) del análisis de Bourdieu a la sociedad rural en los Andes, he querido resaltar algunas vetas de investigación que todavía no han sido abordadas en nuestro medio. Los esfuerzos teóricos del sociólogo apuntan a través de to-

da su obra a refutar el análisis economicista de la realidad social, sin considerar las específicas condiciones históricas y sociales en las cuales los “actores racionales” se desenvuelven. En este sentido, trato de puntualizar temas de investigación que podrían ser abordados en su especificidad andina a partir de la reflexión realizada en este trabajo.

Uno de los grandes vacíos de la temática campesina en el área andina es sin duda el análisis de los mecanismos de herencia predominantes entre los campesinos, sean indígenas o no. Esta falencia (en gran parte debido a la debilidad de los estudios antropológicos) ha impedido, por ejemplo, dimensionar el peso que tiene la “herencia bilateral” en el predominio del minifundio entre la población campesina, la cual condiciona seriamente cualquier alternativa productiva basada en la agricultura. Al parecer, actualmente no existiría un interés entre los campesinos andinos en preservar el patrimonio evitando su parcelación. Los archivos rurales muestran efectivamente que la herencia de una propiedad indígena se reparte entre todos los herederos sin distinción de sexo, seguramente porque son tan pobres que no poseen otro bien a testar o con qué recompensar en forma igualitaria a sus hijos. Así pues, a lo largo del tiempo, las propiedades se tornan cada vez más pequeñas y dispersas, lo que se convierte en un obstáculo para su aprovechamiento productivo (Martínez 2002).

Sin embargo, algunos estudios realizados en el subtrópico muestran sorprendentemente que los campesinos pueden establecer nuevas estrategias sobre los mecanismos de herencia en torno a la tierra, con el objetivo de evitar su parcelamiento excesivo.⁹ Pero en general existe un desconocimiento de este tema vital para la subsistencia de los productores campesinos¹⁰.

Un segundo aspecto que tiene vigencia en el análisis de las sociedades andinas es el relacionado con el “alargamiento del espacio so-

cial”, lo que implica la vinculación de la sociedad campesina con los pueblos, ciudades y, actualmente, incluso con el mercado mundial. Recordemos que hasta la mitad del siglo pasado, muchas sociedades campesinas tenían sólo una relación limitada al espacio socio-productivo de la hacienda, situación que se rompió con la reforma agraria de 1964. En 50 años se ha desarrollado una importante vinculación con el mercado interno, lo que supone una ampliación espectacular de los vínculos de la sociedad campesina con los pueblos y ciudades cercanas y posteriormente con el mercado de trabajo existente a nivel nacional. Aunque el espacio que deja la globalización para estas sociedades no pasa por la producción de mercancías sino por la venta de mano de obra, se trata de una vinculación que actualmente traspasa el estricto marco nacional. No se ha estudiado el impacto que este proceso ha significado para la sociedad campesina, su patrón reproductivo, su cultura, sus formas de organización productiva y sus valores. La manifestación más evidente de estos cambios se concretiza en el comportamiento de los jóvenes y de las mujeres que ya no corresponde al modelo supuestamente andino que todavía existiría, por ejemplo, entre las comunidades indígenas.

9 Un estudio realizado sobre una cooperativa en la zona de colonización de Alluriquín, cerca a Santo Domingo de los Colorados, muestra que los campesinos han implementado un novedoso sistema por el cual sólo pueden heredar la tierra los hijos que han decidido dedicarse a la agricultura, con la obligación de casarse con alguien del mismo grupo de colonos. El objetivo último es evitar el parcelamiento de la propiedad (Surenaim 1993).

10 Estudios realizados entre comunidades peruanas, sin embargo, señalan que existirían otras estrategias respecto a la herencia. Así, por ejemplo, Marisol de la Cadena (1991) indica que en la comunidad de Chitapampa cerca del Cuzco, a principios del siglo XX, existía un sistema de herencia por el cual el 80% de la tierra familiar la heredaba el “hijo principal”, entre el 10% o 15% el “secundario” y lo que quedaba para el resto de hijos. Un sistema bastante desigual, considerando además que los dos primeros eran generalmente varones, y que cuestiona el supuesto igualitarismo andino.

La ruptura del campo social en el que se movían los campesinos y la creación de un nuevo campo en donde los elementos centrales provienen de fuera, sin duda requiere de investigaciones detalladas que puedan iluminar los cambios actuales de las comunidades y, en general, en el mundo rural. Sin duda, la generación de nuevos “habitus”¹¹, muchos de ellos introducidos desde fuera y adoptados rápidamente por las generaciones más jóvenes, significa una desvalorización del mundo anterior y de un orden apegado a prácticas en torno a la tierra y a los elementos culturales vinculados a ella.

Un tercer aspecto es el relacionado con el rol activo de las mujeres en la consolidación de un nuevo “habitus”. Entre los estudios sobre el mundo andino, casi siempre se ha considerado a la mujer en el rol de conservación de la cultura (lengua, vestimenta, tradiciones, etc.), de modo que muy difícilmente se podría buscar un paralelismo con los estudios del sociólogo francés. En las sociedades andinas, el hombre ha sido el que ha debido enfrentar el mundo exterior, mientras la mujer quedaba relegada al mundo interior, en una división del trabajo con predominio del rol masculino. Pero además, se trata de una sociedad campesina pobre, que ha debido vincularse con el mundo capitalista a través de la migración interna y en forma muy marginal a través de la venta de mercancías agropecuarias (la mayoría de las veces intermediada por una población mestiza que sacaba ventaja de un mejor conocimiento del mercado). En esas condiciones, la mujer no cayó en la tentación del mundo mercantil y, en este sentido, fue más sólida “la fuerza del inercia” que la “fuerza de atracción” (Bourdieu 2002:220).

Uno de los elementos explicativos de esta diferencia seguramente se encuentra en la educación. Mientras en el caso francés, la escuela y la adquisición de un capital cultural prácticamente descampesinizaba a los jóvenes y en especial a las mujeres (Champagne 2002), en el caso andino la prohibición del acceso a la escuela para las mujeres, constituyó la mejor salvaguardia de la “tradición”. Hasta ahora, el nivel de escolarización de las mujeres indígenas es el más bajo del país, pero cuando las mujeres alcanzan un nivel aunque sea elemental de educación tambalean los pilares de la tradición campesina.¹²

Un cuarto aspecto a resaltar es el análisis de la dominación de la economía de mercado sobre la pequeña producción campesina. Esta dominación se expresa en varios ámbitos (mercado de insumos, comercialización, capital financiero) e impide -como sucede en el caso ecuatoriano- que la producción campesina sea una producción competitiva (dados los altos costos de producción y el enfrentamiento en el mercado con productos más baratos de otros países). Al mismo tiempo, los mismos campesinos no reconocen que la suya es una actividad poco competitiva, lo que conlleva a la ilusión de considerarse productor independiente y a no ver las condiciones de “autoexplotación” que se generalizan en el medio rural.

De allí que Bourdieu habla de que el reconocimiento de esta situación, junto a las ventajas de la sociedad urbana, llevaría a una “conversión colectiva” de la visión del mundo (2002:226) que se produciría a través de una acumulación de conversiones individuales especialmente de aquellas personas con menos vínculos con la tierra (jóvenes, mujeres). En una sociedad rural como la nuestra, con pre-

11 Conceptualizado como “matriz práctica de un pequeño número de principios implícitos a partir de los cuales se engendra una infinidad de prácticas que pueden ser arregladas sin ser el producto de la obediencia a reglas” (Bourdieu, 2002:204).

12 En un interesante estudio sobre algunas comunidades de la provincia de Cotopaxi, se muestra cómo las mujeres jóvenes con un nivel de educación básico buscan salir del mundo rural a toda costa, huir del pesado trabajo agrícola y sobre todo de la tiránica autoridad paterna (Sánchez-Parga 2002).

dominio del minifundio, sin herencia importante que dejar, el número de conversos a las ventajas del mercado y de la sociedad urbana va en aumento, lo que se refleja en su progresivo despoblamiento: una realidad frente a la cual no podemos taparnos los ojos.

Por último, es importante señalar que los procesos de desestructuración de la sociedad rural tienen sus características propias y responden a configuraciones diferentes tanto de la estructura agraria como de la misma respuesta de la sociedad campesina y rural. El mercado en el caso de las sociedades andinas no ha sido una realidad ajena a su cotidianidad. En algunas regiones donde el sistema de hacienda no tenía mucho peso, ya se había configurado una sociedad rural más dinámica en base al acceso más igualitario a la tierra y donde el mercado en cierto sentido se fue construyendo desde abajo a través del sistema de ferias campesinas (Martínez 1998). No era un elemento extraño a su vivencia y fue en cierto sentido “domesticado” por la misma dinámica rural. Seguramente, la lógica económica no era independiente de la lógica de las relaciones sociales en la cual se encontraba inmersa, situación que ha cambiado actualmente, en beneficio del mercado (Bourdieu 2003). Además, en el área andina del Ecuador la cercanía campo-ciudad condujo a la creación de un campo social bastante abierto a las influencias de uno y otro lado. Incluso se llegó a hablar de “ciudades de campesinos”, pero nunca se mencionó el impacto de las ciudades en el campo. Aquí hay una rica veta de investigación a desarrollarse destacando las especificidades andinas en el proceso de construcción de este campo social que ya no corresponde al de la sociedad tradicional rural pero que, al haber estado abierto más tempranamente al mercado, puede haber generado una “conversión” más social al mercado, aunque se exprese en prácticas individuales y no necesariamente colectivas.

Bibliografía

- Bourdieu, Pierre, 1993, *La misère du monde*, Éditions de Seuil, Paris.
- , 2001, *Science de la science et réflexivité*, Éditions Raison d'Agir, Paris.
- , 2002, *Le bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn*, Éditions de Seuil, Paris.
- , 2002a, “Pour un savoir engagé”, en *Le Monde Diplomatique*, février, p.3.
- , 2003, “La fabrique de l'habitus économique”, en *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, N° 150, décembre.
- , 2004, *Esquisse pour une auto-analyse*, Éditions Raison d'Agir, Paris.
- Bouveresse, Jacques, 2003, “La connaissance de soi et la science”, en *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, N° 150, décembre.
- Boyer, Robert, 2003, “L'anthropologie économique de Pierre Bourdieu”, en *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, N° 150, décembre.
- Champagne, Patrick, 2003, *L'héritage refusé. La crise de la reproduction sociale de la paysannerie française 1950-2000*, Éditions de Seuil, Paris.
- De la Cadena, Marisol, 1991, “Las mujeres son más indias: etnicidad y género en una comunidad del Cusco”, en *Revista Andina* N° 1, julio.
- Hervieu, Bertrand y Viard, Jean, 2001, *L'archipel paysan. La fin de la République Agricole*, Éditions de l'aube.
- Martínez, Luciano, 1994, *Los campesinos artesanos en la sierra central del Ecuador: el caso Tungurahua*, CAAP, Quito
- , 2002, *Economía política de las comunidades indígenas*, ILDIS, Abya Yala, OXFAM, FLACSO, Quito.
- Marx, Carlos, 1974, *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*, Editorial Grijalbo, Colección 70, México.
- Sánchez-Parga, José, 2002, *Crisis en torno al Quilotoa: mujer, cultura y comunidad*, CAAP, Quito.
- Silverstein, Paul A, 2003, “De l'enracinement et du déracinement”, en *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, N° 150, décembre.
- Surenaim, Charles Eduard de, 1993, “De la coopérative a la communité”, en *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, N° 22 (2), Lima.

Encuentros artísticos con el dolor, las memorias y las violencias

Pilar Riaño Alcalá

Antropóloga, Ph.D. Universidad de Vancouver
Profesora de la Universidad Nacional de Colombia

Mail: pilar_riano@telus.net

Fecha de recepción: julio 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen: El artículo examina las pugnas del recuerdo y el olvido en comunidades afectadas y divididas por la violencia. Mira a un proyecto de arte público comunitario que reunió mi investigación antropológica sobre jóvenes, memoria y violencia, el trabajo de arte público de la artista Suzanne Lacy, el trabajo comunitario de una coalición de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y el liderazgo de un grupo de residentes del barrio Antioquia en Medellín (Colombia). El proyecto de arte comunitario creó un museo de la memoria en un bus de transporte público como lugar activador de procesos de elaboración del duelo tanto a nivel individual como colectivo y como lugar para imaginarse el futuro mientras que se confrontan aspectos del duelo, la coexistencia pacífica y la reconciliación.

Palabras claves: Arte público, memoria y violencia, Colombia

Abstract: The article examines the politics of remembering and forgetting in communities divided and affected by violence. It looks at a public art project that brought together my anthropological research on youth, memory, violence and place in Medellín, the public art work of visual artist Suzanne Lacy, the community work of a coalition of several local government and non government organizations and the leadership of a group of residents from Barrio Antioquia in Medellín (Colombia). The community art project created a museum of memory in a public transit bus as a meaningful place that activated processes of individual and collective mourning and that invited individuals and the community to envision the future and address issues of mourning, pacific co-existence and reconciliation.

Keywords: Public Art, Memory and Violence, Colombia

Reflexionando sobre la necesidad de recordar a los muertos para conjurar el olvido, un joven de Medellín -ciudad colombiana en la que en los últimos 20 años han muerto más de 40.000 jóvenes como resultado de múltiples violencias- escribe:

La muerte sola, no es muerte completa. La muerte completa es el olvido. Así que no hay muertos más muertos que los que se olvidan. Esto lo debíamos saber mejor los habitantes de Medellín, que en los últimos años nos ha tocado aprender en suerte, y al son de sálvese quien pueda, ese oficio atroz que es torear la muerte, además con el capote más rojo, más alegre, más vivo... más débil: nuestra juventud. Pero también y con el otro lado del mismo capote hemos aprendido el oficio del olvido¹.

Su voz se une a muchas otras que interrogan el olvido y el sentimiento de pérdida como expresiones de las heridas que las violencias extremas y múltiples han ocasionado en el mundo social de los colombianos. A partir de mi investigación etnográfica sobre memoria y violencia en la ciudad de Medellín y de una intervención de arte público comunitario, *La piel de la memoria*², este artículo comparte la preocupación por el papel del recuerdo y el olvido en sociedades atravesadas por la violencia y el terror. Presenta una reflexión antropológica sobre el impacto de la violencia

en la experiencia humana y en los modos de tramitación de los duelos.

La piel de la memoria tuvo lugar en el barrio Antioquia al suroccidente de Medellín (un barrio con una historia marcada por la exclusión, las tensiones sociales y las violencias) e intentó responder a la discontinuidad y vacío que preocupa al residente citado a través del arte, el ritual y la conmemoración comunitaria. En una primera parte, se recogieron cerca de 500 objetos emblemáticos de las memorias de los habitantes del barrio Antioquia para su instalación en un bus-museo de la memoria, que rodó por los diferentes sectores del barrio, y en una estación del metro de Medellín. El proyecto enfatizó la elaboración del duelo y la reflexión sobre el pasado a través del préstamo de un objeto seleccionado por los residentes como representativo de una memoria significativa en sus vidas. La obtención de estos objetos fue tarea de un grupo de 20 jóvenes y mujeres del barrio quienes, mientras visitaban a sus vecinos, se convirtieron en escuchas y escribanos de las historias y emociones que acompañan a los objetos del mundo material. El museo, como lugar expresivo de la memoria que recibió en 10 días a más de 4.000 visitantes de toda la ciudad, se convirtió así en un recinto dinámico de las memorias individuales y colectivas, y en un lugar que les rindió homenaje pero que también develó su carácter conflictivo y en disputa. Los objetos dan cuenta de la tradición oral local pero, además, de los trazos de la memoria de eventos nacionales que perviven en la vida familiar y de los modos en que los conflictos locales se articulan con procesos macro sociales como los de la violencia política de los años 50, el narcotráfico, las políticas de planificación urbana y la exclusión social.

La segunda parte del proyecto buscaba superar la sospecha y hostilidad entre los vecinos del barrio y crear un canal expresivo para pensar en el futuro. A los residentes que entregaron un objeto y a los visitantes del mu-

1 Ricardo Aricapa, citado en Henao y Castañeda (2001).

2 El proyecto en referencia es *La piel de la memoria: Barrio Antioquia, pasado, presente y futuro*. El proyecto de un museo de la memoria fue de carácter colaborativo entre la artista americana Suzanne Lacy y la antropóloga Pilar Riaño y contó con el apoyo de la Secretaría de Educación de Medellín (EDUCAME), la Caja de Compensación Comfenalco Antioquia, la Corporación Región, Presencia Colombo Suiza y la comunidad del Barrio Antioquia. La producción general y coordinación pedagógica estuvo a cargo de Mauricio Hoyos. El equipo coordinador del proyecto estuvo integrado por William Álvarez, Jorge García, Juan Vélez y Ángela Velásquez.

seo se les pidió que escribieran una carta que incluyera un deseo para un vecino(a) desconocido(a) (los escritores no conocerían quien eventualmente recibiría qué carta en particular), y un deseo específico para el futuro del barrio Antioquia. Cerca de dos mil cartas en papel blanco, colocadas en gruesos sobres blancos de gran tamaño, fueron expuestas sin abrir próximas a los objetos en el museo. Al final de la exhibición, en una celebración-performance que tomo la forma de seis comparas por las calles del barrio, jóvenes y adultos en una coreografía de bicicletas, mimos, contadores de historias, chirimías, zancos y personal de pie, deambularon por el barrio celebrando la instalación del museo de la memoria y anticipando el futuro con la entrega de una carta a cada hogar del barrio³.

En los últimos quince años, la Oficina de Paz y Convivencia de Medellín tramitó más de cien pactos de no-agresión con bandas y milicias del nororiente, centroriente, suroccidente y suroriente de la ciudad (Daza 2001). En su gran mayoría, estos pactos han tenido una corta historia y, en materia de meses, los grupos o nuevas versiones de ellos regresan al enfrentamiento armado y al ejercicio del terror. Las posibles razones del fracaso repetitivo de estos experimentos de “paz” tienen que ver con los vínculos directos entre conflictos locales y violencias-sistemas macro sociales, y con una débil voluntad política para sostener estos procesos. Pero también tienen que ver



Pilar Riaño

con la ineficiencia e impunidad que caracterizan los sistemas judiciales, el fracaso en la formulación y ejecución de estrategias para la inserción económica y social de estos jóvenes, y la ausencia de intervenciones socioculturales que tramiten las venganzas y duelos no elaborados que continúan alimentando odios y violencias. Desde esta preocupación, el artículo se interroga acerca de las condiciones bajo las cuales los procesos de paz y reconciliación pueden operar a nivel microsocioal:

- el papel de la memoria, los rituales y el arte como motores de reconocimiento del sufrimiento social y de la elaboración del duelo colectivo;
- el modo en que las respuestas culturales y de intervención social a través del arte, la memoria y la cultura pueden constituirse en elementos dinamizadores de una *pedagogía colectiva y cívica* que cuestione los modos en que la violencia destruye la vida social local, las separaciones tajantes entre representación y experiencia y aquellas construcciones binarias (víctima-victimario, violento-no violento) que no dan cuenta de las complejidades y contradicciones desde las que se viven las violencias.

3 Un equipo multidisciplinario (antropología, arte, historia, trabajo social, arquitectura) trabajó con líderes comunitarios del Barrio Antioquia en un proceso que incluyó formación pedagógica y artística, difusión, producción y colaboración. *La piel de la memoria* se inició en junio de 1998 con una serie de talleres en los que Suzanne Lacy y Pilar Riaño trabajaron con el equipo de veinte líderes para crear una visión de esta instalación-museo y de la performance-celebración final del proyecto. Posteriormente, este grupo trabajó durante un año con el historiador Mauricio Hoyos en la preparación del proceso de recolección de los objetos que se exhibirían en el museo, en la producción y en el proceso pedagógico del proyecto.

Las discusiones sobre las políticas de reconciliación en períodos postdictatoriales o postconflicto han tendido a sucumbir en tramposas oposiciones entre una alternativa de reconciliación y el ejercicio de la justicia. La reconciliación se asocia así con un acto hegemónico de silenciamiento de los horrores del pasado, en aras de la reconstrucción nacional o como una puesta en escena de un supuesto consenso nacional que neutraliza la violencia (Fundación Manuel Cepeda 1998, Humprey 2002, Paris 2002). Al examinar el profundo impacto de las violencias en el mundo social de los habitantes de Medellín, argumento por la necesidad de pensar la reconciliación desde un lugar y perspectiva diferentes. Esta mirada a la reconciliación expande y desplaza su campo de acción en una multitud de ámbitos públicos, a la vez que privilegia la importancia de pensar la reconciliación desde las redes sociales, lo local y los ámbitos comunales e íntimos. Entiendo la reconciliación como un acto colectivo de comunicación y aprendizaje desde el que una colectividad se sitúa como *testigo* del pasado de violencia y atrocidades. Es decir, los procesos y actos mediante los cuales una colectividad enfrenta su pasado a través del testimonio, el reconocimiento del dolor y el diálogo en muchas voces (Humprey 2000).

Desde un cuestionamiento más amplio sobre las tareas de la memoria en un país como Colombia, el artículo interroga usos y sentidos: ¿cuál es el tipo de recuerdo y conmemoración que necesitamos en una sociedad fragmentada y debilitada moral y socialmente por la guerra? ¿Cuál es la memoria que puede alejarnos de ese olvido que no asume las heridas, ni las aflicciones o a los muertos? ¿Cuál es la conmemoración que permite la reconstrucción del tejido social, que no silencia las heridas en el cuerpo social? ¿Pueden acaso las heridas sociales de un pasado violento sanarse cuando no se ha hecho justicia? Las claves que aquí se exploran se colocan en la intersección entre el papel social y cultural del recuerdo y el olvido y

los usos del arte, los rituales colectivos y la participación comunitaria en tanto dispositivos de reconstrucción del mundo social, de las confianzas básicas y los lazos sociales primarios.

Las imágenes y lenguajes de la exclusión: el barrio Antioquia

En sus avatares investigativos por el barrio Antioquia, un grupo de siquiátras concluyó que los jóvenes involucrados en el conflicto violento tenían una “concepción de vida fatalista, que le resta importancia a la responsabilidad o participación individual en el curso de los sucesos de la existencia propia” (Ángel, Fernández, Jaramillo y Zapata, 1995: 47). Los jóvenes del barrio Antioquia, nos dicen estos siquiátras, mantienen un afán “por una imagen narcisista de potencia agresiva”, por “la intimidación, la burla y el chantaje” y por un impulso de “venganza o por la deriva de la satisfacción maníaca en la ‘rumba’ y la droga” (Ángel, Fernández, Jaramillo y Zapata, 1995: 48). Su conclusión, que en 1997 se fundamenta en el psicoanálisis⁴, no se aleja mucho de la imagen que se crea de esta zona cuando en el año 1951 la administración del alcalde Luis Peláez Restrepo lo declara como zona única de tolerancia de la ciudad de Medellín, argumentando que “el barrio Antioquia era por muchas razones el indicado para la zona de tolerancia. Su situación; su anterior contaminación...” (*El Colombiano*, 29-08-1951, pág. 11). Tampoco difiere mucho de la reseña que tres periodistas norteamericanos hacen de los habitantes del barrio Antioquia en 1988, como “los perpetradores de los crímenes más atroces de Medellín” (Hedí, Sabogal y Walden 1988: 29-30).

⁴ Bajo un convenio entre la Secretaría de Bienestar Social de Medellín y el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, este grupo de siquiátras llevaron a cabo una serie de talleres de acompañamiento psicológico con jóvenes del barrio Antioquia.

Siquiatras, políticos y periodistas contribuyen a lo largo de cuatro décadas a la construcción de un discurso y unas representaciones sociales que ponen a los habitantes de este barrio entre la patología, la inmoralidad y la delincuencia social, y al barrio como epicentro y símbolo de la marginalidad social que se teme y evita.

Los orígenes del barrio se remontan a los años 20 como núcleo receptor de migrantes pobres del campo, provenientes de regiones muy diversas del departamento de Antioquia. La violencia política que afecta al país en los años 50 se vive intensamente en el barrio hasta el año 1951 cuando es declarado zona única de tolerancia y sus calles se llenan de prostitutas, burdeles y visitantes de todo tipo, mientras sus escuelas se convierten en centros profilácticos. El impacto de la zona de tolerancia dejará numerosos secuelas de delincuencia social y establecerá al barrio como epicentro de mercadeo de drogas sicoactivas en la ciudad. Durante los 60 y 70, las posibilidades de ascenso social las brinda el narcotráfico: éste toma al barrio Antioquia como base material, social y geográfica⁵ vinculando en los años 60 a los habitantes del barrio en las redes del tráfico de marihuana, en el tráfico de cocaína en los 70-80s y en la prestación de una multitud de servicios al narcotráfico y a las redes organizadas del crimen. El barrio vive diversos períodos de violencia pero con más agudeza a comienzos de los 90 cuando las bandas locales se enfrentan en una guerra territorial. El momento más álgido se presenta en 1993 cuando más de 200 jóvenes del barrio mueren violentamente dentro del mismo barrio a consecuencia de los enfrentamientos armados entre las seis bandas que allí tenían su base territorial. En diciembre de

1993 se inicia un proceso de paz que se sella en 1994 cuando las seis bandas enfrentadas realizan un acuerdo de no-agresión. La paz se rompe en ese mismo año y desde entonces la dinámica de “guerra” y “paz”, de pactos y rupturas se ha mantenido hasta el presente.

Desde que llegué a ese barrio en 1997 (a asesorar un proceso de recuperación de historia de barrio como clave para solidificar un frágil pacto de paz entre las bandas del barrio), la cartografía que va emergiendo desde las memorias de sus pobladores indica unos entramados culturales y sociales mucho más complejos que los de las redes sociales de delincuencia, crimen e ilegalidad. Pues si bien en el barrio Antioquia se convive con los extremos de lo ilegal y la violencia armada, también se convive con la zozobra diaria, los sentimientos de pena y congoja y con el empecinado esfuerzo de mantener una tradición oral y unas celebraciones comunitarias que atan sus sentidos de pertenencia como barrio.

El impacto que las acciones violentas y las políticas de exclusión social han tenido sobre el tejido social y la experiencia humana y cotidiana de los habitantes del barrio ha sido devastador. Dicho impacto puede ser rastreado desde el concepto de “herida social” que maneja Doris Salcedo⁶ y a partir de una exploración de las formas en las que el dolor y el sufrimiento individual y colectivo se viven y re-significan como experiencias sociales. Esta herida colectiva se forma en el entrecruce de los efectos de procesos macro sociales de planeación urbana, violencia política y economía política del narcotráfico, con los conflictos que desangran a bandas locales, sus familias, cuadradas, sectores y al barrio, y con el éxodo continuo de sus habitantes (que persiguen la esperanza de “coronar” a través del

5 Numerosos factores permiten la instalación del narcotráfico en la vida del barrio: su cercanía al aeropuerto, la presencia de redes organizadas de delincuencia (Ej. apartamenteros) y las experiencias como carteristas de algunos de sus habitantes en los Estados Unidos.

6 Doris Salcedo (en Feitlowits 2002) sostiene que si bien la pena de familiares y víctimas es profundamente íntima, la esencia de los eventos que la genera es política; así, la sociedad debe reconocer esta pena y su carácter colectivo.

transporte de droga o el traqueteo –traficar-). El sufrimiento social resulta del impacto de estos poderes nacionales o locales sobre la experiencia cotidiana y es vivido desde las experiencias extremas frente a la muerte, los juegos paradigmáticos de lealtades, la ausencia de procesos comunitarios de elaboración del duelo y la desestructuración de la confianza social. Se trata, entonces, de un sufrimiento social que como lo han anotado Kleinman, Das y Lock (1997) tiene sus orígenes y consecuencias en las devastadoras lesiones que las fuerzas sociales pueden infringir en la experiencia humana.

Objetos del recuerdo, sujetos de las historias

La propuesta de intervención cultural surge de los logros que se obtienen con el proceso de recuperación de historia barrial, las reflexiones del grupo de jóvenes y mujeres del barrio vinculados a este proceso y las de los trabajadores con jóvenes y activistas. En el proyecto de arte público comunitario, la memoria fue el motor principal de una intervención artística, comunitaria e investigativa que exploró la relación memoria, duelo y reconciliación. A través del arte público comunitario y la recuperación de la memoria, se propició un espacio de reflexión colectiva sobre el pasado, un espacio que permitiera desde el presente elaborar los duelos individuales y colectivos para así poder mirar hacia el futuro con una mirada que ayude a la reconciliación y a la convivencia.

En la primera parte del proyecto de arte público se enfatizaba la elaboración del duelo a través del préstamo de un objeto u artefacto significativo de la memoria de cada familia. Los recolectores de objetos optan por la práctica cultural de la visita a los vecinos de la cuadra o sector. La visita buscaba establecer una relación cercana que permitiera al visitado

compartir y evocar ciertas memorias a través de los objetos. Un periodista local describió la tarea de los recolectores-visitantes como una forma de “arqueología cotidiana”: buscando objetos e identificando su carga significativa, ayudando a los residentes a establecer una relación entre el objeto, el lugar que ocupa en su mundo material y los modos en que éste establece para el individuo y/o la familia un lazo con el pasado. Allí, en la intimidad del cuarto o de la sala de la casa, mientras los objetos eran sacados de baúles, repisas, paredes o rincones, las historias se fueron contando:

“Un anillo de un hijo que hace seis años no lo veo que está en Miami. Lo quiero mucho, me lo dejo de recuerdo, lo quiero mucho, lo extraño mucho”.

“Este pasamontañas es de un *parcero* que se mató y lo llevamos al centro un día que a comprar una camisa y vimos los pasamontañas y él compró dos, uno negro de una mática de la marihuana y uno gris y... bueno como el se mató, lo enterramos con el negrito pasamontañas y yo me quedé con ese otro pasamontañas y mi otro hermanito se quedó con los guantes, lo único que nos quedó de recuerdo de él”

Madre: Una foto de mi niña, de mi hija

Padre: esta es la niña, esto es el único recuerdo que yo tengo

Madre: que nosotros tenemos

Padre: es de esa niña que la dejamos en el Putumayo botada después de muerta. Y yo quiero conservar esta foto lo más que pueda al lado mío y es el único tesoro que yo tengo, como tesoro, ¿sí o no?

Una gran mayoría de los objetos que se ofrecen tienen un carácter mundano y de uso cotidiano. Sus significados, sin embargo, trascienden los usos para indicar su condición de objetos únicos y especiales, “tesoros” como nos dice el padre de la niña muerta, que se resignifican por las historias que evocan. Se trata de *objetos-puente* que -como lo expresa Doris Salcedo- conectan la pérdida material y

humana al cuerpo y al mundo material: una porcelana de una iglesia, con el campanario fracturado y un ángel tocando guitarra, un regalo que Tulia no deja tocar a nadie y que lo recibió de “una persona que yo quería mucho y ya está lejos”. Las prendas que una vez que el sujeto desaparece quedan como evidencia de su ser, así como la madre del Negro le regaló a Lili la camisa azul que “se colocaba con un jean blanco y zapatillas color café y se veía muy lindo”, o cuando Mayerly y su amiga recogen y lavan el “bluyin” que llevaba su amigo cuando fue asesinado, “y lo tenemos guardado como un recuerdo de él porque de él sólo quedaron poquitos recuerdos”. Objetos entonces que acarrear los trazos del ausente y que en la vida cotidiana se colocan en espacios familiares, como las fotos en el cuarto de José marcando una cierta presencia de la persona ausente (Reyes 2001).

Mezclados con estos objetos están aquellos que cargados de tradición oral han pasado de generación en generación, evocando eventos fundadores del barrio o marcando las historias familiares: las ollas y jarras de peltre, el muñeco Pinocho de plástico que tiene setenta años y ha pasado por cuatro generaciones, la centenaria máquina de coser en la que “la tatarabuela cosía los ajustadores y todo lo que era sostén de pechuga”. Les acompañan los objetos viajeros que regresan con o sin el viajero de “la USA”: radios en forma de un Cadillac de los años 70 o teléfonos dorados en forma de elefante. Están también los artefactos que ligan las historias familiares a los ciclos de vida, cambios generacionales y la confirmación de las lealtades y los lazos de parentesco: nacimiento, bautizo, los primeros pasos, los rituales religiosos, el matrimonio. También están aquellos objetos emblemáticos de momentos críticos o límite en la experiencia de quien los guarda a veces en secrecía, u otras con la determinación de contar su historia muchas veces: esculturas, carros o pinturas que se crean en la cárcel, el recorte de periódico que narra

el drama de una mujer que cae presa con cocaína, las cartas que una niña de cinco años le escribe a su padre que esta muerto y que almacena cuidadosamente en una cajita plástica, la cruz de balas que fabrican soldados durante su servicio militar en 1928, los cubiertos recubiertos de oro que Griselda Blanco, la “reina de la coca”, le regaló a una abuela del barrio que trabajó para ella.

Una vez recopilados los objetos y familiarizados con sus historias de dolor, pérdida, cambio, viaje, creencias y tradición, las preguntas y dilemas se trasladan al campo de la representación artística y a la manera en que el bus, en tanto espacio físico, podría transformarse en un lugar simbólico-social para el recuerdo, la reflexión y la conmemoración. El bus se escoge como lugar para la instalación del museo de la memoria cuando nuestras discusiones con los jóvenes y mujeres del barrio y con el equipo coordinador concluyen que no existía un lugar en el barrio al que pudieran tranquilamente desplazarse los habitantes de todos los sectores. Surge así la propuesta de utilizar un bus de tránsito público



Pilar Riaño

El bus-museo de la memoria

no sólo por la creatividad decorativa de sus exteriores e interiores sino porque puede movilizarse entre sectores. La transformación de un bus de transporte público -en este caso, escolar- en museo nos permite, además, entrelazar su función de desplazamiento por la ciudad (cruzando territorios) con la metáfora del museo de memorias que desdibuja y cruza las fronteras territoriales para trazar una ruta simbólica hacia el encuentro de las memorias. El bus con los colores verde y blanco que revelan su función de transporte escolar ofrece un lugar para el recuerdo y para la transformación de los actos de ver y recordar en actos de *re-conocimiento*.

Para la distribución de los objetos en el bus se revisaron las historias de cada objeto. Las propuestas estéticas y narrativas que surgieron en los talleres y reuniones con el equipo de jóvenes y mujeres recolectoras, determinaron que cada objeto debía ser instalado para dar cuenta del valor que tienen para quién lo prestó y su carácter único. La propuesta de la artista Suzanne Lacy fue la de agrupar los objetos de acuerdo a unos hilos narrativos visuales que seguían los temas dominantes en las memorias que éstos evocaban: pérdida de un ser querido, amistad, períodos de la vida, relaciones e historia. Con excepción de aquellos objetos que por su tamaño no cabían en las vitrinas, todos los objetos recolectados fueron incluidos en la instalación. Como antropóloga conocedora del impacto desarticulador de la violencia en el tejido social del barrio y en las relaciones de confianza, mi dilema se ubicaba en los modos de contrarrestar el poder representativo de la violencia sangrienta y la posibilidad de ofrecer imágenes alternativas que, ancladas en lo cultural, permitan re-elaboraciones de las memorias de las violencias y visibilicen otras representaciones y marcas.

La propuesta de un bus museo (como lugar para la memoria que exhibe los objetos que se recogieron en las visitas a vecinos) se li-

gaba con una de las pistas de mi investigación etnográfica: la profunda interconexión entre memorias y lugares, y las cualidades mnemónicas de los lugares para activar la memoria e imaginación y para conectar los individuos con un sentido de historia e identidad⁷ El concepto de lugar como metáfora de identidad y del habitar (cf. Escobar 2001) fue desarrollado en el proyecto de arte público a través de la instalación del museo en un espacio familiar. El bus como un objeto familiar de movimiento que cruza diariamente bordes imaginarios e impuestos facilitó el contexto físico para la instalación. Entendimos así al museo como un receptáculo de memoria viva y cotidiana, una especie de textura sensorial, *una piel de la memoria*, sentida y resignificada por cada uno de sus visitantes.

El lazo entre el propietario anónimo de un objeto, los otros objetos y la memoria colectiva que resulta de su instalación produjo un campo de significados muy ricos en el cual estaba reflejado el carácter conflictivo y en disputa de las memorias y los modos diversos en que las historias locales recrean historias nacionales. La secuencia de estos objetos puestos con cuidado y creatividad detrás de cientos de luces blancas crea un conjunto de relaciones y una aura ritual que daba cuenta de la magnitud de la pérdida, pero también de continuidades y referentes históricos e identitarios: tradiciones culinarias y familiares, la participación de varias generaciones en la guerra y el impacto de ella. Ellos también daban cuenta de la singularidad con que cada quién mantiene esos vínculos con el pasado a través de los objetos más diversos: el pedazo de algodón, la estampita, el cofre, la manila, los radios, las prendas de vestir, las fotos, las cartas.

Cuando los recolectores finalizan su tarea y el museo abre sus puertas, ellos y ellas se convirtieron en sus custodios: alfabetizadores del recuerdo que comparten las historias de

7 Desarrollo esta idea en Riaño (2000:23-39).

los objetos con los visitantes, que acompañan al vecino o a la vecina para quién el museo abre las venas del dolor o la nostalgia, que aprenden nuevas historias que los visitantes contaron, que recogen impresiones y comentarios. Su labor fue de escucha pero también de testigos de la fuerza del acto de recordar, de los modos en los que personas desconocidas les confiaron sus historias íntimas, y de los modos en que en el intercambio se reconocen uno a otro, en el dolor o la emoción compartida.

En el bus: miradas de sentido

Una vez colocados los objetos en el museo de la memoria, las preguntas se desplazan hacia los modos de ver la instalación, a los significados y sentidos que construyeron los visitantes del museo. Para explorar en este conjunto de relaciones sociales y miradas de sentido que se generan en el momento de la visita, parto del planteamiento de Doris Salcedo sobre el potencial del arte para crear relaciones entre los individuos durante el momento fugaz de la observación. Al entrar los visitantes al bus museo, ellos y ellas establecieron un sinnúmero de relaciones a través de sus miradas y actos de contemplación: reactivando la memoria de quienes lo visitaron, reconociendo objetos, encontrando piezas de historia que se remontan a generaciones pasadas, compartiendo historias, mirando y reconociendo las caras de muchos que han muerto, contemplando silenciosamente, lanzando comentarios rápidos que denotaban a veces el resentimiento y/o la desconfianza, invitando al diálogo y a compartir emociones y generando un sinnúmero de reflexiones.

Para algunos, la visita les invita a recorrer el pasado debatiéndose entre la nostalgia, la constatación del dolor y la autorreflexión:

Carlos: Yo soy de las personas que ya tenemos una edad adulta; recordamos con mu-

cha nostalgia ciertas cosas del barrio, que ahora el barrio de nosotros lo seguimos queriendo con mucha nostalgia pero seguimos con la inquietud de que se está edificando en base a la sangre de nuestros jóvenes, de nuestros muchachos. La tolerancia de nosotros hacia la muerte nos lleva hacia un abismo. Yo creo que nosotros necesitamos creer más en nosotros, en lo que podemos hacer y lo que hay aquí forma parte de esa historia bonita, de esa historia de lágrimas. Yo creo que en todas las familias de acá del barrio hemos estado tocados por la muerte, nuestro amigo, nuestro vecino. Yo creo que esto es como entrar en el interior de uno mismo. En realidad nostalgia, siento ganas de llorar.

A Carlos, la visita al museo le despierta una multitud de sensaciones y lo llevan a la reflexión sobre el impacto de la violencia en su comunidad. Este conjunto de emociones fuertes se acompaña de una crítica al modo en que se está construyendo historia en el barrio, “con la sangre de nuestros jóvenes”. Su esperanza de que se le estuviera “tocando al corazón” a la gente coincide con la de los organizadores del evento y apunta a esa posibilidad de que la mirada relacional de los objetos en el museo se torne en *reconocimiento* de la historia y del impacto de la violencia en la vida diaria y en la historia del barrio. Las reacciones de muchos otros indica que esta conexión estuvo muy presente:

John, de Prado Centro: Todos esos objetos nos hablan, nos cuentan muchas historias de quienes los tuvieron en sus manos ¿cierto? Fue un impacto muy fuerte porque como te digo no necesitas saber las historias completas de todas las cosas que hay ahí reunidas porque todas ellas te hablan de la vida, de la muerte, de los jóvenes, de los viejos, del pasado, del presente y me parece que es muy bueno que quienes visitan el museo, que la gente del barrio, logren conocer esa historia porque ahí aprende uno mucho de uno mismo, de los padres, del pasado. Supongo que va a permitir crear muchísimos lazos de cómo querer pertenecer y cómo sentir que uno pertenece a



Pilar Riaño

Interior del bus-museo de la memoria

una historia, que no está uno solo. A mi especialmente [me llamaron la atención] las cartas, los cuadernos y las fotografías. Sí, especialmente las fotografías.

Un elemento crucial del proyecto de arte público comunitario fue la comprensión de que el proceso es clave en este tipo de intervención artística. Me refiero a un proceso entendido tanto en su duración temporal como en su dimensión de interacción social, en la que se busca que la experiencia de hacer y ver arte se torne en un proceso de creación de significados y referentes comunes (Lacy 2003). En el caso de *La piel de la memoria*, la participación de un equipo de líderes jóvenes y mujeres, la colaboración y coproducción con el equipo de las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, y la inscripción del proceso del arte dentro de un proceso más amplio de organización comunitaria y pedagogía cívica, fueron cruciales para establecer la base comunitaria y las posibilidades estéticas y sociales para la construcción de significados comunes acerca del sentido de pérdida e historia.

Las entradas en el libro de registro dan cuenta de los modos diversos como se vio y experimentó el museo, y que cada quién sintetizó en sus propias palabras: “super genial”, “me gustó”, “muy organizado”, “¡heavy!”, “fabuloso”, “fue el verdadero museo que todos

creíamos”, “la idea es muy funky y original”, “me encanta que tengan en cuenta a la gente del barrio para el museo, todos resultan siendo unos Van Gogh!”. Los comentarios también dan cuenta de los modos en que la experiencia estética frente a la obra de arte y las vivencias personales le dan forma y un sentido ritual a las emociones que se suscitan al caminar por el bus museo. Ellas sugieren el poder de la memoria para convertirse en un medio expresivo y un referente desde el que los individuos se re-sitúan en el presente:

Super elegante porque hay muchos *parceros* muertos y en esas *burguesías* de fotos.

El bus trae todos los muertos, el bus es bus es muy bonito (niño).

Salí sobrecogido, conmovido, estremecido. Los objetos, las voces, las fotografías palpitan.

La secuencia y cantidad de objetos crearon un aura sacralizada y ritual que daba cuenta de la magnitud (numérica y emocional) de la pérdida, pero también de lo que existe en común, de los lazos desde los que los residentes del barrio se perciben como comunidad y desde los que los visitantes del resto de Medellín establecieron asociaciones con su propia experiencia. Experiencia estética y reflexiva que en varios casos es acompañada de la curiosidad:

¿Por qué yo no había visto esto antes y a esta gente?

A su vez, los objetos fueron reconocidos en su carga histórica y como marcadores de importantes momentos. Así, de una forma más velada se van dibujando esos lazos entre historia local, regional y nacional:

Señora del barrio, 50 años: Muy lindo. Me trajo recuerdos la foto de Jorge Eliécer Gaitán. Cuando lo mataron a él en Bogotá trabajaba yo en tejidos *Leticia* y cuando vine del trabajo, a él lo mataron como a la una y pico,

entonces la bulla de que lo mataron y como soy tan sentimental me puse a llorar.

Viviana, del barrio: Muy bueno pero olía como a muerto. Las cosas antiguas como la plancha, unas chancas. Más cosas antiguas y recordar a la gente que ya murió a los jóvenes.

Artefactos cargados de historia y potencial asociativo que les trae sensaciones tan concretas como la del olor de muerto. La metáfora del objeto puente se aplica así no sólo para nombrar esa asociación íntima entre el artefacto, quién lo guarda, el pasado y el mundo sensorial, sino además para explicar lo que el bus museo generó en el entrecruce entre experiencia estética y las relaciones sociales: el museo como objeto-puente entre los residentes y su historia, entre los visitantes y los que prestaron las piezas, entre los residentes del barrio y los visitantes de afuera, entre dueños de objetos y los mismos objetos resignificados en su instalación en el museo. En esta mirada relacional se construye la posibilidad de un proceso cívico colectivo en el que los visitantes se sitúan como testigos del pasado de violencia y terror. El arte y la memoria activan esta mirada relacional para potenciar el deseo por reconocer, dar testimonio y ver, es decir, para pensar la reconciliación.

Al recorrer el bus los diversos sectores del barrio y abrir sus puertas en cada uno de ellos, se cruzan las fronteras territoriales que dividen al barrio para establecer ciertos puentes emocionales y de lugar. De la misma forma, los cientos de visitantes de fuera del barrio rompieron otras fronteras simbólicas y se adentraron a un lugar estigmatizado y temido como el barrio Antioquia. Al cruzar las fronteras, al adentrarse al mundo complejo de los recuerdos de los habitantes del barrio, los prejuicios se quiebran y de esta forma también se abre una posibilidad relacional entre habitantes de la misma ciudad, una posibilidad que va más allá de las dicotomías de amigo-enemigo, bueno-malo, para encontrarse en la comunalidad del dolor vivido.

El tipo de miradas y experiencias que el museo suscitó deja certezas claras sobre el peso del dolor y la pérdida en la historia del barrio, y también enseñanzas muy claras. Tanto las entradas en el libro de registro como las cartas que se escriben dan cuenta de ello:

¿Y quién dijo que la gente no siente? ¡Dios mío! Por favor... (24-07-00)

“Y los muertos aquí la pasamos muy bien entre flores de colores” Mecano

Vecino(a):

Pero sería mejor que estuviesen con nosotros. Sabe que triste es o fue ver todos esos cadáveres desangrarse y morir en silencio, chismes, gritos de los demás.

Sabe que es triste es o fue enterrar, maldecir, llorar, rezar y ver inerte en una caja más patética que la muerte a nuestro ser amado.

Sabe, es triste y duele, pero más triste y doloroso es que ignoremos que también somos culpables así no hayamos matado al fulanita aquel de cualquier sector de nuestro oscuro barrio.

Del reconocimiento se avanza acá a las consideraciones de responsabilidad social, a enfrentar el peso del silencio, la indiferencia y los modos de recordar a los muertos. Los actos de lecto-escritura de las cartas y las entradas en el libro de registro se constituyen en otras avenidas de expresión y en elementos centrales de la pedagogía colectiva cívica. Escribir la carta y entregarla representarán otros actos relacionales en los que a través del lenguaje escrito se activa la mirada hacia el futuro. Los actos de ver y leer en el museo, la calle o la casa invitan a la crítica individual y comunitaria; invitan a una mirada crítica de la historia y las responsabilidades sociales que -como nos dice el escritor de la última carta- no pueden ignorarse. Es precisamente este tipo de cuestionamiento el que puede sustentar un posible proceso de reconciliación comunitaria.

El hecho de que el bus recorrió y abrió sus puertas en todos los sectores del barrio, sin registrar ningún incidente, atestigua de los lo-

gros, del reconocimiento y el respeto que el proyecto tuvo aún cuando se vivía una de las épocas de más aguda confrontación armada. En los días previos a la apertura del bus museo se habían presentado numerosos enfrentamientos armados entre las bandas y en dos ocasiones se quebró el acuerdo implícito de respetar los eventos comunitarios. Como organizadores de este evento temíamos, además, que al portar el bus fotos y objetos de personas que habían estado involucradas en el conflicto, éste se convirtiera en blanco de rabias y agresión. Pero esto no sucedió y el bus como objeto cultural en movimiento cruzó las fronteras simbólicas y físicas del territorio y fue creando otro tipo de topografía y movimiento. Esto en parte fue posible por el trabajo comunitario que durante un año adelantaron los líderes locales en sus sectores, informando sobre el propósito del proyecto y sus lazos con otras propuestas comunitarias que buscan fortalecer al barrio en tanto comunidad (como el festival anual Calles de Cultura o el Comité Interinstitucional). Tiene también que ver con el impacto de los procesos previos de recuperación de memoria y de la misma expectativa que el bus-museo creó ante los habitantes de la comunidad. Durante los diez días que estuvo abierto el bus-museo fuimos testigos de cómo sus visitantes se convirtieron en difusores y promotores, compartiendo con otros vecinos sus reacciones, sus descripciones de lo que allí había y su propósito. Este modo de difusión es en sí mismo un proceso de resignificación y de transmisión desde la experiencia perceptiva y emocional de los habitantes del barrio.

Durante la celebración final, la metáfora del objeto puente se reviste de nuevos significados. La celebración retoma a la calle y al recorrido como espacios expresivos y rutas a recorrer, estableciendo conexiones entre el presente y el futuro, entre sectores y vecinos, entre visitantes y visitados a través de las cartas anónimas. En esta celebración final se reto-

man elementos claves de las celebraciones carnalescas y lúdicas de esta región: los mimos, la música, los zancos y la procesión. Los mimos, montados en bicicletas -el medio más común y generalizado de movilización en y dentro del barrio-, iban cargados de sonrisas pero el acto de la entrega era en silencio, desmontándose de la bicicleta para hacer una reverencia que diera cuenta del significado poderoso del objeto que entregaban. Con seis comparsas que recorren los sectores del barrio entregando cartas, la celebración final extiende la imagen de movimiento del bus museo y la metáfora del cruzar fronteras. Posteriormente, las comparsas se unen en un desfile final que irrumpe cargado de alegría y sentimientos de futuro, mientras marcha por la calle principal del barrio. Las comparsas y los mimos en bicicleta recuperan el ambiente festivo y la celebración como espacios neutrales activos desde los que es posible congregarse al barrio.

La celebración final se desarrolla como un acto colectivo y festivo que tiende un puente profundamente íntimo entre el vecino anónimo que escribió la carta y aquellos quienes la leen, entre los que abren las puertas de las casas y los que van por las calles, entre mimos, zanqueros y marchantes y los que se aglutinaron en las calles:

Yo creo que las cartas entraron mucho más que todos esos recuerdos de ese bus, para nosotros que fuimos recolectores, esas cartas fueron algo muy especial por las frases y palabras bonitas, porque llenaron, porque mientras estuvimos en el museo, todo el barrio Antioquia estuvimos terapiados con esto del recuerdo. Las cartas fueron esa cura, como una sanación a todas las cosas que estábamos viviendo, un perdón que hubo.⁸

Una vez finalizado el proyecto de arte público, el grupo de jóvenes y mujeres líderes continuaron con el proceso comunitario a través del trabajo con niños y jóvenes del ba-

⁸ Citado por Mauricio Hoyos (2001:124).

rrio. Con entusiasmo y en medio de grandes dificultades,⁹ este grupo fomentó actividades culturales y deportivas y se proyectaron como líderes y actores de paz.

Ingenuo sería pensar que el proceso desencadenado cambia de manera fundamental el tejido de relaciones, las tensiones y conflictos en el barrio Antioquia. El proceso, sin embargo, puso en movimiento una serie de posibilidades que abarca tanto la experiencia estética como el imbricado universo de resignificación cultural, la elaboración emocional y reflexiva entre aquellos a quién esta intervención estético-comunitaria tocó de una u otra manera: los duelos elaborados, las pequeñas reconciliaciones, el exorcismo de ciertas penas y -como lo dice la líder citada- la posibilidad del perdón a nivel local. Este imbricado universo de acciones resignificadas por un proceso de interacción social a través del arte público ilustra la trayectoria y emociones que acompañan procesos sólidos de construcción de paz a nivel local.

Entre muchas otras, la anécdota de la foto de la hermana de Estela nos sugiere cómo se vivió ese juego de posibilidades:

“No fue fácil para Estela entregar la foto de su hermana pues ella representaba el único objeto que preserva su memoria. Pero Alejandra la convenció cuando le explicó que esta foto estaría junto con muchos otros objetos en un museo rodante que exhibiría los objetos significativos de las memorias de los habitantes

del barrio. Y Estela -quien a diario notaba el hueco que había dejado el cuadro ausente- pudo comprobarlo cuando entró al bus museo y emocionada vio la foto de su hermana en una vitrina de vidrio y aluminio iluminada por cientos de bombillas incandescentes. Días más tarde, su otra hermana visitó el bus sin saber que la foto estaba allí. Con lágrimas en sus ojos, Mirta reconoció y remiró la foto tantas veces vista, mostrándosela a sus compañeras de la nocturna y sumiéndose en la nostalgia. Mientras, los ojos de otra compañera se aguaban también y ella se mantenía silenciosa y sobrecogida. Más tarde ella comentaría con una amiga la pena que sentía al reconocer el dolor de su compañera por la pérdida de su hermana, y el suyo propio pues su marido esta pagando condena por el asesinato de esta joven” (Riaño 1999:79)

A nivel de la ciudad, el amplio despliegue que el proyecto de arte público comunitario recibió en los medios de comunicación atrajo a muchos que venciendo miedos y estereotipos cruzaron las fronteras imaginarias para visitarlo y para reconocer simbólicamente el impacto humano y material de la violencia como experiencias comunes entre los residentes de Medellín. El arte público comunitario y la recuperación de la memoria en este proyecto conjuraron temporalmente muchos de los fantasmas y miedos del presente abriendo las puertas para el encuentro a través del recuerdo, la visita o la fiesta, para la elaboración del duelo y la reconstrucción del tejido social. *La piel de la memoria* nos sugirió la importancia de pensar en la reconciliación social como un proceso paulatino de *civic literacy* que se apoya en intervenciones culturales y simbólicas para reconstruir lazos de vecindad, amistad o familiares que han sido debilitados por las violencias.

La piel de la memoria nos permite indicar desde una experiencia local la importancia de la legitimación simbólica de los reclamos de los dolientes y los modos en que las memorias históricas mediatizan las relaciones de los individuos con el presente y sus posiciones fren-

9 Como he anotado, el barrio continúa en una dinámica de enfrentamiento violento armado. Tiene largos periodos de tensión alternados con momentos de paz y de acuerdos de no-agresión. La proyección de liderazgo del grupo dinamizador ha tenido repercusiones muy importantes en el área de trabajo con los niños, el trabajo cultural con jóvenes a través del teatro y la danza y en la participación en la junta de acción comunal. Sin embargo, en un barrio en el que tradicionalmente los líderes han sido elegidos dadas sus conexiones políticas y clientelares o por sus nexos con los patronazgos del narcotráfico, el posicionamiento de este grupo de jóvenes y mujeres fue recibido por algunos de los líderes tradicionales con recelo.

te a la paz, la violencia, la reconciliación y la justicia. Estos elementos también juegan un papel central en los procesos nacionales de negociación cuando se convierten en una de las bases desde las que los diversos actores, incluido el Estado, definen y negocian sus posiciones. Las dimensiones simbólicas, humanas e intrasíquicas son fundamentales en la restauración de las confianzas, en los procesos individuales y locales de elaboración del duelo y en los procesos de paz que se vislumbren con un margen de sostenibilidad. Sin embargo, y regresando a la idea de la naturaleza social y política de nuestras heridas sociales, los intentos de una sociedad por lidiar con un pasado de terror y dolor tienen que estar liderados por procesos de administración de justicia y establecimiento de responsabilidades sociales. Estos procesos deberán responder efectivamente a los reclamos por justicia, por el reconocimiento de las historias que se han silenciado, de las atrocidades cometidas y la responsabilidad estatal, mientras que consideren las avenidas justas para la reparación social. En este sentido, es importante entender el alcance limitado de una intervención artística que opera en el ámbito cultural.

El uso del arte y la memoria como campos de interacción y testimonio social nos permiten reformular el campo de acción social de los procesos de reconciliación. La reconciliación es reformulada, más que como silenciamiento del pasado, como una fuerza, un deseo-pasión, desde el que nos enfrentamos con el pasado. Esta mirada hacia el pasado involucra un retorno a los sentidos a través del reconocimiento del dolor y de una memoria relacional donde experiencia, testimonio y reconocimiento se entrecruzan. Los procesos de reconciliación proporcionan una estructura y un marco temporal para reconocer el sufrimiento, elaborar los duelos y para encarar la desestructuración del mundo social por la violencia. Un *proceso* humano, social y cultural que propicia lugares colectivos de testimo-

nio acerca del pasado, y desde los que las sociedades e individuos pueden estar mejor equipados para reclamar la verdad y la justicia, para recrear una comunidad moral.

Bibliografía

- Ángel, A. M. Fernández, A.M. Jaramillo y J.I. Zapata, 1995, *Combos y cambios. Reflexiones psicoanalíticas en un proceso de paz entre bandas juveniles*, Alcaldía de Medellín, Medellín.
- Eddy, P., H. Sabogal y S. Walden, 1988, *The Cocaine Wars*, Norton, New York.
- Escobar, Arturo, 2001, "Culture sits in place: reflections on globalism and subaltern strategies of location", en *Political Geography* No. 20, pp.139-174.
- Feitlowits, Marguerite, 2001, "Entrevista con Doris Salcedo", en *Crimes of War Magazine. Suplemento Cultural*: <http://www.crimesofwar.org/cultural/doris>, entrada Agosto 28, 2002.
- Henao, J.I. y L.S. Castañeda, 2001, *El Parlache*, Ed. Universidad de Antioquia, Medellín.
- Hoyos, Mauricio, 2001, *La piel de la memoria*, Corporación Región, Medellín.
- Kleinman, A., V. Daas y M. Lock., editores, 1997, *Social Suffering*, University of California Press, Berkeley.
- Reyes, A.M, 2001, "Horrorific Beauty: Commemoration and the Aestheticization of Violence in Contemporary Colombian Art", Trabajo presentado al seminario *Nuevas perspectivas en el estudio del conflicto social*, Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (LACIS), University of Wisconsin, Madison, marzo 23.
- Riaño, Pilar, 1999, "La piel de la memoria", *Nova y Vetera* No.36, agosto-septiembre, p. 79-85.
- , 2000, "La Memoria viva de las muertes: lugares e identidades juveniles en Medellín", en *Análisis Político*, IEPRI, Bogotá, diciembre, pp.23-39.

Coaliciones fantasmas, esencialismos políticos y corrupción

Felipe Burbano de Lara

Profesor-Investigador de Flacso-Ecuador

Mail: fburbano@flacso.org.ec

Fecha de recepción: noviembre 2004

Fecha de aceptación y versión final: noviembre 2004

Resumen

Este artículo reflexiona sobre la inclinación de los partidos políticos ecuatorianos a ocultar sus pactos y acuerdos. Sostiene que el funcionamiento de “coaliciones fantasmas” -como las ha definido el politólogo Andrés Mejía- hay que explicarlas en la necesidad de los partidos y de sus líderes de sostener -en el espacio público- identidades ligadas a principios de legitimación política y valores éticos irreductibles. La negociación política y los pactos con el gobierno, inevitables en democracia, son entendidos como daños irreversibles a la identidad política, un mestizaje inaceptable desde el punto de vista de la imagen pública. De allí que los acuerdos deban ser ocultados, negados, aún cuando la práctica cotidiana les empuje a buscarlos constantemente.

Palabras clave: Alianzas fantasmas, identidad política, espacio público, partidos políticos, liderazgos, corrupción

Abstract

This article reflects upon the trend of the Ecuadorian political parties of hiding their pacts and agreements. It sustains that the functioning of the "phantom coalitions" -as they have been defined by the politologist Andrés Mejía- should be explained in the necessity of the parties and their leaders, of maintaining, in the public scenario, identities that confirm the political legitimation and irreducible ethic values. The political negotiations and the agreements with the government, all inevitable in a democracy, are understood as irretrievable damages to the political identity, as unacceptable merge according to the point of view of the public image. Thus, these pacts should be hidden, denied, done under the table, eventhough the daily practice obliges to look for them constantly.

Key Words: Phantom coalitions, Political Identity, Public Sphere, Political Parties, Leaderships, Corruption

La práctica de los partidos políticos ecuatorianos, en el marco de las instituciones y los espacios creados por la democracia, se mueve en dos lógicas contradictorias y difíciles de aprehender: mientras en la escena pública reafirman constantemente sus diferencias y oposiciones, en un ámbito privado -casi habría que decir secreto- negocian y pactan acuerdos de manera constante. Algunos estudios sobre cultura política y gobernabilidad en el Ecuador han puesto mayor énfasis en la dinámica de conflicto que en la de negociación. Los problemas de gobernabilidad más estudiados -por ejemplo, la pugna de poderes- han sido interpretados justamente como resultado de una cultura política que se orienta por el conflicto y no por la búsqueda de acuerdos (Hurtado 1990, Burbano de Lara y Rowland 1998, Sánchez-Parga 1998). Se podría establecer también la existencia de una fuerte corriente de opinión pública que atribuye las dificultades de la democracia a la incapacidad de los actores para lograr acuerdos mínimos como sustento de un proyecto nacional e institucional. La ausencia de acuerdos básicos se ha convertido en una lamentación constante de analistas y comentaristas mediáticos. La inclinación de los actores políticos a confrontar entre sí encuentra, en la mayoría de análisis, una explicación en los cortes regionales, étnicos, de clase, de género e ideológicos que atraviesan a la sociedad ecuatoriana. Un contexto general de fragmentación y rupturas sobre el cual se levantan las grandes disputas.

Sin embargo, en algunos trabajos recientes, el politólogo Andrés Mejía ha lanzado una perspectiva distinta de análisis respecto de la política ecuatoriana (Mejía 2004, Mejía, Araujo, Pérez-Liñan, Saiegh y Pachano 2004). Ha mostrado el reverso del conflicto, esto es, una práctica constante de negociaciones y acuerdos entre partidos, desde una lógica que llama muy acertadamente “coaliciones fantasmas”¹. Sus trabajos muestran que buena

parte de las reformas económicas propuestas para implantar un modelo neoliberal en el Ecuador, se han alcanzado gracias a alianzas multipartidistas en el Congreso promovidas por el Ejecutivo. No han venido -como suele creerse- del uso indiscriminado de los poderes legislativos extraordinarios que la Constitución reconoce al Presidente de la República desde 1984. De acuerdo con su trabajo, al menos la mitad de las reformas económicas propuestas por los ejecutivos fueron aprobadas por coaliciones multipartidistas. Los presidentes han tenido mayor éxito en el Congreso con sus iniciativas de reforma económica que con sus propuestas legislativas en otras áreas. Detrás de esta problemática aparece como tema de fondo el difícil “maridaje” entre la democracia y las reformas neoliberales en el Ecuador durante los últimos 20 años.

El trabajo de Mejía muestra que a pesar de su confrontación constante en el escenario público, existe una tendencia fuerte en los partidos políticos a pactar y formar coaliciones por debajo de la mesa. No se trata de alianzas duraderas para llevar a cabo proyectos nacionales, sino acuerdos transitorios para empujar reformas puntuales. Las negociaciones han favorecido acuerdos globales (“*wholesale agreements*”) con los partidos, antes que negociaciones al menudeo (“*retail*”) con diputados sueltos. Los legisladores obtienen mayores beneficios cuando negocian como parte de un bloque partidista que cuando lo hacen individualmente. Los estudios de Mejía señalan que la cooperación de los partidos con el Ejecutivo se traduce en una serie de beneficios concretos, gracias a los cuales pueden mantener viva la relación con sus

1 Otro autor que subraya la tendencia de negociación y búsqueda de consensos en el sistema político ecuatoriano es Jorge León, quien analiza el tema desde el corte regional de la sociedad ecuatoriana. León sostiene que el empate de poder entre sierra y costa ha llevado a los actores sociales y políticos a buscar negociaciones y consensos permanentes para sostener el equilibrio del sistema (León 2003).

clientelas sociales. Todo esto hace ver que existen fuertes incentivos para negociar y pactar con el Ejecutivo.

El tema interesante, sin embargo, es por qué los partidos deben esconder sus negociaciones en el ámbito público. ¿Por qué las coaliciones se vuelven fantasmas? ¿Por qué no se las esconde? Me parece que se trata de un problema fundamental cuya presencia introduce una suerte de esquizofrenia en la política ecuatoriana, un doble juego muy difícil de sostener entre lo público y lo secreto, entre lo público y lo fantasmal, que corroe la legitimidad del sistema político. En el mediano plazo, la lógica de pactar y esconder los acuerdos ha restado credibilidad a los mismos partidos -a pesar de los beneficios obtenidos- y a las instituciones democráticas. Como señala Mejía, los procesos democráticos de rendición de cuentas se atrofian gracias a esta lógica fantasmal de acuerdos. La misma racionalidad de pactar por debajo de la mesa exige neutralizar la acción de aquellas instituciones que tienen bajo su responsabilidad los procesos de rendición de cuentas. Los incentivos que pueden tener para pactar, y los beneficios que efectivamente se logran, se consumen en el mediano plazo por el daño general que producen sobre la legitimidad democrática. La racionalidad inmediateista de los partidos se convierte, en el mediano plazo, en una gran irracionalidad. ¿Por qué los partidos han preferido erosionar la confianza de la sociedad en ellos y en el sistema democrático en lugar de publicitar sus entendimientos?

Mejía cree que los partidos ocultan las alianzas para no verse afectados por el desgaste que ha significado en estos 20 años llevar adelante programas impopulares de reforma económica. Como se ha visto en todo este tiempo, la implantación de programas de reforma estructural ha producido deterioros muy rápidos de las popularidades presidenciales. Al ser socios fantasmas de la reforma, los partidos empujaron los cambios, recibieron prebendas, pero no asumieron públicamente su responsabilidad.

Si esta explicación resulta acertada, tenemos entonces que la racionalidad cortoplacista de los partidos termina convirtiéndose en un suicidio. Luego de 25 años, casi todos los partidos importantes de la etapa democrática han pasado por el poder y han sufrido, sin contemplaciones, el desgaste de programas económicos impopulares. De nada les ha servido, pues, su juego de alianzas fantasmas.

La explicación de Mejía tendría sentido si encontráramos en la política ecuatoriana una tradición de cooperación entre los partidos que se haya roto en los años 80 y 90 por la implantación de reformas económicas neoliberales. Podríamos plantear la pregunta de otra manera: ¿si no habrían estado de por medio los programas impopulares de reforma económica, los partidos habrían transparentado sus alianzas? ¿Se habría dado una lógica distinta de cooperación? Mi hipótesis es que no, sino que hay un mecanismo que opera desde el interior de la política ecuatoriana y que lleva a los partidos a seguir una lógica de exclusión. Se trata de una tradición formada a lo largo del siglo XX que la democracia no ha podido superar. El peso de las tradiciones ha sido mucho más fuerte que la capacidad de innovación política abierta por la democracia. Bastaría, a modo de ilustración, mirar rápidamente el proceso de transición a la democracia (1976-1979) para descubrir algunas líneas de conflicto y exclusión entre sus principales actores. Citaré solo algunas de ellas: Assad Bucaram, líder del principal partido en el momento de la transición -Concentración de Fuerzas Populares- fue impedido de participar en las elecciones como candidato a la presidencia de la República cuando todo hacía pensar que podía ser el ganador. Los partidos modernos, que debutaban en la vida política en el momento de la transición, estaban convencidos de que los partidos tradicionales, de corte oligárquico y aristocrático, constituían un obstáculo para la consolidación democrática.

ca y que debían, en consecuencia, ser superados históricamente. Los partidos tradicionales, a su vez, impugnaron el proceso de retorno por considerarlo una maniobra de la dictadura para favorecer a los partidos de la modernización estatal. Los partidos de la izquierda marxista, entre tanto, veían con sospecha y recelo ideológico el retorno a una democracia burguesa considerada como una democracia de fachada. Y los militares, en alianza con los partidos modernos, creían que la versión menos ilustrada del populismo -Assad Bucaram debía estar fuera del proceso, como de hecho lo estuvo. Con estos ejemplos solo quiero señalar algunas líneas de exclusión presentes durante la transición y que marcaron -desde el inicio- la dinámica del conflicto en la recién instaurada democracia. Entre estos actores no se dio un pacto fundacional que legitime plenamente la cooperación democrática y que fuese roto -años más tarde- por la implantación de las reformas económicas neoliberales. Las reformas, que comienzan a ponerse en marcha desde 1984, simplemente crean nuevas líneas de oposición y conflicto entre fuerzas movidas por conductas excluyentes.

En otro trabajo hemos definido al sistema de partidos que se configura con la transición -y que opera con pequeñas variantes durante las décadas de los 80 y 90- como un sistema de “pluralismo polarizado” (Burbano de Lara y Rowland 1998). Se caracteriza por tener entre 4 y 6 partidos con capacidad para competir electoralmente, con posibilidades de alianzas para formar mayorías, y con fuerza suficiente para el chantaje. Lo de “polarizado” alude, sin embargo, a la distancia simbólico política que los separa. Esa distancia es una convergencia de concepciones ideológicas, morales y de rivalidades personales entre los líderes partidistas. A los partidos políticos ecuatorianos les separa de manera profunda sus maneras de entender y actuar la política. Se trata, creo yo, de un fenómeno de culturas políticas largamente sedimentadas, disímiles e irreductibles, que se

manifiesta en la forma cómo los partidos y sus líderes construyen las identidades en el espacio público. Pero esas culturas políticas no sólo se refieren a ideologías y valores morales que reivindican -esenciales, irreductibles-, sino al mecanismo que opera desde el interior de las construcciones identitarias.

El juego de las identidades

Me atrevería a pensar que se trata de una vieja tradición que nos remite a los enfrentamientos entre conservadores y liberales a finales del siglo XIX y comienzos del XX, al apareamiento del populismo en la década de los 30, al peso de la tradición marxista en la izquierda ecuatoriana y la expansión del discurso de modernización en los años 60 y 70 (Burbano de Lara 1998, De la Torre 1996 y 2000). Todas estas construcciones discursivas definen su posición política a partir de una identificación con un conjunto de principios ideológicos y valores morales considerados esenciales. Lo interesante, sin embargo, es el doble juego que describen: lo esencial alude tanto a una noción de pureza, de cualidad interna de las ideas y valores defendidos, como también a un posicionamiento dentro de un campo de múltiples fuerzas, de múltiples despliegues retóricos. Se aplica muy bien el concepto de antagonismo desarrollado por Laclau (1990 y 1993) para explicar la formación de identidades políticas. De acuerdo con este autor, toda identidad que se construye a partir de la afirmación de unos valores y principios considerados esenciales, hace de la presencia del otro, del adversario, un “accidente”, un obstáculo a mi realización plena. El ejemplo perfecto de la política ecuatoriana puede ser Velasco Ibarra. Toda la retórica velasquista constituye una afirmación permanente de unos principios políticos y valores morales esenciales, absolutos, de los cuales depende la buena convivencia social. Velasco

se convierte en guardián de esos principios y valores frente a la presencia corruptora de conservadores, liberales y socialistas. Incluso puede ser que algunos principios y valores sean compartidos con liberales, conservadores y socialistas, pero lo que distingue a Velasco es la fuerza moral, la firmeza, la convicción con la que los defiende. En el caso de Velasco, los principios esenciales deben encarnar en el pueblo, entendido como el único sujeto auténtico de la política. En esta lógica de construcción identitaria, la presencia del otro siempre es percibida como una impureza, como un obstáculo y una amenaza para la realización plena de los valores esenciales de los que depende la buena vida social.

Creería que es dentro de este juego donde hay que entender la constitución de los liderazgos personalistas en la política ecuatoriana, cuya figura paradigmática es justamente Velasco. Los líderes intentan constituirse en una relación íntima, de proximidad absoluta, con unos principios y unos valores esgrimidos como esenciales. La cualidad moral de los liderazgos depende de una suerte de identidad total entre el ser y la esencia. Laclau sostiene que las identidades políticas, a pesar de su retórica esencialista, requieren un “afuera”, un “exterior” para constituirse. La presencia del otro es necesitada para afirmar mi propia esencialidad (Laclau 1990 y 1993). Si “el otro” no estuviera presente, y si no lo estuviera como impureza, no tendría frente a quien desplegar y exhibir mi condición esencial. En un campo político caracterizado por un pluralismo polarizado, las dinámicas de construcción de identidad describen una multiplicidad de antagonismos, que deben ser minuciosamente trabajadas y descritas para comprender mejor la dinámica del conflicto en la política ecuatoriana². Mientras mayor presen-

cia de fuerzas políticas se pueda establecer en el escenario, más obstáculos, más límites, más impurezas, encontrará cada identidad para realizarse plenamente.

Uno de los méritos que puede atribuirse a estos 25 años de democracia es haber constituido un espacio público como resultado de un ejercicio de las libertades políticas. Les guste o no a los partidos y a sus líderes, la política no puede escapar al espacio público, y cada vez puede hacerlo menos. Es el drama, si se quiere, que persigue a las coaliciones fantasmas. Hay que entender, por tanto, el modo cómo los partidos y sus liderazgos se presentan a sí mismos y cómo se dan una identidad en la escena pública de la democracia. En el campo estrictamente político, a la distinción esencia-accidente, interior-exterior corresponde la distinción amigo-enemigo. Esa lógica, en la definición de Carl Schmitt (1984), distingue un grado intenso de unión y separación, simultáneamente una asociación y una disociación. En el concepto de antagonismo político de Schmitt, la alteridad del otro es total, no hay mediación ni consenso posible. La lógica amigo-enemigo tiene como presupuesto la guerra, es decir, la realización extrema de la hostilidad. ¿No describen estas imágenes el despliegue de la política ecuatoriana en la escena pública?

En este punto, habría que preguntarse sobre la otra dimensión de la política a la que se enfrentan los partidos ecuatorianos bajo la democracia, esto es, al proceso continuo pero oculto de negociación subrayado por Mejía. En primer lugar, la negociación sugiere un punto límite a la lógica amigo-enemigo. Hay un umbral del conflicto que una vez alcanzado desata la lógica de negociación. No obstante, y es esto lo significativo, lo que podría interpretarse como un gesto de realismo democrático, que aleja finalmente a la política ecuatoriana del presupuesto de la guerra, se convierte en un juego secreto, oculto. Ahí está el gran problema. El

2 Fernando Bustamante (2000) ha intentado describir esa constelación de culturas políticas a partir de las cuales se forman un conjunto de líneas de exclusión.

realismo político es objeto de un cuestionamiento público.

¿Cómo explicar este comportamiento? A mi juicio, la negociación tiene que ser ocultada porque atenta contra el principio identitario de amigo-enemigo, de esencia-accidente, proclamada en la escena pública. La negociación lanza una sombra, una mancha, a la cualidad moral de los líderes políticos. Lo que en un campo con mayor tradición democrática sería una práctica normal de negociación, de dirimencia de los conflictos, en la política ecuatoriana aparece como un acto de contaminación, de corrupción identitaria, de daño irreversible de la moral. De esta manera, la política ecuatoriana establece una esquizofrenia entre lo público y lo privado: en lo público opera siempre una declaratoria de guerra y enemistad unida a proclamas de pureza moral e ideológica, mientras en el ámbito de lo privado se puede negociar y pactar todo. El dualismo significa, sin embargo, que la negociación no desarma la relación amigo-enemigo. En la medida en que esa lógica no llega a desarticularse, serán necesarias negociaciones entre sujetos sin rostro, sin diálogo, sin reconocimiento mutuo. Es muy llamativo que los partidos actúen en la escena pública como si nunca hubieran ocurrido las negociaciones, como si nunca hubieran pactado entre ellos o con el gobierno. Hay un daño a la moral política que intentan esconder hasta el final.

El pueblo como escenario

Carlos de la Torre (1997) ha planteado que en el Ecuador las relaciones entre Estado y sociedad operan por mediación del concepto de pueblo antes que por el de ciudadanía. Si nos apoyamos en su interpretación, tenemos entonces que el discurso de las elites políticas intentaría representar de distintas maneras al pueblo. No hay nada de novedoso en este planteamiento, por su puesto. Una de las ca-

racterísticas de la democracia, como lo subraya constantemente la tradición liberal, es la tensión permanente entre la vigencia de las libertades individuales y la necesidad de constituir al pueblo como una voluntad colectiva. En una cultura política con una fuerte tradición populista y débil tradición liberal, la voluntad colectiva que debe encarnar el pueblo se coloca siempre más allá de las libertades individuales, reconocidas de manera muy selectiva. La retórica populista ha deificado al pueblo, convirtiéndolo -en palabras de Velasco- en el único sujeto auténtico de la política. Mi interpretación es que la escena pública de la política ecuatoriana se define por una disputa constante entre juegos discursivos que intentan fusionar al pueblo con diversas expresiones ideológicas y morales. La “seducción del pueblo”, su “conquista emocional”, se lleva a cabo desde discursividades que reivindican distintos presupuestos de legitimación política y de pureza moral³. Las diferencias simbólico-ideológicas de los partidos se proyectan en las estrategias de seducción del pueblo. Las elites políticas afirman su propia enemistad a través del pueblo, que no es más que una entelequia que se construye retóricamente en los espacios públicos. La conquista emocional del pueblo, la seducción populista, sólo pretende legitimar las posiciones de guerra de los partidos y de sus líderes⁴.

La moralidad política se exhibe ante el pueblo como fidelidad a unos principios. De la exaltación a esa fidelidad depende la calidad moral de los líderes y de sus partidos. Mostrar una imagen no contaminada es, por lo tanto, una condición para conquistar y se-

3 Sobre la idea de seducción ver el trabajo de Carlos de la Torre (2000). Sobre el concepto de “conquista emocional” ver Bustamante (1996).

4 Eso hemos visto, por ejemplo, en las elecciones locales del 15 de octubre: los partidos ganadores interpretaron su triunfo como una acumulación de fuerzas en su confrontación con el presidente. La elección se asumió como un juego para acumular o perder fuerza en una guerra.

ducir al pueblo, les da –como suelen decir ellos- autoridad moral para hablar. Los líderes están obligados a exaltar su estatura moral como parte de una afirmación irreductible de su posición en el campo político. En este contexto, las negociaciones políticas sólo pueden ser entendidas como un contacto con aquello que públicamente se denuncia como impuro, como contaminado; de allí que deban transcurrir en el patio trasero, de espaldas a la luz pública. El discurso de la corrupción calza perfectamente en esta lógica. La denuncia constante del otro como corrupto tiene un doble propósito: descalificarlo moralmente y realzar mi propia condición moral, o condenarnos moralmente todos. Lo corrupto se asemeja claramente con un daño irreversible del alma, de los buenos valores, de la corrección ética. Del lado opuesto, quienes son corruptos y no poseen un discurso moralizador de las identidades en la escena pública, se han encargado de denunciar a los moralistas como falsos apóstoles de la política, como actores de una farsa. Su consigna es “todos son iguales”, con la cual pretenden justificar la corrupción. Ellos expresan el lado oscuro, negro, de las almas políticas.

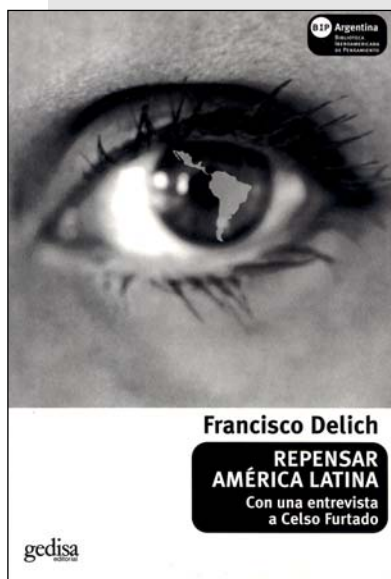
La conclusión a la que ha llegado una amplia mayoría de los ecuatorianos es que la confrontación es sólo una mascarada; una forma de exhibirse públicamente con fines electorales, puesto que se pacta por debajo de la mesa. En suma, una gran mentira. Me parece difícil creer que todo se trate de una mascarada, de una capacidad infinita de los partidos y de sus líderes para inventar un juego de rivalidades. Se trata de una rivalidad auténtica, no plenamente consciente, que nace de una profunda creencia en la pureza de las identidades políticas, lo que a su vez tiene mucho que ver con una manera de entender “lo político”. Si los partidos siguieran la lógica de su confrontación pública, los ecuatorianos nos habríamos matado hace mucho tiempo, como lo han hecho pueblos vecinos. No

obstante, nuestros partidos se detienen ante el abismo, no llevan su lógica de lucha hasta las últimas consecuencias, han definido un umbral de su propio conflicto. Han hecho de la guerra sólo el presupuesto y no el fin de su confrontación, para usar palabras de Schmitt. ¿Por qué entonces esconden sus pactos y arreglos? Para conservar su imagen pública. Para las identidades puras, la negociación y el pacto son un mestizaje inaceptable. Reconocer el pacto equivaldría a desvirtuar la identidad que se han dado en la escena pública de la política. De este modo se instaura un juego bastante esquizofrénico: los pactos por debajo de la mesa van acompañados de esfuerzos desesperados por conservar la identidad política. No es un juego mentiroso, es un juego movido por un moralismo político, del cual no pueden escapar los partidos y sus líderes a la hora de posicionarse en el competitivo campo de la política democrática. En la escena pública son dioses, en la privada políticos de carne y hueso en busca de apoyos para los intereses de los grupos que los respaldan. La imagen de familiaridad y cordialidad que muestran las cámaras de televisión entre los diputados cuando están fuera de la batalla, contrasta fuertemente con la exaltación de las rivalidades que hacen en la escena pública. La política se mueve entre dos polos: el de los dioses, donde las esencias se contemplan a sí mismas, y el de los corruptos, en donde las almas han sido entregadas al diablo.

Bibliografía

- Burbano de Lara, Felipe y Michel Rowland, 1998, *Pugna de poderes: presidencialismo y partidos en el Ecuador: 1979-1997*, CORDES, Konrad Adenauer y Cooperación Española, Quito.
- Burbano de Lara, Felipe, 1998, “Cultura política y democracia: una aproximación a nuestros vacíos”, CORDES, Konrad Ade-

- nuer, Cooperación Española, Quito.
- Bustamante, Fernando, 1996, "Cultura política y ciudadanía en el Ecuador", en *Ecuador, un problema de gobernabilidad*, CORDES, Quito.
- , 2000, "Los partidos como orientaciones culturales", en *ICONOS* No. 9, FLACSO-Ecuador, Quito.
- De la Torre, Carlos, 1997, "Los usos de la categoría de pueblo y democracia", en *Ecuador Debate* No. 41, CAAP, Quito.
- , 1996, *Un solo toque. Populismo y cultura política en el Ecuador*, CAAP, Quito.
- , 2000, "Velasquista Seduction", en *Populist Seduction in Latin American*, Ohio University Press, Ohio.
- Laclau, Ernesto, 1990, *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*, Nueva Visión, Buenos Aires.
- , 1993, "Politics and the Limits of Modernity", en Thomas Docherty, editor, *Postmodernism, A Reader*, Harvest Wheatsheaf, Nueva York.
- León, Jorge, 2003, "Un sistema político regionalizado y sus crisis", en Víctor Breton y Francisco García, editores, *Estado, etnicidad y movimientos sociales en América Latina*, Icaria, Barcelona.
- Mejía, Andrés, 2004, "Ghost Coalitions, Economic Reform, and Democratic Accountability", trabajo presentado en la reunión de la Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Ontario, octubre 30.
- Mejía Andrés, Caridad Araujo, Aníbal Pérez Liñán, Sebastián M. Saiegh y Simón Pachano, 2004, *Political Institutions, Policy-making Processes, and Policy Outcomes in Ecuador*, FLACSO-InterAmerican Development Bank, Quito.
- Schmitt, Carl, 1984, *El concepto de lo político*, Folios Ediciones, Buenos Aires.



Francisco Delich,
Repensar América Latina,
Gedisa, Barcelona, 2004.

Repensar América Latina nos invita a abandonar los prejuicios y a cambiar la mirada para entender la especificidad de la región y de su historia reciente, en particular, las transformaciones que se han dado con el nuevo milenio. El autor genera preguntas para analizar cuatro grandes problemáticas. La primera es la “revolución en el campo” que abarca desde transformaciones inducidas por la expansión del capitalismo hasta una comparación muy interesante de las reformas agrarias guatemalteca, boliviana, peruana y la modernización del agro en el Paraguay. La segunda transformación que estudia Delich es la “revolución en la ciudad”, donde se analiza el auge de las clases medias que lograron su movilidad social y su ciudadanía junto a la expansión de la educación, para en la actualidad vivir procesos de incertidumbre y movilidad social des-

cedente cuando la educación no garantiza un mejor acceso al mercado de trabajo ni la movilidad social. Además se analiza los cambios en las situaciones de marginalidad y exclusión de los grandes conglomerados que viven en las ciudades y se plantea el problema de estudiar cuáles son los mecanismos que los integran y los excluyen. La tercera problemática que discute el libro de Delich es la especificidad de la “revolución industrial” latinoamericana basada en la sustitución de importaciones. Se estudia cómo se articula un Estado que directamente promueve la industrialización, con pactos corporatistas con los principales beneficiarios de estas políticas, el desarrollo de la nación impulsada por el estado, la subordinación de las prácticas liberales de la democracia a las políticas que promueven la equidad y la movilidad social. La última sección discute la desarticulación de este modelo y plantea el estudio de la nueva situación en la que se conjugan por un lado las luchas por la creación de instituciones y prácticas para que se respeten los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, junto al acotamiento de la soberanía del estado y una mayor integración a los mercados mundiales.

Haciendo un recorrido por los textos clásicos de las ciencias sociales latinoamericanas, la estrategia del autor es desarrollar una propuesta teórica-metodológica de investigación en la que cuatro campos analíticos (el Estado, la nación, el mercado y la sociedad civil) sean vistos como unidades que evolucionan con su lógica específica y donde interesa analizar su articulación. Donde mejor se ilustra esta propuesta es en el estudio de la industrialización por sustitución de importaciones. Ésta se basa en una estrategia económica de crecimiento autosuficiente, con un Estado soberano que a su vez respeta la soberanía de los otros

Estados, y que es planificador y regulador económico. La sociedad civil se articula a través de pactos corporativos: es la exaltación del pueblo visto como un ser virtuoso que se enfrenta maniqueamente a la oligarquía y al clientelismo que permea a las instituciones del Estado. Ya que se privilegia el desarrollo nacional se subordinan las ciudadanías civil y política a la ciudadanía social.

Frente a este panorama, Delich demuestra cómo esta articulación entre estado, nación, sociedad civil y mercado colapsó por muchos motivos. En parte, porque no todos estaban incluidos en dichos pactos. Los pobladores urbanos que en gran parte viven del llamado comercio informal son un buen ejemplo. Además, muchas demandas de los movimientos sociales trascendieron a la lógica corporativa, presentando propuestas de autonomía como son las luchas por los derechos humanos. El mercado rebasó las limitaciones de las políticas proteccionistas y demostró las ineficacias, cuellos de botella y distorsiones de este modelo de desarrollo económico.

Por otro lado, este libro plantea el estudio de temas fundamentales para crear una agenda de investigación que ayude a comprender las dinámicas de nuestras sociedades. Por ejemplo, contrastando los excelentes trabajos sobre la oligarquía peruana de los años 60, Delich nos invita a estudiar el carácter y la forma del poder de las nuevas élites, tema que por lo demás ha sido descuidado. Delich también nos invita a estudiar a las clases medias que fueron analizadas sistemáticamente por última vez en los años 50.

Me quiero detener en dos aspectos de agenda de investigación planteada por Francisco Delich: el estudio de los mecanismos de integración de los marginales y el estudio de la ciudadanía. Con razón anota Delich, “la marginalidad se construye como un orden al margen de la legalidad” (p.73). Ejemplos de esto son la construcción de viviendas ilegales y la inserción en el trabajo informal. De esta

observación Delich pasa a sostener que la marginalidad tiene prácticas sociales que se desenvuelven fuera del Estado y fuera del mercado. Y concluye, a la manera de la vieja escuela de Francfort, que “la televisión reemplaza al púlpito, la escuela, la familia y la vecindad... las imágenes dicen más que los discursos, que la retórica y el logos” (p.74).

Para empezar, varios trabajos antropológicos y sociológicos demuestran las integraciones entre los mercados formal e informal. Además, los informales y quienes habitan en los barrios periféricos se auto-organizan y son organizados por los partidos políticos y por el Estado en redes clientelares que permiten el acceso, aunque sea limitado, a una serie de bienes y servicios, incluidos la información sobre con quién hablar y en nombre de quién para acceder a los derechos de salud, educación y hasta a puestos de trabajo. Los informales no viven en situaciones de anomia y desorganización. Al contrario, la organización es clave para su sobrevivencia. Sin organización no se pueden invadir terrenos, luchar por su legalización, ni conseguir obras de infraestructura. La organización de los informales y de los pobladores en dichas redes tampoco puede ser vista únicamente desde perspectivas utilitarias de intercambios de votos por favores. En muchos casos, sobre todo para los punteros y caciques que están cercanos a los políticos que trabajan en los barrios, estas relaciones crean sentimientos de solidaridad, de pertenencia a los partidos políticos e identificaciones tales como la de peronista.

Por último, varios estudios empíricos cuestionan las tesis de que las imágenes reemplazan a las palabras en la política latinoamericana. La imagen del espectador aislado y manipulado por las imágenes parece tener poca validez empírica pues varios estudios ilustran cómo las imágenes televisivas son discutidas en los barrios y analizadas en común.

Si bien las percepciones de desorganización, anomia y manipulación por parte de los

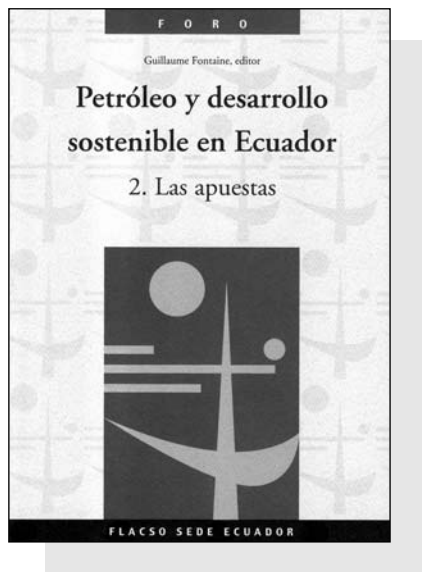
medios no llevan a preguntas fructíferas de investigación, me parece que las situaciones de ilegalidad en que los marginados viven nos ayudan a comprender las dificultades por la implementación de ciudadanías. Como lo demuestra elocuentemente Delich, la ciudadanía se conformó con características particulares en la región. Esta no se basó en el respeto a los derechos civiles que garantizan las libertades individuales de la arbitrariedad del Estado y de los ciudadanos poderosos. Tampoco siempre se respetaron los derechos políticos. A diferencia de las frágiles ciudadanías política y civil, la ciudadanía social fue la más favorecida a través de los privilegios de los partícipes en los pactos corporatistas, de las políticas distributivas del Estado, y de las políticas integradoras de la nación.

Las luchas por los derechos humanos y en contra de la corrupción ponen sobre el tapete la búsqueda de derechos civiles y la construcción de un Estado de derecho al que también se exigen libertades políticas, todo esto en un contexto de recorte de los derechos sociales. ¿Qué pasa con los marginales? ¿Qué tipo de luchas privilegian? ¿Buscan y pueden acceder a la ciudadanía? La ciudadanía política es la carta que tienen los marginales para ser tomados en cuenta y poder negociar el acceso a bienes, servicios y aún empleos. El voto, como dice Carlos Vilas, opera como su tarjeta de crédito. Pero este acceso limitado a derechos sociales no se basa en la igualdad de todos ante la ley, ni en los derechos y obligaciones que esta contempla. Más bien se accede a los derechos universales establecidos en las constituciones en calidad de personas especiales que son los clientes de un partido político tal, o que van en nombre de un político o de un notable particular. El problema es que esta búsqueda de soluciones a problemas concretos de la sobrevivencia, si bien puede ser exitosa en garantizar que la persona necesitada acceda a bienes y servicios, garantiza que este sistema basado en la desigualdad y en

la falta de derechos se perpetúe. Se crea un ciclo en el cual, como la igualdad ciudadana no garantiza la protección ante la policía o la atención en las dependencias estatales, los mecanismos no universalistas sino particularistas serán los que funcionen en obtener estos bienes tan necesitados.

Repensar América Latina, en definitiva, cumple con su objetivo al retornos a estudiar las complejidades de las diferentes transformaciones sociales con mecanismos teóricos que den cuenta de esta diversidad y que analicen las especificidades del mercado, el estado y la sociedad civil sin dogmáticamente sostener la preeminencia de alguno de estos campos. Pero este texto al igual que la mayor parte de reflexiones que generalizan sobre Latinoamérica privilegia las experiencias de los países grandes de la región. Creo que es un reto, a partir de las herramientas conceptuales de este texto, comparar las experiencias de los grandes con las de los países pequeños.

Carlos de la Torre
Profesor-investigador
Flacso-Ecuador



Guillaume Fontaine, Editor;
**Petróleo y Desarrollo Sostenible
 en Ecuador. 2. Las apuestas**
 Flacso, Quito, 2004

Aclaradas la regla del juego en el primer libro de la trilogía sobre la explotación petrolera en el Ecuador, este segundo libro aborda el impacto y las consecuencias para el país de la política petrolera y su relación con el desarrollo sostenible, como base para un examen de la sociedad y el Estado. *Las Apuestas* muestra el debate de los últimos 25 años y nos promete, para el futuro, la discusión de la democracia y el petróleo.

Cuatro temas y una diversidad de voces expresan el desarrollo del debate y el contenido. Las apuestas son sobre la experiencia, la política petrolera, los derechos territoriales y la consulta previa. Las voces vienen de representantes de fuerzas e instituciones comprometidos en la realización de la política petrolera ecuatoriana -en funciones de gobierno y

administración de entidades del Estado-, junto a las de líderes sociales e indígenas, académicos, expertos y consultores internacionales.

Un primer aporte del libro es dejar sentado que el petróleo no es un tema de expertos. Su problemática incorpora cada vez más en su discusión a pobladores, actores sociales y estudiosos de los temas. La riqueza que produce es de tal dimensión que su análisis es el centro de discusión, ya sea por la fuente y la calidad de los crudos, el precio de intercambio, la cantidad de productos obtenibles de su transformación y los usos que se le puede dar.

Un segundo aporte, y no menos importante, es sobre los temas del debate. Un examen de esa realidad implica observaciones analíticas sobre los impactos producidos por los intereses de las empresas contratantes, la legitimidad social de las actividades y la percepción que la sociedad tiene de la forma y manera de esa producción de riqueza, el destino de la renta y su distribución, la priorización de las necesidades que se cubren con los ingresos petroleros, los impactos en la cultura y las regiones de los territorios productores, todo ello a partir de los puntos de partida y de un acuerdo básico establecidos constitucional y jurídicamente.

La discusión sobre los recursos económicos plantea los intereses de tres posiciones: el Estado y el *Goberment Take*, los inversionistas y la rentabilidad, y la sociedad y la forma de distribución de la renta. El inversionista tiene en realidad dos intereses básicos: obtener el dominio y la propiedad sobre los recursos y optimizar la tasa de ganancia; por ello, las condiciones de contratación o tipos de contrato las convierte no sólo en disputa por los derechos sobre el subsuelo sino que, a la vez, parece estimular la competencia nacional entre países del área por mejores condiciones

contractuales (que signifiquen menores gastos e inversiones). El argumento es muy sencillo: la infraestructura ayuda a desarrollar mercados difíciles de financiar, por ello se defiende la idea de que el Estado aumente gastos de infraestructura en el desarrollo de las zonas petroleras. Pero además, los megaproyectos trascienden las fronteras nacionales: en el proyecto latinoamericano de integración, en aplicación de la Cumbre presidencial de Miami de 1994, consta la construcción de la carretera denominada Corredor de los llanos Caracas-Bogotá-Quito, de la que está en ejecución los tramos Baeza-Tena y Puyo-Macas en Ecuador y la Conexión vial Cuenca-Méndez-Morona (Ecuador-Perú) que está aprobado¹.

El Estado como responsable de la administración de los recursos y la distribución de los ingresos nacionales, debe dar cuenta de dos aspectos: el destino de la renta y (el *Government Take*) cuánto toma el Estado, es decir, cuánto corresponde a los ecuatorianos por la actividad extractiva del petróleo. Esta segunda expresión es propia de los inversionistas para medir su tasa de ganancia, pero la aplican como condición de negociación ante los estados y como estrategia de comunicación.

Para dejar claro este papel del Estado, es necesario resaltar que la renta petrolera es la remuneración internacional de un recurso natural nacional, entendida como remuneración a la propiedad, y no como sinónimo de ingreso. Se origina en la exportación y se distribuye por medio del gasto público; se distribuye después de haber ingresado al fisco nacional, es decir, después de la exportación. Por tanto, de la forma contractual se deriva el monto de la renta y es indicativo del valor de la propiedad (Mommer 1989:15-40). A menor participación tenemos una propiedad de menor valor. El precio se establece internacionalmente y la renta se distribuye a través del presupuesto. Por ello, lo que corresponde a

Ecuador significa el disfrute de su riqueza; sin embargo los datos que presenta el libro sobre el análisis de los impuestos pagados en el 2002 (p.64) muestran extrañamente que las compañías están trabajando a pérdida. Es decir, es el país quien se queda el “sin pecado y sin el género”, lo que implica preguntas sobre el control a los contratos, sus actividades derivadas y sobre el cobro de regalías.

Estas dos posturas nos llevan a un tercer actor: la sociedad (en la cual se procesa el necesario debate sobre el medio ambiente, la definición de la propiedad de la amazonía y el dominio de la naturaleza). Una voz en el libro nos dice: “Las compañías transnacionales, que consideran que el petróleo es un recurso estratégico para el nuevo milenio, por sus escasas reservas propias, al no poder cambiar de fuentes de energía, estarán más dispuestas a apoderarse de estos recursos y, en ningún caso, reconocerlos como derecho legítimo de los pueblos ancestrales de la región (p. 113).

No podemos dejar de lado que en esta discusión Ecuador, Colombia y Perú comparten una extensión amazónica rica también en petróleo, y que las compañías petroleras tienen el sueño de acceder al Amazonas, lo cual, en su lógica capitalista, no es posible si antes expropiar a las comunidades del dominio sobre el medio ambiente.

Las étnias apenas están siendo incluidas en la discusión. Una real inclusión implica el reconocimiento real -no simbólico- de la autonomía territorial de los pueblos indígenas, en tanto “una competencia reconocida y respetada externamente para disponer las propias normas respecto del territorio determinado” (p. 142). Es decir, el reconocimiento a su autodeterminación como pueblo. El mecanismo de la consulta previa establecido por el convenio 169 de OIT habilita espacios de comunicación para la legitimación de la explotación petrolera y de la contratación efectuada por el Estado, con resultados de reconocimiento de derecho fiscal, protección de me-

1 Ver www.iirsa.org

dio ambiente y la posibilidad de mejorar la distribución de ingresos petroleros y la redistribución equitativa de la renta petrolera (p. 208).

La aplicación del proceso de consulta previa, si bien es un avance, todavía no trasciende el carácter simbólico de la consulta. Es muy pronto poner en ella el único camino de discusión del futuro uso y disfrute de los recursos petroleros, para dar por inaugurada “una nueva etapa”, que haya transformado las tradicionales prácticas petroleras. Este debate aún requiere de mucha conversación y mucho estudio y elaboración.

En resumen, en cada página el libro genera una pregunta. Es una puerta de entrada a un debate sobre la democracia, su forma de relacionarse con el medio ambiente, la forma como dispone de los recursos naturales del subsuelo, y cómo comprendemos nuestra propia sociedad. Tal vez será el tema de la tercera parte de la triada.

Pedro Elías Galindo León

Doctorante en Ciencias Sociales

Flacso-Ecuador

Bibliografía

Mommer, Bernard y Asdrúbal Baptista, 1989, “Renta Petrolera y Distribución Factorial del Ingreso”, en Mommer, Bernard y Hans-Peter Nissen, coordinadores, *¿Adiós a la Bonanza? Crisis de la Distribución del Ingreso en Venezuela*, Ildis-Cendes-Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, Caracas.